

*Haciendo
paz*

*La realización del Seminario Haciendo Paz
y la publicación de este libro
han sido posibles
gracias a las siguientes entidades*

*Caracol
El Espectador
El Tiempo
Embajada de los Estados Unidos
Fundación Ideas para la Paz
RCN
Semana*

*Las instituciones que patrocinaron el Seminario Haciendo Paz
no asumen ninguna posición con respecto a los temas
que se tratan en este libro.
Los textos que aquí se publican reflejan solamente
los puntos de vista de sus respectivos autores.*

CYNTHIA ARNSON, ANA TERESA BERNAL,
ÁLVARO CAMACHO, FERNANDO CEPEDA,
HERNANDO CORRAL, GONZALO DE FRANCISCO,
CAMILO GÓMEZ, CARLOS LLERAS DE LA FUENTE,
ANTONIO NAVARRO, RAFAEL NIETO, MARCO PALACIOS,
RODRIGO PARDO, RAFAEL PARDO, DANIEL PÉCAUT,
LUIS FERNANDO RAMÍREZ, ALFREDO RANGEL,
MICHAEL SHIFTER, ÁLVARO TIRADO, LEÓN VALENCIA,
ALEJO VARGAS, JOAQUÍN VILLALOBOS

Haciendo paz

*Reflexiones y perspectivas del proceso de paz
en Colombia*

Cartagena, 9-11 de marzo de 2001

EDICIÓN A CARGO DE
FERNANDO CEPEDA ULLOA

*Primera edición: Embajada de los Estados Unidos
Fundación Ideas para la Paz
Bogotá, 2001*

ISBN 958-36-0077-6

Coordinación editorial: El Áncora Editores

Carátula: diseño de Camila Cesarino Costa

© Derechos reservados: 2001. Embajada de los Estados Unidos de América

www.usembassy.state.gov/colombia/

Teléfono: 315 0811 Ext. 2627

Fax: 315-2208

Carrera 45 No. 22D Bis-45

Bogotá, Colombia

Fundación Ideas para la Paz

www.ideaspaz.org

Teléfono: 610-5555 Ext. 234

Calle 100 No. 8A-55 Torre C Piso 9

Fax: 610-7620

Bogotá, Colombia

Preprensa digital: Servigraphic Ltda.

Separación de color: Elograf

*Impreso en los talleres de Formas e Impresos Panamericana,
quien sólo actúa como impresor*

Impreso en Colombia

Printed in Colombia

CONTENIDO

<i>PRESENTACIÓN</i>	11
<i>Anne W. Patterson</i>	
<i>INTRODUCCIÓN</i>	13
<i>Fernando Cepeda Ulloa</i>	
<i>INSTALACIÓN</i>	32
<i>Enrique Santos Calderón</i>	
<i>PALABRAS DE BIENVENIDA</i>	36
<i>James Williams</i>	

I. PONENCIAS Y DEBATES

<i>1. UNA REVISIÓN HISTÓRICA DE LOS PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA: ¿EL PROCESO O LA PAZ?</i>	41
<i>Marco Palacios</i>	
<i>2. SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL CONFLICTO Y EL PROCESO DE PAZ: UNA VISIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES</i>	51
<i>Luis Fernando Ramírez</i>	
<i>3. LA DESMOBILIZACIÓN DEL M-19, DIEZ AÑOS DESPUÉS</i>	66
<i>Antonio Navarro Wolf</i>	

4. 10 AÑOS DE ACUERDOS, 20 AÑOS DE PROCESOS DE PAZ, 40 AÑOS DE CONFLICTOS <i>Rafael Pardo Rueda</i>	75
5. LA DINÁMICA DE LOS DOS PROCESOS <i>Alfredo Rangel</i>	87
6. LOS ACTUALES PROCESOS DE NEGOCIACIÓN: ENTRE LA INERCIA Y LA INCERTIDUMBRE <i>Alejo Vargas Velázquez</i>	96
7. LA VISIÓN GUBERNAMENTAL SOBRE EL PROCESO DE PAZ <i>Camilo Gómez</i>	106
8. EL PLAN COLOMBIA Y LA PAZ <i>Gonzalo de Francisco</i>	133
9. HACIA UNA ESTRATEGIA DE ESTADOS UNIDOS CON RESPECTO A COLOMBIA <i>Michael Shifter</i>	146
10. COMPARACIONES DE LOS CONFLICTOS Y PROCESOS DE PAZ DE COLOMBIA Y EL SALVADOR <i>Joaquín Villalobos</i>	165
11. PERSPECTIVAS INTERNACIONALES; EFECTOS PARA PAÍSES VECINOS Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL <i>Cynthia Arnson</i>	175
12. EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LOS ACADÉMICOS ANTE EL PROCESO DE PAZ <i>Daniel Pécaut</i>	180

II. RELATORÍAS

1. *LA ESTRATEGIA DE PAZ DE LA ADMINISTRACIÓN
PASTRANA* 201
Fernando Cepeda
2. *EL PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
EN EL PROCESO DE PAZ* 204
Álvaro Tirado Mejía
3. *EL PLAN COLOMBIA Y SU CONTEXTO REGIONAL* 213
Rodrigo Pardo
4. *LA INFLUENCIA DEL NARCOTRÁFICO
EN EL PROCESO DE PAZ* 221
Álvaro Camacho Guizado
5. *EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL
EN EL PROCESO DE PAZ* 227
Ana Teresa Bernal
6. *LAS PROPUESTAS DE LA GUERRILLA Y SU
VIABILIDAD: CESE DE FUEGO Y HOSTILIDADES* 245
Hernando Corral
7. *EL FENÓMENO DE LAS AUTODEFENSAS* 252
León Valencia
8. *LOS PROCESOS DE PAZ: MÁS PREGUNTAS
QUE RESPUESTAS* 265
Rafael Nieto Loaiza

III. CLAUSURA

<i>EDUCAR PARA LA PAZ</i>	281
<i>Carlos Lleras de la Fuente</i>	

IV. ANEXOS

<i>ACUERDO DE LOS POZOS</i>	287
<i>APOYO DE LAS FUERZAS POLÍTICAS AL ACUERDO DE LOS POZOS</i>	289
<i>EVALUACIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN SOBRE EL PROCESO DE PAZ</i>	291
<i>TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA</i>	293
<i>INFORME DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA NACIONAL DE DIÁLOGOS DE LAS FARC-EP AL COMANDANTE MANUEL MARULANDA VÉLEZ</i>	297
<i>SITIOS EN LA RED: PROCESO DE PAZ</i>	310
<i>ÍNDICE DE PARTICIPANTES</i>	313

PRESENTACIÓN

El seminario «Haciendo Paz» se celebró en Cartagena del 9 al 11 de marzo de 2001. Constituye el sexto seminario que la Embajada de Estados Unidos y los co-auspiciadores colombianos realizan desde el comienzo de la serie en Houston en febrero de 1998, cuyo propósito ha sido explorar temas de paz en Colombia. La primera conferencia estudió el «Diseño de Estrategias de Paz». Los demás eventos examinaron «Lecciones de Paz», mayo de 1998; «La Prensa, El Conflicto, y la Paz», septiembre de 1998; «Derechos Humanos y la Paz», abril de 1999; «El Negocio de la Paz», febrero de 2000.

A través de la serie de seminarios, la Embajada de Estados Unidos ha intentado servir de facilitador en la promoción del diálogo entre todos aquellos colombianos comprometidos en la búsqueda de soluciones pacíficas a los problemas del conflicto civil y la violencia en Colombia. La participación de la Embajada en estos seminarios no refleja ninguna agenda política de Estados Unidos; ningún funcionario del gobierno de Estados Unidos ha tomado parte en calidad de conferencista. Por el contrario, lo que hemos procurado es propiciar un foro en el cual los colombianos puedan explorar e intercambiar ideas plenamente, lejos de las presiones diarias.

Uno de los temas característicos de estos seminarios ha sido el análisis comparativo de las experiencias de otros países en procesos de paz, el cual se ha abordado con el fin de identificar posibles lecciones que pudieran aplicarse en Colombia. El seminario «Haciendo Paz» marcó una diferencia. Dado que este año se conmemora el décimo aniversario de la Constitución colombiana, pareció

un momento apropiado para reflexionar sobre las vivencias colombianas en procesos de paz.

Ciertamente, en el seminario se meditó acerca de una extensa gama de ideas relacionadas con la experiencia colombiana, así como la experiencia internacional en procesos de paz. Algunos de los pensamientos expresados allí son controversiales; no todos están de acuerdo con lo planteado. Sin embargo, es altamente gratificante para mí que el evento haya consistido en una disertación sobre el más amplio espectro de ideas posible dentro de la sociedad colombiana en su afán de paz.

Los aportes realizados por todos y cada uno de los participantes en la conferencia fueron cruciales para el éxito de la misma. Deseo expresar mi agradecimiento a todos los participantes por sus contribuciones. También deseo manifestar mi especial aprecio a los co-auspiciadores colombianos del evento: El Tiempo, El Espectador, Caracol, RCN, la revista Semana y la Fundación Ideas para la Paz.

Me complace que la Embajada de Estados Unidos haya contribuido con el seminario y con la publicación de las memorias, como una muestra de colaboración en la búsqueda de la paz en Colombia.

*Anne W. Patterson
Embajadora de Estados Unidos de América*

Introducción

ACCIDENTADO CAMINO HACIA LA PAZ

FERNANDO CEPEDA ULLOA

Profesor de Ciencia Política

*Nos preparamos como gigantes precoces para la guerra y
como pigmeos retardados para la paz.*

*Lester B. Pearson
Premio Nobel de la Paz*

UNA CONVOCATORIA PLURALISTA

En Cartagena se plantearon tesis que van en contravía de la «ignorancia convencional» sobre los procesos de paz en Colombia y las características y situación del que adelanta la Administración Pastrana. Al presentar estos trabajos no pretendo sintetizarlos ni buscar un hilo conductor entre ellos y ni siquiera mostrar puntos de vista contrastantes, como es de esperarse de un seminario que sus patrocinadores convocaron para debatir y controvertir perspectivas diversas.

De ahí la composición pluralista de los participantes: gobernantes del pasado, gobernantes del presente, ex guerrilleros, intelectuales de diversas orientaciones, miembros de las fuerzas Militares, analistas estadounidenses y europeos, periodistas, dirigentes sindicales, empresarios, es decir, una réplica tan aproximada como fue posible de la rica diversidad que influye en el devenir político de Colombia. Carlos Lleras De la Fuente fue insistente en la conveniencia de publicar estas memorias para hacer partícipe de esta experiencia intelectual a una audiencia más amplia.

Estos párrafos buscan provocar la curiosidad intelectual y hasta el desacuerdo del lector. De allí que prefiera más bien presentar tesis que no se oyen con frecuencia entre nosotros o que van en abierta contradicción con planteamientos oficiales o con «las ver-

dades» que se manosean todos los días en los medios de comunicación.

Los documentos que se incorporan fueron elaborados por expertos reconocidos, unos con bagaje intelectual enriquecido con experiencia de gobierno o de rebeldía contra el sistema, otros curtidos en el examen minucioso de otras experiencias conflictivas y conocedores de sus desenlaces negociados, varios de ellos con un conocimiento casi exhaustivo de nuestra convulsionada historia reciente, porque han escrito sobre ella en su calidad de respetados académicos o como connotados periodistas. Algunos sobrellevaban, todavía, y otros hasta ahora, las graves responsabilidades de gobierno.

Los debates y los trabajos de los diferentes grupos se alimentaron con sus visiones y, luego, los refinaron con formulaciones que fueron recogidas en informes de relatoría que, también, fueron objeto de precisiones y aclaraciones por parte de los integrantes de los grupos de trabajo y de los demás participantes en la reunión plenaria. El lector se interesará en estas críticas y descubrirá los matices que separan las diversas perspectivas sobre el proceso de paz.

Todo esto no quiere decir que cada uno de los participantes se identifique con la integridad de las relatorías, en su forma o en su contenido. La naturaleza misma de esta convocatoria pluralista no está dirigida a construir consensos sino a propiciar una controversia que permita identificar, si ese es el caso, denominadores comunes. Y ahí reside el valor de este ejercicio, insisto, pluralista en su esencia y cuyo propósito final es el de hacer, ojalá, una contribución constructiva al proceso de paz.

Así, pues, tenemos un conjunto de valiosas opiniones individuales; y tenemos, también, unas opiniones colectivas que debemos leer con las cautelas arriba señaladas pero que representan un significativo esfuerzo colectivo realizado por personas con ideologías y visiones diferentes de nuestra realidad, en ocasiones, irreconciliables. Ahí está el aspecto más positivo del ejercicio intelectual realizado en Cartagena, el sexto en la serie de reuniones del así llamado Grupo de Houston, auspiciado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia y con el patrocinio de importantes medios de

comunicación y, esta vez, de la recientemente creada *Fundación Ideas para la Paz*.

El trabajo del relator principal Rafael Nieto Loiza constituye un notable esfuerzo para, como lo dice, acentuar los puntos que no quedaron claros, resaltar dudas, reiterar algunas preguntas que no se respondieron e insistir en temas que pueden ser y son controversiales.

PLURALIDAD DE OPINIONES

Sin más preámbulos y sólo por vía de ejemplo, vale la pena llamar la atención con respecto a diversos planteamientos de los ponentes. Que el proceso de paz lleva 20 años. Un período más prolongado que la república liberal o que el Frente Nacional. Un conflicto que lleva 40 años y 10 años de vigencia de acuerdos de paz con el M19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame, el CRS, lo cual permitió que 6.000 guerrilleros se incorporaran a la vida civil. ¿Y qué se dice sobre la Paz como política de Estado? Que ninguno de los últimos cinco gobiernos ha conseguido armar políticas de paz que tengan consensualidad, eficacia, coherencia y continuidad; que llevamos 20 años pero cada gobierno considera que el inicio de él es como el primer día de la creación, desecha toda la experiencia acumulada del pasado y pareciera estar siempre empezando desde el punto cero mientras que la insurrección mantiene un liderazgo vertical estable y por tanto ha conseguido acumular una experiencia negociadora y sabe manejar los tiempos del sistema político. Pero se señala una excepción, la transición del gobierno Barco al de Gaviria porque allí hubo continuidad de personas y de propósitos y de respuestas.

¿Y acaso los diferentes ponentes tienen un concepto idéntico sobre la paz? No parece. Unos la ven como la manera de lograr que los insurgentes se conviertan en movimientos políticos legales; otros como el resultado de una negociación por el poder, su distribución y por el control de los recursos que lo generan y contra los que creen que la paz consiste en crear un nuevo país por medio de un proceso de reformas pactado con la insurgencia. Otros consi-

deran que no se debe esperar a pactar con la guerrilla todo lo que hay que cambiar. Toda reforma, dice uno de ellos, que se perciba necesaria hay que hacerla sin mayor dilación y como laboratorio anticipado de generación de consensos.

El tema de la entrega de armas por parte de la insurgencia no fue debatido con la profundidad que era de esperarse. Será en otra oportunidad. Alguien lo mencionó como el nudo gordiano del proceso de paz en virtud del cual los grupos de autodefensas dicen que si la guerrilla no entrega las armas ellos tampoco...!!! Y otro ponente dijo, sin ambages: «Las FARC no van a renunciar al uso de las armas, no se van a desmovilizar como grupo armado (...) los colombianos tenemos que ir pensando en una eventual continuación de este grupo en armas como grupo en armas integrado institucionalmente de alguna forma».

El tema de las autodefensas o paramilitares fue objeto de arduos debates particularmente en el grupo de trabajo que tenía esa responsabilidad. Y así queda consignado en la discusión que se hizo en la plenaria después de la presentación del informe de relatoría. La lucha contra el paramilitarismo, dice una ponencia, es un reto fundamental en muchos sentidos, especialmente para crear las condiciones objetivas y subjetivas de una eventual transformación de la guerrilla en una fuerza política.

El tema de drogas y paz que es central en el conflicto colombiano dio lugar a dispares planteamientos. Se dijo que en Washington se maneja una línea corrediza con las FARC: ¿son guerrilla o narcoguerrilla? Y se fue aún más lejos: ¿cómo conciliar una política nacional de paz con la política antidrogas de Estados Unidos? Se criticó la tendencia a presentar el conflicto interno armado como uno ligado exclusivamente al narcotráfico. Que Estados Unidos en lugar de tener una política orientada hacia la lucha contra las drogas debería dirigirse, mas bien, hacia el fortalecimiento de las fuerzas institucionales encargadas de la seguridad ciudadana. Estados Unidos debería ir más allá de su enfoque en la fumigación para buscar alternativas más multilaterales. Pero también se señaló que mientras las FARC y sus planes de guerra están más ligados al negocio de las drogas, de parte del ELN habría eventualmente una

disposición a colaborar con el Estado para acabar con los cultivos ilícitos en el sur de Bolívar. Hubo afirmaciones contundentes como ésta: derrotar el narcotráfico resulta condición necesaria pero no suficiente para lograr la paz.

En el intento de comparar las diversas experiencias de paz en Colombia se hicieron observaciones que no se deben pasar por alto. Que las negociaciones con el M-19 se abordaron sobre la base de un principio: que ni la plataforma del gobierno ni la de la guerrilla se negociarían en la mesa. Tesis que, de alguna manera, ratificó uno de los principales protagonistas, así: «Durante la negociación con el gobierno de Barco fue cada vez más claro que el M-19 estaba haciendo una apuesta eminentemente política, en busca del poder. Lo que importaba no era lo que se consiguiera en la mesa de negociaciones, sino el efecto que el proceso produjera en el estado de ánimo de los colombianos». ¿Y qué ocurrió? El mismo protagonista afirma: «La respuesta del país fue superior a nuestras más optimistas predicciones».

¿Fue la Asamblea Constituyente un producto del acuerdo con el M-19? «En estricto sentido», dice la voz más autorizada, «fueron procesos que coincidieron pero que se alimentaron recíprocamente».

¿Y cómo vieron el proceso actual? Se propuso que lo que había que hacer era retomar la confianza pero por parte de los colombianos. Se pidió una rectificación conceptual en la cual el Frente Común tuviera mayor participación; se reclamó una reestructuración de los mecanismos de diálogo; se aconsejó separar el manejo del proceso de las conversaciones que se adelantan con el ELN y se propuso un manejo de la política de paz menos coyuntural, menos ligado a la semana que viene. Que el actual proceso de paz se mueve en un terreno de discusión de reivindicaciones sociales y económicas con bajo contenido político, lo cual parece un pantano sin salida. Así se planteó el dilema «el cambio para la paz» vs. «la paz para el cambio». Que los actuales procesos están atrapados, de alguna manera, entre la inercia y la incertidumbre.

¿Y qué se dijo sobre el papel de la comunidad internacional? Que algunas personas argumentan que la diferencia entre procesos exitosos y fallidos es la participación internacional. ¿Y Estados

Unidos? Que este país debería dedicar todo el esfuerzo diplomático y político posible para aprovechar los canales existentes y así avanzar en el proceso de paz. Esta debería ser la orientación central de su política.

LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROCESO

Jamás Colombia había sido objeto de tanta atención y preocupación. Quizá en una sola ocasión anterior, cuando se planteó la construcción del Canal de Panamá y hasta el momento infausto cuando el Presidente Roosevelt sentenció: I took Panama. Pero en esa ocasión se trataba de una gran oportunidad histórica que se perdió en buena parte por razón del parroquialismo que predominaba en el Congreso de Colombia. Ahí queda el angustioso testimonio de Don Tomás Herrán, el joven diplomático que interinamente llevaba la representación de Colombia en Washington, cuyos cables, diagnósticos y advertencias no encontraban eco en un gobierno «sin sentido del Estado» y, mucho menos, de la coyuntura internacional que se vivía. Digamos que en el caso de Panamá, el interés de la comunidad internacional en Colombia era por razones positivas: la construcción del canal interoceánico.

¿Y ahora? Pues la preocupación es por razones negativas. En Colombia se desarrolla en forma persistente y creciente una actividad criminal: la producción y tráfico de drogas ilícitas. Una actividad que encuentra su principal estímulo en una demanda global por productos psicotrópicos. Un viejo vicio de la humanidad agravado, en nuestro tiempo, por una crisis en la fábrica social de la sociedad post-industrial, en la cual una amplia gama de valores tradicionales vinculados a la institución familiar se han debilitado.

Esas razones negativas no se agotan en el tema de las drogas ilícitas. Su arrolladora influencia en la vida pública, económica y social colombiana ha derivado en el debilitamiento de instituciones y valores que habían hecho de la nuestra una sociedad modesta —es cierto— pero respetable. Así las cosas, factores de desestabilización que estaban ahí presentes, pero que no represen-

*taban un desafío mayúsculo, se catapultaron: las guerrillas encontraron una fuente inagotable de financiamiento que no niegan, al tiempo que rechazan el fenómeno y prometen contribuir a erradicarlo a su manera; la incipiente corrupción encontró incentivos y, así, se aflojaron los resortes que mantenían altas pautas de honestidad. Sí, hasta hace dos décadas y algo más nuestra sociedad ofrecía pautas de transparencia que corrían parejas con un estilo de vida alejado de la ostentación y la extravagancia. La administración de Justicia era admirada y admirable. La venalidad y otras formas de corrupción no constituían el pan nuestro de cada día. El ex presidente López Michelsen, jurista, catedrático, cultor del derecho con inocultable dolor dejó consignado, en su libro testimonial *Palabras pendientes*, este implacable juicio: «... porque Colombia se volvió un país en donde la justicia, y lo digo como profesional del derecho que fui, ya no existe. Los jueces, los árbitros, claro que no todos, no dan ninguna garantía de imparcialidad, de rectitud. No me estoy refiriendo a personas concretas, sino al sentimiento generalizado de que aquí ya no hay un aparato judicial digno de tal nombre, y no sólo para sancionar a los infractores del código penal, sino aún para ejercer los más mínimos derechos contractuales. Colombia se volvió un país en donde a nadie se le garantiza una decisión jurídica respetable»¹. (Se debe observar que este diagnóstico tan rotundo no generó la menor discusión o crítica cuando ha sido un libro que desató una de las mayores controversias).*

La sistemática violación de los derechos humanos más elementales escandaliza desde hace un buen tiempo a la opinión pública internacional. Y la incapacidad, no digamos, para superar sino para mitigar esta situación, ha sido superior a la voluntad declarada de varios gobiernos. Y, luego, la violación sistemática de los derechos de la naturaleza, de nuestra rica biodiversidad, de la pureza de nuestros abundantes recursos hídricos. La sola voladura de los oleoductos ha generado un desastre ambiental equivalente a ocho

¹ Alfonso López Michelsen, *Palabras pendientes*, El Áncora Editores, Bogotá, 2001, pp. 171-172

Exxon-Valdez, según el diagnóstico del ex ministro de Energía, Carlos Caballero Argáez, para no dar sino una cifra.

Estas y otras dimensiones altamente negativas de nuestro acontecer diario han internacionalizado la crisis colombiana. Expertos como Gabriel Marcella y Donald Schultz, del Instituto de Estudios Estratégicos de Estados Unidos, ven en esta crisis tres conflictos que para ellos son, en palabras de García Márquez: «el holocausto bíblico», «criminales de las drogas, guerrillas y grupos de paramilitares están alimentando la espiral de violencia que hace de la “colombianización” una metáfora equivalente a un Estado que está fracasando». Colombia es para ellos el país más perturbado del hemisferio.²

David Passage, al examinar el nexo entre guerrillas y drogas frente a la estrategia antinarcoóticos de Estados Unidos, una y otra vez afirma que ésta debe estar dirigida a que el Estado recupere el control sobre el territorio nacional.³

Y en una conferencia a la cual asistieron más de cien académicos, funcionarios y militares de Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, se planteó (diciembre 10 y 11 de 1998) la urgencia de la crisis colombiana y la necesidad de una «comprehensive response» (una respuesta comprensiva) de Estados Unidos, la región y la comunidad de naciones. Unos le dieron énfasis al proceso de paz, otros a una estrategia antinarcoótica y/o antiinsurgencia. Richard Downes, Profesor de Seguridad Nacional en la Universidad de Miami, resumió las deliberaciones en un texto que tituló «Landpower and Ambiguous warfare: The Challenge of Colombia in the 21st Century» (marzo 10 de 1999).

El análisis no se detiene. Tampoco aminora la preocupación por la crisis. En otra conferencia para analizar una de las respuestas a la grave situación, la implementación del Plan Colombia (febrero 1-2, 2001), el presentador de la monografía que recoge las deliberaciones, dice de entrada y sin reticencias: «La crisis en Colombia

² *Colombia's Three Wars: US Strategy at the Crossroads*, Miami, 5 de marzo, 1999.

³ *The United States and Colombia: Untying the Gordian Knot*, Miami, marzo 2000.

es el desafío más grande que los Estados Unidos enfrentan en el Hemisferio Occidental». El autor de la monografía, Gabriel Marcella, advierte que los colombianos son los principales responsables para asegurar el éxito del Plan Colombia y el prologuista, el ex embajador Ambler Moss, dice al referirse al Plan Colombia: «Pero este momento es, como dijo Wiston Churchill, en un momento decisivo en la Segunda Guerra Mundial, no el final, ni siquiera el comienzo del final, pero posiblemente el final del comienzo». En su conclusión, Marcella afirma: «Un esfuerzo militar solamente no sacará a Colombia del riesgo de un fracaso total como democracia, pero el riesgo de un fracaso es seguro sin este esfuerzo. La Historia muestra que todos los esfuerzos de contrainsurgencia en el mundo moderno han tenido un componente social, económico y político para complementar lo militar». ⁴

La lista de diagnósticos y recetas podría continuar. Ahí están las del coronel Joseph R. Núñez⁵, o las de Angel Rabassa y Peter Chalk del Proyecto de la Fuerza Aérea⁶ o las de los diferentes organismos que luchan por la protección de los derechos humanos.

Pero no debo omitir las conclusiones del esfuerzo colectivo más significativo que fue el realizado por un grupo de más de veinte personalidades estadounidenses con la asesoría de otros tantos colombianos, bajo los auspicios del Council on Foreign Relations y del Diálogo Interamericano, en un proyecto dirigido por el profesor Michael Shifter: «Hacia mayor paz y seguridad en Colombia, Forjando una Política Constructiva de Estados Unidos» (octubre, 2000).

«Los múltiples problemas de Colombia resultan de un estado débil, uno que históricamente ha tenido poca presencia en buena parte del territorio nacional. La violencia, las actividades criminales y los severos problemas de derechos humanos y derecho humanitario son en gran medida el producto de un estado que no ha sido

⁴ Gabriel Marcella, *Plan Colombia: The Strategic and Operational Imperatives*, Miami, Abril 2001.

⁵ *Fighting The Hobbesian Trinity in Colombia: A new strategy for Peace*, Abril 2001.

⁶ *Colombian Labyrinth, The Synergy of Drugs and Insurgency ant its Implications for Regional Stability*, Abril 2001.

capaz de cumplir sus funciones más elementales: proteger a sus ciudadanos y asegurar el imperio de la ley»⁷.

El informe propone cinco áreas para realizar un esfuerzo compartido con la comunidad internacional:

- *Profesionalización de las fuerzas armadas (y no solamente de tres batallones antinarcóticos, habría que añadir), que se refleje en la capacidad y en el nivel de entrenamiento, así como en la adhesión a las normas de derechos humanos y en la ruptura de cualquier vínculo que exista con las fuerzas paramilitares.*

- *Mejorar el sistema judicial, reducir los niveles de impunidad y reformar el sistema de prisiones.*

- *Movilizar sectores claves de la sociedad civil colombiana para buscar la finalización del conflicto armado y para buscar la reforma y el mejoramiento de las instituciones.*

- *Alcanzar progresos que hagan retroceder el crecimiento de la coca y la amapola, una estrategia contra los laboratorios, y siguiendo adelante con las extradiciones, cuando ello sea apropiado.*

- *Avanzar en la tarea del gobierno colombiano de movilizar apoyo regional e internacional para su amplia estrategia, tal como se refleja en el Plan Colombia (p.23).*

Del lado europeo, los diagnósticos son similares. No así el recetario, como queda reflejado en los planteamientos que en nombre de la Unión Europea hizo la Secretaria de Estado sueca, el 30 de abril de 2001, en Bruselas:

1. *Quiere que el proceso sea irreversible.*

2. *Renueva un llamado a las partes para que adopten pasos concretos y de largo alcance que muestren su compromiso con el proceso de paz.*

3. *Hace un llamado al ELN para que reanude el dialogo con el gobierno y demuestre su voluntad de contribuir al proceso de paz.*

4. *Espera que el Gobierno maneje el proceso como Política de Estado.*

⁷ *Michael Shifter, Toward Greater Peace and Security in Colombia, Forging a Constructive US Policy, Task Force Report, New York, 2000, p. 10.*

5. *Entiende el apoyo al proceso como ayuda a las partes negociadoras y a otros actores.*

6. *Apoya específicamente dos acuerdos: a) el realizado con el ELN (enero 15 de 2001) y el de Los Pozos con las FARC (febrero 9 de 2001).*

7. *Apoya el papel que la comunidad internacional ha sido invitada a jugar en diferentes formas: como países individuales, como facilitadores, verificadores, etc.*

8. *Expresa su preocupación por las violaciones persistentes del Derecho Internacional Humanitario, principalmente por las guerrillas y los grupos paramilitares. (Esto representa un cambio significativo en el aprendizaje de la Unión Europea que antes no estaba tan dispuesta a condenar a las fuerzas irregulares por las violaciones humanitarias). Reitera que estos asuntos no son negociables .*

9. *Considera inaceptable la práctica del secuestro y pide la liberación inmediata de los secuestrados.*

10. *Reclama acuerdos humanitarios y sobre derechos humanos, parciales y globales.*

11. *Pide la intensificación de la lucha contra las autodefensas.*

12. *Reconoce el vínculo entre droga y conflicto armado y considera que hay un reto para todos en encontrar formas alternativas para combatir el problema de las drogas.*

13. *Se declara en favor de la erradicación manual. Proclama la necesidad de proteger la biodiversidad.*

14. *Quiere ayudar a construir confianza en una visión de paz y desarrollo, especialmente en el pueblo colombiano.*

De esta manera estamos observando ya una participación muy activa de Europa en el proceso. Por ejemplo: pronto se realizará, en territorio europeo, una reunión con una de las guerrillas. Puede ser bien significativa en las actuales circunstancias. Una delegación representativa de la sociedad sueca visitó Colombia en estos días (catorce personalidades) con el ánimo de identificar ideas y proyectos que ellos puedan apoyar.

La participación europea va a tener impactos que desde ahora vale la pena avizorar. Es un nuevo actor con una actitud y un

bagaje de experiencias y visiones que va a significar mucho en el proceso, en particular, frente a las guerrillas.

El cuidadoso informe de The Economist (21 de abril, 2001), no se aleja de estas propuestas: «Para Colombia el desafío principal es el de proporcionar seguridad para todos sus ciudadanos —reemplazando el legalismo y la violencia extralegal con el imperio de la ley—. Es difícil ver cómo eso puede ser logrado sin unas fuerzas armadas más fuertes, especialmente ahora cuando tienen una guerra en dos frentes. Pero Colombia no puede lograr la paz solo por medios militares. Establecer el imperio de la Ley significa más y mejores fuerzas de policía, fiscales y jueces, así como soldados.

«También supone un acuerdo político por medio de un proceso de paz. Pero hay límites a lo que es negociable. Sería torpe rediseñar las instituciones del país con un fusil en la nuca. ¿Qué puede ofrecer el Gobierno? Reforma agraria, ciertamente. Y, después de que las hostilidades hayan terminado, la oportunidad para que en el proceso los guerrilleros puedan quizá incorporarse a las fuerzas de policía. Pero lo más importante es garantizar el derecho de las guerrillas de participar en la vida política democrática, sin amenaza para sus vidas y en términos de igualdad»⁸.

REINTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA DEL CONFLICTO

*El estudio de la naturaleza del conflicto también se ha internacionalizado. Es bien probable que un diagnóstico refinado de la situación colombiana nos lleve a superar las visiones del pasado para incorporar en nuestro análisis elementos (quizá no todo el planteamiento) de los estudios de Paul Collier o de los análisis como los de Mary Kaldor en su libro *New and Old Wars, Organized Violence in a Global Era*.*

El de Paul Collier es más conocido en nuestro medio. Aquí lo resumo: Los diamantes ensangrentados fue una expresión que

⁸ *The Economist, A Survey of Colombia, Drugs, War and Democracy, April 21-27, 2001, p.16.*

hizo carrera en los últimos meses en Europa y que llegó a formar parte de la agenda del Grupo de los Nueve en la reunión de Okinawa, Japón.

¿De qué se trata? Pues existe una nueva lectura de los conflictos civiles. Se formula una pregunta dura: ¿qué es lo que inspira estos conflictos? ¿Acaso el ansia desmedida de obtener dinero (greed)? ¿Acaso quejas bien justificadas sobre la desigualdad social, la injusticia, la explotación (grievance)? ¿Cuándo las quejas se convierten en una especie de manto encubridor de una actividad típicamente criminal? ¿En qué momento la fortaleza económica genera una agenda de quejas que debe ser tomada en cuenta?

Los diamantes ensangrentados representan el caso típico. Las guerrillas de Angola, Sierra Leona y el Congo controlan parte de la producción de diamantes y así financian su existencia. Una campaña internacional que no es del caso describir aquí llevó a que los compradores de diamantes y el Grupo de los Nueve decidieran no comprar aquellos que estaban ensangrentados.

*Paul Collier, del Banco Mundial, es el principal expositor de esta nueva lectura. Sus trabajos han sido ya objeto de seminarios y debates especializados. El más reciente fue publicado por el Banco Mundial el 15 de junio, con el título *Causas Económicas del Conflicto Civil y sus Implicaciones para Formular las Políticas*. Una versión preliminar llevaba por título *Greed and Grievance in Civil War* (26 de abril del 2001). El Centro de Investigaciones sobre la Paz, en Oslo (PRIO), ha creado un grupo de estudio sobre este tema que ya ha realizado diálogos con el equipo del Banco Mundial. Las críticas a este enfoque ya se vislumbran.*

*Una ilustración de este tipo de interpretación para el conflicto colombiano o aspectos del mismo se encuentra por ejemplo en el reciente informe *Panorama actual del Magdalena Medio*, mayo de 2001, de la Vicepresidencia de la República : «Los cultivos de coca en el Sur de Bolívar y las explotaciones de oro en la Serranía de San Lucas son sin duda factores que explican buena parte de la dinámica de la violencia de los últimos tres años y en particular el avance de las autodefensas en esta zona del país». Diagnósticos como éste abundan.*

El de Mary Kaldor vale la pena recogerlo en unos cuantos párrafos: «La globalización ha transformado también las guerrillas. Las nuevas guerras tienen que ser entendidas en el contexto del proceso de globalización», dice la profesora. Las consecuencias del final de la guerra fría: disponibilidad de armas, el descrédito de las ideologías socialistas, la desintegración de los imperios totalitarios, la suspensión del apoyo de la superpotencia a algunos regímenes políticos son factores —escribe Kaldor— que han contribuido en forma importante a las nuevas guerras.

Algunas evidencias de la globalización en el comportamiento de las nuevas guerras son las siguientes:

- *El interés de los medios internacionales de comunicación;*
- *Las tropas de mercenarios;*
- *Los consejeros militares extranjeros;*
- *Y un verdadero «ejército» de agendas internacionales que van desde organizaciones no-gubernamentales como Human Rights Watch, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Médicos sin Fronteras, diversas agencias de las Naciones Unidas, etc., hasta tropas de la ONU para el mantenimiento de la paz*

Las nuevas guerras, según Kaldor, surgen en el contexto de la erosión de la autonomía del Estado o de su desintegración. Y, en especial, ocurren cuando hay un contexto en el cual se ha debilitado el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. Es el caso de países en los cuales la economía entra en decadencia y, con ella, los ingresos del Estado. Al mismo tiempo, la criminalidad, la corrupción, la ineficiencia se extienden, y la violencia se va privatizando como resultado del crecimiento del crimen organizado y el surgimiento de grupos paramilitares.

En estas guerras —las nuevas guerras— hay un aumento dramático del número de refugiados y personas desplazadas y buena parte de la violencia se dirige contra los civiles. Las atrocidades contra la población civil —en violación de todas las leyes de la guerra— constituyen ahora un componente esencial del nuevo modo de hacer la guerra. Las nuevas guerras —afirma Kaldor— «suponen un desdibujamiento de distinciones tradicionales entre guerra,

*crimen organizado y violación en gran escala de los Derechos Humanos»*⁹.

PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

*La Comunidad Internacional está cumpliendo un papel clave en el proceso de alcanzar una solución política negociada, sostenible y justa, en Colombia. Es el papel que mediadores han tenido en la superación de otros conflictos en el mundo y que con candidez y detalle se recogen en el excelente libro *Herding Cats, Multiparty Mediation in a Complex World*, publicado por el Instituto para la Paz de Estados Unidos y editado por Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson y Pamela Aall. En el caso colombiano estamos lejos todavía de una mediación en sentido estricto. No hay duda de que la presencia de la comunidad internacional es ya notoria y que, como en otros casos, no es ajeno al proceso todo un repertorio de recursos que van desde conversaciones secretas pasando por reuniones académicas en universidades idílicas hasta tratos directos con los comandantes guerrilleros en lugares embellecidos por el invierno europeo.*

Es el trabajo armónico de los diferentes actores internacionales en consonancia con los propósitos gubernamentales y de la sociedad civil colombiana lo que puede desatar el nudo gordiano que tiene bloqueada una vida pacífica y tolerante entre nosotros y enredado un formidable potencial de prosperidad y, en consecuencia, de justicia social. Todavía no hay en Colombia un George Mitchell o un Richard Holbrooke, como en Irlanda del Norte y Bosnia, respectivamente. Con todo, la presencia de Jan Egeland desde antes de iniciarse el proceso, el ex viceministro noruego, con amplia experiencia en procesos de paz, exitosos unos, no tanto otros, ahora facilitador en nombre del Secretario General de la ONU, abre una ventana de esperanza con respecto a las posibili-

⁹ Mary Kaldor, *New and Old Wars, Organized Violence in a Global Era*, Polity Press, Cambridge, Uk, 1999.

dades del proceso. Porque cuesta trabajo creer que la persona que tuvo tanto que ver con el así llamado «Norwegian Channel» que llevó al Acuerdo de Oslo que trajo por primera vez a la mesa de negociación a dos viejos enemigos, Israel y la Organización Palestina de Liberación (OPL), y que ha participado en diez procesos (Centroamérica, los Balcanes, el Cáucaso, Burundi, Sudán, Sri Lanka y otras partes), no pueda encauzar, con la cooperación de otros actores, estas negociaciones por el camino correcto, para cambiar así, uso palabras suyas, la arquitectura política colombiana. Es bien claro que en el Medio Oriente todavía no hay paz, pero se dio un salto cualitativo gigantesco que ha sido debilitado desde el 13 de septiembre de 1993 por fuerzas que han resultado superiores a lo que se creía. Fue más una facilitación que una mediación, como está ocurriendo en Colombia.

Personalmente me he forjado la ilusión de creer que el Plan Colombia ofrece la plataforma para una negociación definitiva del conflicto y así lo he planteado en dos artículos de El Tiempo, en la Revista Ideele del Perú (No. 131, septiembre de 2000, pág. 67) y en una reunión promovida por el Diálogo Interamericano en Washington.

Hoy, con base en el Acuerdo de Los Pozos (9 de febrero, 2001), la interpretación que del mismo han hecho las propias FARC en reiteradas ocasiones y la solicitud de todos los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Quebec en la III Cumbre de las Américas y en las declaraciones de la Unión Europea con ocasión de la III Reunión del Grupo de Apoyo al proceso de Paz en Colombia (Bruselas, 30 de abril, 2001), encuentro renovadas razones para reafirmar mi ilusión con respecto al papel que el Plan Colombia podría jugar como herramienta clave de negociación.

LECCIONES DE LA EXPERIENCIA

El propio Egeland recoge en un revelador texto las lecciones aprendidas:

1. Ante todo y como lo más fundamental, no habrá paz real y duradera si las partes—los dirigentes y el pueblo—no están dispuestos

a trabajar hacia los compromisos a menudo dolorosos que se necesitan para lograr la paz.

2. Aun si este es el caso, una maquinaria inadecuada de mediación y la ausencia de canales secretos puede dañar las mejores intenciones.

3. La capacidad de naciones pequeñas para jugar un papel como un tercero eficaz y confiable no debe subestimarse.

4. Un tercero debe, cuidadosamente, evitar la tentación de adoptar un papel que desborde sus recursos para obrar en forma convincente.

5. Un tercero debe definir objetivos realistas cuando se embarque en un proceso de resolución de conflictos.

6. Un tercero no debe creer ingenuamente las intenciones declaradas de los líderes que están involucrados.

7. Es necesario planear cuidadosamente cómo un tercero debe tratar las partes en conflicto antes, durante y después de las negociaciones. En algunas ocasiones es vital proporcionar a las partes un status igual, así exista una relación de poder incontrovertiblemente asimétrica.

8. Se debe entender que no importa qué tan duro se perciba alcanzar un acuerdo entre las partes, el proceso de implementación será más duro.

Egeland no es un optimista ciego. Sus reflexiones concluyen así: «Quizá uno entre cien intentos tendrá éxito. Aun así vale la pena el esfuerzo».¹⁰

Conviene preguntar si en Colombia se están aplicando estas lecciones. Y también es inescapable inquirir si el conflicto está «maduro», en términos del profesor William I. Zartmann, es decir, si las partes en conflicto han llegado a la conclusión de que su continuación no mejorará los beneficios y que más bien incrementará los costos. Es decir, las partes perciben que los costos de continuar la confrontación son mayores que los costos y perspectivas de un acuerdo. Zartmann establece cuatro condiciones in-

¹⁰ *The Oslo Accord: Multiparty Facilitation Through The Norwegian Channel*, en Chester A. Crocker et. Al. (editors), *Herding Cats, Multiparty Mediation in a Complex World.*, U.S. Institute of Peace Press, Washington D.C., 1999.

dependientes para la madurez aunque estima que no es necesario que todas ellas concurren para que ella se dé, a saber: un doloroso empate, una catástrofe en ciernes, representantes válidos y una salida al conflicto.¹¹

Estas reflexiones, que buscan recordar que hay lecciones y experiencias que se deben tener presentes, entre otras las que se debatieron en Cartagena con la participación de los protagonistas, pretenden también señalar que no es fácil resolver por la vía pacífica un conflicto interno, mucho menos cuando adquiere las características de una guerra civil. El autor de estas líneas cree que Colombia no ha llegado a esa terrible situación, pero ve con angustia que estamos marchando hacia allá con los ojos bien abiertos. Todavía hay espacio para encontrar una salida política y es nuestro deber llamar en nuestro auxilio todo el experticio que ha dejado la historia de estos conflictos para no dilapidar esta oportunidad.

Por ello, no sobra insistir en la dificultad de estos procesos de negociación. Baste con señalar que como lo anota Stephen Stedman, la mayoría de las guerras civiles ha culminado en «eliminación o capitulación». En el periodo que va de 1900 a 1989, de un total de 65 casos, solamente el 15% se resolvió mediante negociación. Además, existe evidencia creciente que revela que los acuerdos negociados sobre conflictos civiles tienen más probabilidades de colapsar que las «soluciones» logradas cuando un lado resulta victorioso en el campo de batalla.¹²

Todo ello para recordar con Chester A. Crooker, que el libro citado de Hampson «demuestra gráficamente que sí existen opciones fructíferas de política exterior entre los extremos de no hacer nada y de intervenir con una fuerza militar agresiva. Pero estas opciones tienen sus costos y condiciones.¹³

¹¹ I William Zartmann: "Ripening Conflict, Ripe Moment, Formula and Mediation", en Diane B. Bendahmane and Johns W. McDonald, Jr. eds., *Perspectives on Negotiation*, Washington D.C., Foreign Service Institute, U.S. Department of State, 1986. Una buena discusión sobre el tema se encuentra en el libro de Fen Osler Hampson, *Nurturing Peace, Why Peace Settlements Succeed or Fail*, U.S. Institute of Peace Press, Washington, D.C., 1996

¹² Hampson, *op.cit.* pp.6 y 7

¹³ *Idem*, p. IX

Hay una advertencia que los estudiosos del postconflicto hacen y que es aconsejable registrar aquí a manera de conclusión: «... los acuerdos, aun cuando han sido implementados, pueden ser por sí solos insuficientes para garantizar una paz sostenible. Idealmente estos acuerdos deberían ser vistos como puntos de partida para actividades que transformen compromisos y arreglos negociados en formas de relaciones intergrupales duraderas que dan lugar a procesos políticos sostenibles» .¹⁴

FERNANDO CEPEDA ULLOA
Bogotá, 31 de mayo de 2001

¹⁴ Elizabeth M. Cousens y Chetan Kumar, *Peacebuilding as Politics, Cultivating Peace in Fragile Societies*, Lynne Rienner, Boulder, London, 2001, p. 196.

INSTALACIÓN
ENRIQUE SANTOS CALDERÓN
Co-director El Tiempo

Sea lo primero darles la bienvenida y agradecer su participación en este seminario. Como la mayoría de ustedes deben saberlo ya, estos encuentros son producto de un proceso de reflexión y de discusión sobre el conflicto armado colombiano que se inició en enero del 98 en la ciudad de Houston por iniciativa de la embajada de los Estados Unidos. En esa ocasión denominamos el encuentro «Lecciones de Paz» y a partir de ahí, de esa reflexión que resultó tan enriquecedora, decidimos continuar esas experiencias vinculándose como copatrocinadores RCN y El Tiempo. Al año siguiente, se unió la revista Semana; y este año, registramos con mucha complacencia que se han unido también El Espectador, Caracol y la Fundación Ideas Para la Paz, que reúne importantes empresas del sector privado interesadas en aportar soluciones al conflicto armado colombiano.

Y es así como en los últimos tres años nos hemos reunido y hemos celebrado encuentros en distintas ciudades colombianas, hemos abordado temas como: lecciones de la paz en Centro América, el papel de los medios de comunicación en el proceso de paz, las relaciones cívico-militares, los nexos entre el congreso y la defensa nacional, los derechos humanos. El último encuentro lo celebramos aquí en Cartagena y trató sobre los aportes del sector privado a la solución del conflicto armado. Han sido realmente experiencias muy valiosas, ejercicios de diálogo muy constructivos y enriquecedores, muy estimulantes, que han reunido expertos nacionales e internacionales, a los protagonistas de muy diversas procedencias que tienen algo que ver con el proceso que vivimos

y han sido escenarios de debates muy francos, en ocasiones muy duros, pero que han servido para conocernos mejor de cara al conflicto, para aprender de experiencias internacionales que son relevantes ante el fenómeno en que nos encontramos pero, sobre todo, han servido para que cada cual identifique cuál puede ser su contribución al proceso de paz colombiano, a este conflicto que nos está desgarrando, que es un conflicto que hoy en día es casi único en el mundo por sus características tan propias, tan peculiares.

Casualmente me enteré de que ayer llegó al país el conocido escritor e intelectual francés Bernard Henri Levy, que está escribiendo una serie de ensayos sobre lo que él llama las guerras olvidadas en el mundo, analizando el caso de Srilanka y Kosovo. Considera Levy que el caso colombiano es uno de los más interesantes y más complejos que hoy existen en el mundo, dado que no tiene componentes étnicos, ni raciales, ni religiosos, ni territoriales.

El tema de hoy lo hemos denominado: Haciendo Paz —reflexiones y perspectivas sobre el proceso de paz colombiano—, porque pensamos que ya era hora de aterrizar muy concretamente en el proceso actual. Ya llevamos, después de todo, más de dos años de negociaciones formales con las FARC, porque con el ELN no se ha podido arrancar, todavía, en forma, y hoy nos desayunamos con la noticia de que la cúpula del ELN había suspendido sus contactos con el gobierno alegando falta de voluntad del gobierno en la concreción de la zona de encuentro.

Personalmente, pienso que no ha habido tanto falta de voluntad como la confluencia de intereses muy diversos y muy poderosos en la zona del sur de Bolívar en donde están mezclados autodefensas, paramilitarismo, intereses del narcotráfico, temores muy explicables dentro de la población y hay que preguntarse, inclusive, hasta dónde las FARC están interesadas en que se desarrolle un escenario paralelo y simultáneo de negociación. Creo que después de la carta de hoy el reto para el gobierno es muy grande: ¿cómo se va a concretar esta zona de encuentro con el ELN? Porque la posibilidad de tener dos procesos simultáneos de negociación aumentaría enormemente la capacidad de maniobra del gobierno.

Hoy se trata, pues, de discutir en qué va nuestro proceso de paz, de analizar algunos de sus principales componentes: Plan Colombia, el fenómeno de las autodefensas, el papel del narcotráfico en el conflicto, la viabilidad de las propuestas guerrilleras, la política de seguridad del Estado de cara al conflicto, y se trata también de revisar los procesos anteriores de paz. No hay que olvidar que el Estado colombiano ya lleva casi veinte años de diálogos y negociaciones con la insurgencia armada y una de las preguntas es: ¿hasta dónde se ha aprovechado o desaprovechado esta experiencia acumulada? Me imagino que éste será uno de los puntos que tratará en su intervención el profesor Marco Palacios. Y no hay que olvidar tampoco que en estos días se cumplen precisamente diez años de la desmovilización del EPL y del M-19, sobre lo cual nos hablarán Antonio Navarro y Rafael Pardo.

Entonces el momento es muy propicio, la ocasión es muy oportuna para echarle un vistazo de fondo al proceso. Para preguntarnos por ejemplo, si se está dando un verdadero relanzamiento de las negociaciones con las FARC, si va a haber una nueva dinámica en este proceso, si vamos a seguir en lo mismo, si se está llegando por fin a concretar y a definir el papel de la comunidad internacional o si la audiencia que hubo en días pasados en el Caguán fue un acto ritual y protocolario más, al cual están muy aficionados tanto el gobierno como las FARC.

Hemos decidido también en esta ocasión utilizar una metodología distinta con las mesas de trabajo. Ustedes habrán visto que se ubicaron y se identificaron temas específicos, se asignaron de antemano responsables de la coordinación y de la relatoría de estas mesas, lo cual es un aspecto muy importante de las reflexiones que hacemos, y creo que con esta metodología vamos a avanzar más y vamos a llegar a conclusiones más concretas.

Creo que el temario resume puntos claves del proceso actual y de la situación en que estamos. Aquí está representada una muy amplia gama de posiciones, que ojalá se traduzcan en algún tipo de visión conjunta que nos permita avanzar hacia una solución política negociada, realista, sensata, civilizada de esta encrucijada en que nos encontramos. No quiero terminar sin hacer un público recono-

cimiento del valiosísimo papel que ha cumplido la embajada de los Estados Unidos en su empeño por facilitar estos escenarios de encuentro, y espero entonces que el de hoy nos ayude para avanzar, para dar un paso más hacia adelante en la solución de nuestro conflicto armado.

Muchas gracias,

Enriques Santos Calderón

PALABRAS DE BIENVENIDA

JAMES WILLIAMS

Consejero para Cultura y Prensa
de la Embajada de los Estados Unidos

En nombre de la embajadora Patterson y de la embajada de los Estados Unidos en Colombia deseo darles a todos la bienvenida y agradecer a cada uno de ustedes por sacar tiempo de sus muy ocupadas agendas para reunirse este fin de semana con nosotros, para analizar muy profundamente el tema más crucial en la vida nacional de Colombia, la búsqueda de la paz. Permítanme transmitirles el deseo sincero de la embajadora Patterson por el éxito de esta conferencia y su anhelo de que contribuya al logro de la paz en Colombia. La embajadora tenía toda la intención de acompañarnos hoy, pero desafortunadamente no puede hacerlo debido a que se encuentra en Bogotá con una delegación del congreso de los Estados Unidos encabezada por el senador Bob Graham de la Florida. Me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a los coauspiciadores del evento, El Tiempo, El Espectador, RCN, Caracol, Semana y la Fundación Ideas para la Paz, por su apoyo en la organización de la conferencia. En especial quiero manifestar mi aprecio a los participantes en las sesiones del día de hoy, Dr. Marco Palacios, profesor del Colegio de Méjico, Dr. Luis Fernando Ramírez, Ministro de Defensa, Dr. Antonio Navarro Wolf, representante a la Cámara, Dr. Rafael Pardo Rueda, director de CMI, Dr. Camilo Gómez, Alto Comisionado para la Paz, Dr. Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional, Dr. Alfredo Rangel, Analista Político, Dr. Gonzalo de Francisco, Consejero Presidencial para la Convivencia Ciudadana, y el Dr. Luis Eduardo Garzón, Presidente de la CUT. Por último me gustaría expresar mi especial gratitud a nues-

tros conferencistas internacionales Dr. Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, Dr. Joaquín Villalobos, del Salvador, Dr. Daniel Pécaut, Director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, y la Dra. Cynthia Arnson, del Woodrow Wilson Center en Washington.

Cada uno de ellos es bien conocido por su dedicación a los estudios de la paz y por su dedicación a Colombia y estamos muy complacidos con su presencia durante este fin de semana. La conferencia de hoy es la sexta en una serie que ha propiciado la embajada de los Estados Unidos con el coauspicio de instituciones colombianas desde hace tres años. Nuestro papel, el papel de la embajada en estas conferencias, ha sido y continúa siendo el de facilitar el análisis continuo de los componentes que contribuyan al logro de la paz en Colombia.

Desde la primera de estas conferencias, llevada a cabo en Houston, hemos colaborado con nuestros coauspiciadores para analizar el papel de instituciones centrales en la búsqueda de la paz, examinando modelos internacionales de procesos de paz y las experiencias de otros países en su intención de alcanzar una solución pacífica a sus conflictos nacionales. En cada uno de los seminarios anteriores, hemos observado las experiencias internacionales a fin de identificar puntos de convergencia que pudieran aplicarse al caso colombiano.

En algo de contraste, este fin de semana intentamos mirar la experiencia colombiana para analizar experiencias que puedan aplicarse al caso colombiano hacia el futuro. Este proceso de autoevaluación es tal vez más difícil. Somos conscientes del largo y arduo camino que ha seguido el proceso de paz en Colombia y cuánto falta aún por recorrer. La situación colombiana es de extrema complejidad. Sin embargo, existe un muy amplio consenso en la sociedad sobre la necesidad de la paz y este consenso de la mayoría de los colombianos debe darnos un sentido de esperanza.

Ciertamente el compromiso, la creatividad, la decisión y el liderazgo que todos ustedes en esta sala han demostrado son elementos esenciales que en última instancia harán de la paz una realidad. Ese compromiso es el recurso más importante que tiene Colombia

en el proceso de paz y es la mayor justificación para mantener viva la esperanza en este esfuerzo. Simplemente quiero darles las gracias por el acompañamiento de todos ustedes y desearles el mayor éxito de la conferencia.

James Williams

I. PONENCIAS Y DEBATES

UNA REVISIÓN HISTÓRICA DE LOS PROCESOS DE
PAZ EN COLOMBIA:

¿EL PROCESO O LA PAZ?

MARCO PALACIOS

Profesor Universidad de los Andes

Vamos para 20 años de procesos de paz: un período más prolongado que la «república liberal» (1930-46) o que el Frente Nacional (1958-74). En ese lapso el conflicto se ha tornado más complejo e intrincado. Los esquemas gubernamentales de paz han enfrentado una realidad polivalente y cambiante, determinada por la interacción de cinco factores:

1. La dinámica colonizadora que se despliega en la segunda mitad del siglo XX en nueve grandes zonas del país, nicho de poderes fácticos que tienen base en la ley del más fuerte, la política clientelista, los negocios ilícitos alrededor de la coca y la guerra insurgente y contra-insurgente.

2. Las políticas de diálogo y negociación iniciadas en 1982, que han dado protagonismo y legitimidad a las guerrillas y se han convertido en punto nodal de la vida política del país.

3. La globalización de los mercados que tiene un correlato específico en Colombia: la irrupción del narcotráfico (producción, transporte, lavado) en el mundo local, rural y político.

4. La descentralización fiscal y electoral que, además de incrementar los recursos presupuestales que manejan los municipios amplía la autonomía de manejo, más acusada en aquellos emplazados en las zonas de colonización.

5. El fin de la Guerra Fría con el colapso de la Unión Soviética y el ocaso del Partido Comunista Colombiano, que hasta los Acuerdos de La Uribe mantuvo influencia en las FARC.

Ahora las FARC, al igual que el ELN, que nunca tuvo partido, desarrollan su propia doctrina política y militar. De estas organizaciones debemos prestar menos atención a la ideología explícita y

más a la cultura política y comportamientos derivados. A nuestro juicio se trata de una cultura que combina el clientelismo de la tradición política rural colombiana, con el jacobinismo, en la variante estaliniana en el caso de las FARC y guevarista en el caso del ELN.

Pese a 20 años de políticas oficiales de paz, el conflicto hoy es más inclemente; penetra y asedia más territorio; hay más muerte y más terror; más secuestros; más atentados a la infraestructura de vías, eléctrica y petrolera; más destrucción de propiedad privada. Esta tendencia marcha en contravía de la pausada disminución del crimen, en particular de los homicidios violentos en las ciudades. Aparte de violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos por todos sabidas, de las cuales debemos subrayar los nexos aún existentes en muchos lugares del país entre élites locales, la Fuerza Pública y los paramilitares, que minan desde dentro los fundamentos éticos del Estado de Derecho, los colombianos apenas empezamos a tener conciencia de la ignominiosa realidad de cientos de miles de familias campesinas desplazadas de sus hogares y vecindarios. Menos terrible, pero de efectos negativos en el mediano plazo, es el éxodo hacia el exterior de profesionales y empresarios.

Además de resultados exiguos, los procesos de paz, por su misma prolongación, suscitan incertidumbre y desconfianza y dan vuelo al espíritu de desencanto ciudadano con la política y los políticos y con el talante negociador. Pero al mismo tiempo parecen domesticar intereses en un juego legitimado y abierto en el cual lo importante parece residir en el proceso mismo y no en la paz.

Entonces fragilidad, volatilidad y trama kafkiana podrían describir adecuadamente las políticas de paz que, desde 1982, se han iniciado periódicamente, con la inauguración de cada uno de los cinco presidentes, tres liberales y dos conservadores, que se han sucedido en el mando. La trayectoria podría ser más o menos así: luego de un optimismo inaugural, entre el primero y segundo año de gobierno empiezan a percibirse síntomas de que las condiciones iniciales han cambiado, siendo reemplazadas por tirantez y acusaciones de parte y parte debido a serias dificultades en la negociación.

Ninguno de los últimos cinco gobiernos ha conseguido armar políticas de paz que tengan consensualidad, eficacia, coherencia y continuidad. Si cada proceso manifiesta pronunciados altibajos, no

puede esperarse que el conjunto de éstos sea coherente y progresivo. Exceptuando la transición del gobierno Barco al de Gaviria, los demás proyectos arrancaron prácticamente de cero.

En esta exposición sumaria señalaremos algunos aspectos que comparten las políticas de Betancur a Samper frente a las guerrillas, con el ánimo de sacar alguna lección para el presente.

Comencemos por la pregunta de rigor: ¿por qué no han sido exitosos los modelos de paz, en el sentido de que los niveles del conflicto antes que abatirse se han ampliado? Inclusive si consideramos el caso de los pactos de 1990-91 y de abril-junio de 1994, que protocolizaron la desmovilización de importantes contingentes guerrilleros, ¿por qué el resultado fue, a la postre, tan limitado? Para tratar de responder estas preguntas delicadas echemos una ojeada a la historia reciente.

Destacaremos tres elementos: 1. El objetivo explícito de los gobiernos ha sido pactar con las formaciones insurgentes su transformación en fuerzas políticas capaces de operar y competir dentro de los marcos del orden constitucional y legal. Aquí debemos reconocer que, pese a las reformas institucionales y a nuevos aires en la política de las grandes ciudades, las prácticas en el país siguen sujetas a lógicas clientelistas. 2. Las iniciativas de paz provienen formalmente del presidente de la República y por eso solemos hablar de proyectos presidenciales. Aunque los procesos se formulan inicialmente con claridad, la agenda y el cronograma de las negociaciones son indeterminados, de suerte que disminuye la credibilidad y legitimidad. 3. Las políticas de paz se han convertido en la arena donde se procesan los conflictos conforme a las reglas implícitas del sistema político.

Veamos con algún detalle cada uno de estos aspectos.

1) La transformación de las guerrillas en movimientos políticos legales requiere, en primera instancia, a) que el liderazgo insurgente perciba que la oferta gubernamental representa una mejoría indiscutible de status político en relación con la posición presente y b) que las fuerzas políticas y sociales reconozcan la validez de la oferta.

Sin embargo, la percepción que tengan los alzados en armas depende en gran medida del momento en que se formule la oferta que, por lo demás, debe ser clara y convincente. Sobre la impor-

tancia del momento valga recordar que cuando Belisario Betancur formuló su proyecto de paz, inicialmente con una Ley de Amnistía, las FARC acababan de hacer una lectura de la coyuntura política y habían concluido que era el momento de crecer militarmente. Para el M-19, la oferta no fue creíble. Sus dirigentes entendieron que Betancur quería «robarse la bandera de la paz». Además, en ese momento la Ley de Amnistía no interesaba por igual a todos los grupos guerrilleros y el proyecto era incierto debido a duras críticas y oposiciones veladas que empezaron a surgir contra el presidente. Sin embargo, en 1984 las FARC y el PC se avinieron a participar en un curso gradual de incorporación a la vida política legal mediante la Unión Patriótica. La historia es bien sabida. Ante la despreocupación de los funcionarios gubernamentales del más alto nivel, los poderes fácticos locales (políticos, latifundistas, narcotraficantes, militares, policías y demás agentes de la seguridad del Estado) apoyaron grupos paramilitares para exterminar la naciente UP. La miopía e indiferencia del alto gobierno, habría de crear una profunda desconfianza en las FARC, que hemos pagado muy caro.

Podemos suponer que Betancur inició un camino que culminó, un tanto inesperadamente, en las desmovilizaciones del EPL, del M-19 y de otros grupos menores, muchos años después. En efecto, los pactos con el M-19 (marzo de 1990) y el EPL (febrero de 1991) comprobarían que es posible pactar la desmovilización de un grupo armado a cambio de ofrecer garantías plausibles para que pueda transformarse en un movimiento político legal. La promesa de reforma política, y luego la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, fueron el punto de referencia de la negociación del gobierno con el M-19 y el EPL.

Sin embargo, muy pronto este caso se convirtió en el ejemplo negativo para las FARC, que venían de la terrible experiencia de la UP, y para el ELN, que empezaba a recorrer los caminos de la negociación. En efecto, la trayectoria electoral de los grupos desmovilizados fue decepcionante. Mantener la organización legal, crecer, difundir el discurso y sacar votos resultó muy difícil una vez que fueron agotadas las cláusulas de favorabilidad. No es fácil

competir por votos en el mundo clientelar. La favorabilidad inicial permitió a los grupos amnistiados tener representación y vocería en la Asamblea Constituyente. El éxito electoral del M-19 fue impresionante: bordeó el millón de votos en la elección de Constituyente obteniendo el 27% de la votación total. Convertido en AD M-19 al juntarse el EPL (como Esperanza, Paz y Libertad) y el PRT, soñó en construir y mantener una base electoral de votantes independientes, lo que se llama un electorado de opinión. El sueño se redujo a una breve parábola hasta prácticamente tocar suelo en las elecciones locales de 1997, cuando apenas obtuvo 60.000 votos, el 0.6% de la votación.

2. La segunda característica de los procesos es que aparecen como si fueran eminentemente presidenciales. A fin de cuentas el presidente es el jefe del Estado, de la administración y el comandante de la Fuerza Pública. Aunque nuestros presidentes actúan en el entorno de un Estado débil, tienen más recursos a su disposición y en cierto sentido un mayor grado de legitimación que cualquier otro actor alternativo.

Los procesos de paz quedan amarrados al ciclo y a las prácticas personalistas de la política colombiana; dependen del estilo personal de gobernar del primer mandatario de turno; del tornadizo estado de ánimo de la opinión pública; de los cálculos electorales de los contendientes; del cambiante cuadro partidista y faccional en el Congreso; de las presiones de la Iglesia, los grupos empresariales y las ONGs que hablan a nombre de la sociedad civil. De esta manera la «paz», ha devenido en una rutina más de las prácticas político-electorales y hace parte del arsenal retórico corriente del gobierno, de la llamada sociedad civil y de las guerrillas.

Este carácter presidencialista ha expuesto la fragmentación estatal y política. Dentro de la misma rama ejecutiva los presidentes están limitados por los comandantes de la Fuerza Pública y más concretamente del Ejército. En ocasiones ha sido manifiesta la hostilidad, que suele expresarse en renunciaciones más o menos intempestivas de los ministros de Defensa, originadas en desacuerdos sobre el manejo de la paz.

Las relaciones civil-militares son entonces un sustrato que no puede dejarse de lado en cualquier análisis, pese a que la información sea sumamente limitada. Empero, la profesionalización de la Fuerza Pública, que empezó hace unos pocos años, da señales más promisorias porque permite desarrollar la relación civil-militar apegada cada vez más a las reglas del Estado de Derecho.

Pero un presidente debe lidiar en otros frentes. En su propio gabinete puede haber políticos arraigados en bandos partidistas y en intereses regionales que manejan agenda propia. Este asunto de las relaciones del presidente con la clase política se desarrolla en negociaciones muy complejas con las fuerzas maleables, imprevisibles pero necesarias del Congreso. Mencionar estas situaciones nos permite subrayar la magnitud del problema de que el país carezca de partidos políticos modernos, disciplinados, con liderazgos establecidos y reconocidos por todos. Por eso es más azaroso el manejo presidencial de la paz, que debe ajustarse permanentemente a un cuadro faccional enredado e incierto. A lo cual deben añadirse los tribunales de justicia o la Fiscalía que, a través de fallos y providencias, pueden alterar, en un momento determinado, la marcha las negociaciones con la guerrilla.

La presidencia enfrenta otra limitación mayor. «En las democracias», dice certeramente Juan Linz, «el tiempo sólo es controlable en parte por los líderes elegidos democráticamente. Y no lo es en las democracias presidenciales —particularmente cuando no existe la reelección. Un presidente cuenta con un número determinado de años —interrumpidos por el lapso entre la próxima elección y el momento en que el sucesor asume el cargo...» En nuestro caso estamos ante cuatrienios de presidentes institucional y políticamente débiles (característica más acusada en el caso de los dos conservadores, Betancur y Pastrana), que operan dentro de un Estado con bajos grados de legitimación, por demás fragmentado y alienado de una sociedad sometida a la secularización, al veloz cambio demográfico y aceleradas modernizaciones sociales y económicas que la desorientan en cuanto a sus valores y fines. Sociedad que no parece encontrar un liderazgo que fije con claridad los nuevos valores y los medios para realizarlos.

Los presidentes y el círculo de consejeros, apremiados por el tiempo, terminan aceptando que lo esencial de los procesos consiste en infundirles forma y ritmo sin que importe qué dirección tomen o qué legado dejen al próximo gobierno. Sin reparar en los límites intrínsecos de la negociación, quedan atrapados en la táctica y descuidan los objetivos estratégicos del Estado de derecho. De este modo las negociaciones, bastante apegadas a los apremios de la coyuntura, van desovillando día con día hilos que nadie logra anticipar; cajitas de sorpresas, aunque pocos se preguntan si desde un principio no abrieron la Caja de Pandora.

La indeterminación de agenda y cronograma de la negociación, si bien puede dar respiro a un gobierno, lleva en últimas a que la iniciativa política efectiva de la operación de los procesos no provenga del presidente, aunque éste cargue con los costos. Esta desventaja ha sido hábilmente explotada por la insurgencia, que mantiene un liderazgo vertical estable y por tanto ha conseguido acumular una experiencia negociadora y sabe manejar los tiempos del sistema político. Ante la imprecisión, la insurgencia (o el gobierno, ostensiblemente en el caso de Gaviria) juega moviéndose de lo sustantivo a lo procedimental o viceversa, de suerte que siempre haya sobre el tapete algún tema que deba ser aclarado y negociado. En otras palabras, los diálogos no han conseguido crear un campo común de significados sobre qué se entiende por «solución política al conflicto armado». La contrapartida de esto es que la insurgencia puede considerarse como haciendo parte de un entramado consolidado de negociación; como un jugador más que reconoce las reglas del juego y actúa como los otros actores, según conveniencia.

En estas condiciones se diluyó el objetivo central: que las formaciones armadas se conviertan en movimientos políticos legales. Esto pasó a segundo plano puesto que la insurgencia, respaldada en la misma retórica del Estado y de sectores sociales, religiosos y políticos, redefine el modelo de paz como un medio de hacer reformas sustantivas. Aparte de que dichas reformas podrían adelantarse dentro del sistema político, es decir, independientemente de los diálogos y negociaciones, el Estado ha hecho una concesión signi-

ficativa: da a entender a la insurgencia que es necesaria para que el país entre en la fase de reformas.

Sin embargo, cualquier presidente o negociador gubernamental sabe que no es titular del mandato democrático para acordar reformas sustantivas que, eventualmente, deben dejarse a una segunda instancia, sea el Congreso, un referendo o una nueva Asamblea Constituyente. Y aquí viene un problema más delicado. Puesto que las FARC y el ELN negocian contando antecedentes, el del constituyente de 1990-1991 resulta vital. Lo menos que pueden pedir es otra Asamblea y otra Constitución. Y recordemos cuán lejos estamos de ese escenario. En este camino el fin, la paz, queda desplazada por el medio, el proceso.

3. Finalmente mencionemos el punto de los procesos como escenario normal de negociar el conflicto político. Las políticas de paz (con alguna participación de la llamada sociedad civil) resultan altamente conflictivas en el sentido de que se han convertido en un campo más de la competencia por la distribución del poder dentro del sistema, y de la competencia por fuera del sistema entre las guerrillas rivales y del juego de los paramilitares y sus patrocinadores dentro y fuera del sistema. Tampoco deben descartarse las tensiones que diálogos y negociaciones producen en el seno de las organizaciones insurrectas. A todo esto debe agregarse el cruce de alianzas implícitas de guerrillas y grupos políticos legales. De este modo los diálogos gobierno-guerrilla son obstaculizados en distintos grados por la táctica electoral, por la táctica de cada una de las agrupaciones guerrilleras que esté participando en el esquema de paz, por la táctica de los paramilitares, y, además de todo esto, por los juegos florales de la llamada sociedad civil, concretamente los gremios empresariales y las ONGs, principalmente las que dependen de financiamiento externo. Estas interferencias inciden planteando distintos tipos de objetivos y escenarios de paz que, bajo el manto del pluralismo y el libre juego de opiniones, cuecen una sopa de letras espesa y más bien indigesta. Además, en la competencia de guerrillas rivales por llevar el protagonismo de la «paz» los negociadores oficiales deben trabajar simultáneamente en varias pistas evitando al máximo que una guerrilla neutralice la marcha de la negociación con la otra. En cuanto a los

paramilitares, sólo hasta el actual cuatrienio se ha definido, y un poco tardíamente, que no puede haber una negociación política similar a la entablada con las guerrillas y que las formaciones paramilitares deben ser reprimidas severamente, lo que, pese a algunos avances, aún está por verse.

En cuanto la sociedad civil demande el carácter público y abierto de los diálogos y negociaciones termina por favorecer un modelo de «paz televisada» y por hacer del proceso de paz una pieza de teatro que no tiene fin. Algo que conviene al gobierno de turno, pues la paz es una cortina de humo para no desarrollar políticas o para no rendir cuentas acerca de problemas sustanciales del país. Por lo que hace a los cálculos electorales creo que puede sustentarse que la política de paz del presidente Pastrana gravitó, por lo menos durante los dos primeros años, bajo los compromisos de la campaña presidencial que, como hemos venido insistiendo, armó dos coaliciones informales: los liberales oficialistas y el ELN de un lado y, del otro, las FARC y la campaña de Pastrana. División superada en principio mediante el consenso entre fuerzas políticas alrededor del Plan Colombia y la consiguiente formación del Frente Común contra la Violencia.

Creo necesario decir algo sobre el actual plan de paz. El presidente Pastrana optó por internacionalizar el conflicto, principalmente por la vía del Plan Colombia (que no comparte la Unión Europea y preocupa a nuestros vecinos), con costos y beneficios aún desconocidos. Entre los beneficios es justo subrayar el énfasis acordado al fortalecimiento del sistema judicial y a la protección de los derechos humanos, campo en el cual sigue siendo incontrovertible el déficit gubernamental y empeora el balance que ofrecen paramilitares y guerrillas.

Por la vía del Plan Colombia, Washington (que son muchas agencias gubernamentales, fuerzas políticas, intereses y ONGs) se ha convertido en un punto cardinal. Y en Washington se maneja una línea corrediza con las FARC: ¿son guerrilla o narcoguerrilla? Más decisiva es esta pregunta que aún no tiene respuestas claras: ¿cómo conciliar una política nacional de paz con la política norteamericana antidrogas que trae adosado un importante componente militar? ¿Podemos pensar en un escenario en que fracase el plan

antidrogas de los Estados Unidos en la región andina y prevalezca algún modelo de paz en Colombia? ¿Y qué condiciones tendrá ese modelo?

En este esbozo de las políticas de paz hemos insistido en la necesidad de considerar la debilidad intrínseca de los gobiernos, o si se quiere del Estado como negociador, que los ha llevado a convertir los procesos en una tabla de salvación, en el locus de la política. Tales procesos prolongados e indefinidos, recorrieron un círculo vicioso: restaron legitimidad cuando los gobernantes buscaban lo contrario. Las FARC y el ELN, que lo saben, apuestan a gobiernos débiles en el contexto de un Estado débil. Por eso no negocian su reincorporación a la vida civil y política sino a condición de llegar a acuerdos en firme sobre las llamadas reformas de estructura. ¿Pero cómo negociar éstas en los espacios circunscritos de las mesas de diálogo que son de primera instancia y tampoco están sujetos a reglas claras, acordadas y acatadas por las partes?

Para finalizar quisiera proponer este supuesto: si la política de paz del presidente Pastrana resulta exitosa, que es lo que quiere la inmensa mayoría nacional, se deberá, en gran medida, a la capacidad de superar limitaciones como las sugeridas en esta breve reseña.

•

JUAN GOSSAÍN, DIRECTOR DE NOTICIAS, RCN RADIO

Desde la óptica de las Fuerzas Militares, los temas de la seguridad y la defensa en el conflicto y el proceso de paz, el Dr. Luis Fernando Ramírez fue ministro de Trabajo, fue candidato a la vicepresidencia de la república en 1994 y actualmente es el ministro de Defensa Nacional. En tal carácter, repito, nos presenta el punto de vista de las Fuerzas Militares sobre la seguridad y la defensa en el actual proceso de paz en Colombia y en el conflicto que vive el país.

SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL CONFLICTO
Y EL PROCESO DE PAZ: UNA VISIÓN
DE LAS FUERZAS MILITARES

LUIS FERNANDO RAMÍREZ,
Ministro de Defensa Nacional

Con esta intervención me propongo compartir una perspectiva de lo que ha sido el proceso de paz pero, sobre todo, el proceso de reforma que se ha venido cumpliendo en el interior de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, como prerrequisito indispensable para poder sacar adelante el proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional actualmente.

Creo que para la posteridad se debería tomar una fotografía de la situación que existe hoy en día en Colombia. Veamos: desde el punto de vista de la insurgencia y de la contra-insurgencia el balance es el de unas FARC con aproximadamente 16.000 guerrilleros y 5.000 milicianos; un ELN decreciendo pero con aproximadamente 4.000 guerrilleros y otros tantos en milicias y como un fenómeno reciente pero crecientemente alarmante, la presencia de los grupos ilegales de autodefensa, comúnmente y mal llamados paramilitares, con un poco más de 8.100 miembros armados. Estas fuerzas, con otros grupos menores, son la mezcla letal de insurgencia y contra-insurgencia que con un poco más de 30.000 personas, ha puesto en jaque al país a pesar de ser su número absolutamente insignificante comparado con una población de más de 40 millones de habitantes.

De ahí que el drama real de los colombianos es no haber podido solucionar este problema, que no encaja dentro de lo que es una «guerra civil» ya que no se trata de 20 millones de colombianos peleando contra otros veinte, sino de 30 mil personas que armadas y con decisión han arrinconado por el terror y la zozobra al resto de millones de colombianos, con instituciones que, de alguna forma, no han encontrado en los últimos años la solución definitiva para superar el problema.

Hoy he oído a Fernando Cepeda y Enrique Santos afirmar que no es cierto que Colombia lleve 40 años de guerra, pero que si es cierto que lleva 20 años de procesos de paz. Y yo diría que tenemos que aprender de lo que ha venido ocurriendo en estos procesos de paz para, obviamente, orientar mejor el proceso actual, en el cual la estrategia ha sido básicamente, la de mantener un proceso de búsqueda política de la paz y simultáneamente modernizar las instituciones. Esto es tan claro, que yo no concibo el fin del proceso de paz sin haber modernizado previamente esas instituciones colombianas.

Eso implica, ante todo, que lo hagan los organismos de seguridad del Estado. Creo también que Colombia sigue pendiente de una reforma que haga más eficaz y más eficiente la justicia puesto que de nada serviría tener unos organismos de seguridad eficientes si la justicia no funciona, y en tercer lugar, y secuencialmente, hay que reformar la organización de las prisiones que es un tema complicado para todos los gobiernos, pero que hay que enfrentarlo. De nada serviría, tampoco, tener organismos de seguridad y de justicia eficientes, si las prisiones no funcionan. En el presente, para sorpresa de todos, en promedio en Colombia se evaden dos presos al día, lo que vale decir mas de 700 presos al año. En resumen, la lucha exitosa contra la violencia tiene una secuencia: organismos de seguridad—sistema judicial—sistema de prisiones, modernizados y eficientes.

MODERNIZACION DE LAS FF.MM. Y POLICIA

En el día de hoy, me referiré básicamente a los organismos de seguridad del Estado: a las Fuerzas Militares y a la Policía. Las reformas que se han acometido tienen que ver con tres elementos: Primero, contar con más y mejores hombres; Segundo, contar con más y mejor equipo y tercero, contar con las adecuadas herramientas legales para poder operar. En estos propósitos tenemos resultados importantes en unos sectores y parciales en otros.

En el caso de más y mejores hombres, Colombia no ha podido en los últimos diez años incrementar su pie de fuerza en lo necesario por restricciones de carácter presupuestal. Es más, en el caso del pie de fuerza de la Policía, el Estado ha venido reduciendo su planta de personal; de cerca de 130 mil hombres que tenía al comienzo de los 90, hoy se sitúa en un poco menos de 100 mil hombres, a pesar de que resulta absolutamente imperativo aumentar el personal de esta institución. Considero a manera de reflexión sobre la situación policiva, que, cuando se analice el régimen de transferencias o régimen fiscal de los municipios, sea tenido en cuenta el tema de seguridad, porque hoy en los presupuestos de departamentos y de municipios el rubro de seguridad prácticamente no existe, siendo el que debería tener la mayor prioridad dada la condición actual que sufre Colombia.

En estos dos últimos años el incremento en el pié de fuerza del Ejército no ha sido muy significativo, pero si se ha hecho un cambio muy importante en la calidad de los soldados. Hemos cambiado los denominados «soldados bachilleres» por soldados profesionales. Existía precedentemente un contrasentido en Colombia, en virtud del cual los soldados comúnmente conocidos como bachilleres, los que habían terminado la educación secundaria, iban a prestar el servicio militar pero no iban a combatir; lo cual producía grandes ineficiencias, ya que los soldados bachilleres consumían una porción importante del presupuesto (alimentación, entrenamiento, munición, etc.), pero al final no eran útiles militarmente y eso redujo la relación de soldado-combatiente con respecto a los grupos al margen de la ley. Pues bien, se adoptó un plan para incorporar 30.000 soldados profesionales en el curso de tres años, con lo cual logramos que este año se termine con 55.000 soldados de gran capacidad combativa. Son soldados debidamente equipados, entrenados, educados en el respeto de los derechos humanos, constituyéndose en un elemento que substancialmente cambia la forma de conducir las operaciones por parte del Ejército y de las Fuerzas Militares en general.

Bajo el liderazgo del Comandante General de las Fuerzas Militares, General Tapias y del Comandante del Ejército, General Mora,

se hicieron cambios de carácter táctico que no han implicado aportes presupuestales pero que involucran importantes modificaciones para combatir con eficiencia a los agentes generadores de violencia. Considero que el Ejército y las Fuerzas Militares se equivocaron en los últimos años al dispersar totalmente la tropa. Es decir, tener 40 soldados en un pueblo, 30 en otro, y en cada vereda en donde la gente pedía presencia de Fuerzas Militares, se enviaba un grupo pequeño que al quedar aislado era susceptible de ser diezmado. Lo que se ha hecho es un proceso que conduce a recomponer la formación del ejército, a reagruparlo y darle movilidad, para hacerlo más eficaz y menos vulnerable.

Con relación al componente de la estrategia de tener más y mejor equipo, éste se ha concentrado principalmente en helicópteros. Esto debido a que la preocupación de hoy no es, como en los años 70, la de comprar aviones estratégicos, Mirage, Kafir, ni corbetas ni fragatas, ni submarinos, sino helicópteros para poder confrontar el conflicto interno. Se ha hecho por primera vez en muchos años, y no obstante las restricciones presupuestales, un esfuerzo muy grande para llevar a la fuerza aérea a cuadruplicar su capacidad en materia de helicópteros artillados pesados. En un país como Colombia, de un poco más de un millón ciento cuarenta y un mil kilómetros cuadrados y de abrupta topografía, difícilmente se puede acceder a regiones apartadas a no ser que tenga alta movilidad, y la fuerza aérea solamente tenía cuatro helicópteros Black Hawk artillados, para cubrir toda la geografía nacional. Cuando atacan un municipio lo primero que se envía es un helicóptero artillado, y Colombia solamente se defendía con cuatro. Pues bien, éstos se están cuadruplicando, poniendo en servicio 16 helicópteros artillados pesados en este semestre, a la vez que se aumentan substancialmente (aproximadamente en un 70%) los helicópteros para movilizar tropas. Todo esto como parte de la estrategia combinada de recursos del presupuesto nacional y del paquete aprobado en el congreso de los Estados Unidos para apoyo al Plan Colombia, que ha centrado fundamentalmente sus esfuerzos en que las Fuerzas Militares cuenten con esta movilidad, de esta manera ya hemos recibido 33 helicópteros UH-1N para apoyar la lucha contra el narcotráfico,

Colombia ha adquirido 12 helicópteros Black Hawk artillados para la Fuerza Aérea de los cuales se recibieron 5 el año pasado y 7 llegarán en el presente año, estaremos recibiendo 16 helicópteros Black Hawk para apoyo de transporte en el Ejército Nacional y estaremos recibiendo en el segundo semestre 35 helicópteros Huey-2 aprobados también por el congreso de los Estados Unidos, helicópteros usados y de poca productividad comparados con el Black Hawk pero que pueden cumplir con el objetivo de movilizar tropas.

El tercer elemento de la estrategia, mejores herramientas legales, consiste en una serie de reformas muy significativas y probablemente poco conocidas, para reformar toda la estructura interna de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. En efecto, el año pasado, el Congreso de la República otorgó al Presidente facultades extraordinarias para legislar pro-tempore y sobre temas relativos a la estructura militar. En su desarrollo el Presidente expidió 11 decretos que reformaron completamente las Fuerzas Militares y la Policía, diseñando un nuevo régimen de carrera, que prevé cómo ingresan los militares, cómo ascienden, cómo se retiran y que ofrece autorizaciones para flexibilizar el modo de desvincular miembros de la Fuerza Pública que no cumplen con los estándares mínimos para permanecer en la institución. Igualmente se expidió el nuevo Código Penal Militar incorporando el sistema acusatorio y garantizando un funcionamiento eficiente de la justicia penal militar.

Esto está conduciendo a tener unas Fuerzas Militares y de Policía mucho más profesionales, más cohesionadas, con gente comprometida y merecedora de estar en la institución. Además se adoptaron regímenes de evaluación y mecanismos de promoción para oficiales y suboficiales, centrados en privilegiar la habilidad profesional, y diseñados para impulsar el esfuerzo individual y la obtención de resultados militares, incluyendo la posibilidad de ascensos anticipados en cada promoción por excepcionales calidades, resultados en orden público y gestión operacional, regímenes para los servicios de salud; se dictaron las normas indispensables para que los soldados profesionales tuvieran un marco de protección jurídica y acceso a la seguridad social. Y aquí cabe un paréntesis: estos soldados que estaban siendo entrenados por las Fuerzas Militares

pero sin un compromiso de largo plazo y sin protección social, eran frecuentemente incorporados a grupos de autodefensas ilegales, que ofrecían condiciones económicas más competitivas. A raíz de las reformas, la tasa de retiro de soldados bajó dramáticamente.

Los once decretos expedidos en uso de las facultades extraordinarias complementan el proceso de modernización en que se ha empeñado esta administración.

EL NARCOTRÁFICO

Considero que es imposible referirnos al proceso de paz o al conflicto interno, sin hablar del narcotráfico. Un cambio importante conseguido al interior de las Fuerzas Militares es haber reconocido que el narcotráfico es la gasolina que alimenta realmente esta guerra. La mayor fuente de financiación para la guerrilla y para los grupos de autodefensa ilegales en el presente, se llama narcotráfico. No voy a entrar en la discusión semántica de si son carteles o si son narco-guerrilla, lo único que pongo de presente son los hechos. El propio Carlos Castaño ha dicho que el 70% de sus ingresos proviene del narcotráfico y se sabe que una cifra parecida de los ingresos de la guerrilla también proviene del narcotráfico; estos hechos obligan a tomar el tema como una prioridad, que lleva a creer que si derrotamos el narcotráfico, estamos golpeando en un aspecto vital a los grupos al margen de la ley, independientemente de su ideología política. Derrotar el narcotráfico resulta condición necesaria pero no suficiente para lograr la paz.

En el proceso de derrotar el narcotráfico, la estrategia adoptada consta de dos grandes aspectos. El primero es el papel que tiene que jugar la comunidad internacional y que este gobierno ha «vendido» relativamente bien ante el mundo, y en segundo lugar, el papel nuestro y de los demás países productores o de tránsito, para reducir la oferta.

En primer lugar, los países desarrollados, los países consumidores deben disminuir seriamente la demanda de drogas ilícitas (y por eso recibimos con satisfacción las declaraciones de la nueva admi-

nistración de los Estados Unidos de que va a hacer esfuerzos adicionales para reducir el consumo). Estados Unidos consume más de 300 toneladas de cocaína anualmente y Europa consume más de 200 toneladas por año, y por ello, mientras esos países no reduzcan el consumo habrá violencia en Colombia originada en el narcotráfico.

En segundo lugar —lo hemos dicho con absoluta claridad— esos mismos países deben contribuir a establecer controles para el envío de precursores químicos a la región andina. El permanganato de potasio y varios otros precursores no se producen en Colombia, son producidos en Estados Unidos, Europa y en otros países, y se deben establecer controles adicionales para evitar el envío de ellos al país.

En tercer lugar, la comunidad internacional tiene que hacer esfuerzos serios para controlar el lavado de dinero. Yo me declaro hondamente frustrado al comprobar que lo que ha hecho la comunidad internacional en materia de lucha contra el lavado de dinero es absolutamente pobre. Esto lo hemos dicho con toda claridad al Congreso, a la administración de los Estados Unidos y a los gobiernos de Europa. Un kilo de cocaína, por ejemplo, en el Putumayo, vale dos mil dólares, o un poco menos, pero ese mismo kilo de cocaína suministrado por el mayorista en Miami, Madrid u otra ciudad europea, cuesta 30 mil dólares. Los 28 mil dólares de diferencia usualmente se quedan en los bancos internacionales.

En cuarto lugar, nosotros creemos que la comunidad internacional tiene que hacer un esfuerzo para el control del envío de armas. Colombia se volvió un país al que todo el mundo está enviando armas, los fusiles AK-47 producidos en Europa, rifles y armas como los misiles RPG7 que usa la guerrilla y que son producidos en Estados Unidos o en Europa. Los países de la comunidad internacional tienen que hacer esfuerzos serios para evitar el envío de armas a ese mercado negro que alimenta la violencia y el crimen.

Y, finalmente, le hemos dicho a la comunidad internacional que tiene que permitir un mayor y justo acceso a los productos legales del país y remover las barreras comerciales, porque para ilustrar el tema con ejemplos, si un campesino en Colombia decide producir

caña y pretende exportar azúcar a los Estados Unidos se encuentra con una respuesta: existe un sistema de cuotas que no le permite exportar azúcar. Si entonces decide moverse hacia cultivos de algodón y exportar textiles, hay un sistema de cuotas que no le permite exportarlos, o si decide cultivar banano y exportar a Europa le dicen que hay un sistema de cuotas y no le permiten exportar el banano y paradójicamente, por otro lado, si le compran los productos ilegales. La comunidad internacional creo que ahora está comprendiendo el problema y aceptando su corresponsabilidad.

¿Qué tiene que hacer Colombia para reducir la oferta? Tenemos dos estrategias, el primer componente, en el cual creemos firmemente, son los planes de desarrollo alternativo. Que los campesinos que no son criminales, los que tienen una, dos o tres hectáreas en hoja de coca, puedan tener opciones distintas. Sustitución de cultivos, créditos, asistencia técnica, son complementos fundamentales para que la erradicación manual funcione plenamente. Por primera vez habrá recursos para este componente social con el Plan Colombia, aunque aun son insuficientes y van a requerir un esfuerzo gerencial descomunal para su implantación.

El segundo componente de reducción de oferta, desde el punto de vista de las Fuerzas Militares y de policía, es el de enfrentar a las varias cabezas de una multinacional muy rentable, la del narcotráfico, que no va a aceptar buenos consejos, y contra la cual hay que usar toda la Fuerza Pública. Consecuentemente en este empeño están comprometidos la Policía, que ha venido cumpliendo un papel destacado desde mucho tiempo atrás, y ahora el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Todos trabajando de tiempo completo para combatir el narcotráfico, en este caso con la erradicación y con la interdicción. Se ha estado fumigando, como ustedes saben, cerca de 50 mil hectáreas por año y este año se va a incrementar ese objetivo; se va a incrementar igualmente la interdicción por todos los medios posibles, no solamente terrestres, pues se ha incrementado fundamentalmente la interdicción fluvial y marítima, la Armada se volcó a combatir el narcotráfico y de hecho fue la entidad que más droga decomisó el año pasado. El Ejército está haciendo decomisos, se creó la Brigada contra el

narcotráfico, la Fuerza Aérea está de tiempo completo combatiendo el tráfico ilegal, inutilizando en promedio tres aviones del narcotráfico al mes, algunos de los cuales han debido ser derribados.

Los resultados que estas medidas están produciendo pueden medirse al comprobar que el año pasado se decomisaron 104 toneladas de cocaína; más del doble de lo que se hacía en cualquier año anterior. Las 104 toneladas de cocaína decomisadas puestas en el mercado de Miami, al mayorista, valen tres billones de dólares, es decir, casi tres veces el valor del apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia. Estos son recursos que les evitamos a los narcotraficantes y a sus aliados para utilizar en la guerra en Colombia. Definitivamente creo que la paz en Colombia pasa por la solución del narcotráfico y la solución del narcotráfico pasa por que la comunidad internacional asuma su responsabilidad de trabajar con Colombia contra todas las facetas del narcotráfico.

Mi principal preocupación es que al tiempo que cada vez la Fuerza Pública tendrá más victorias militares (porque las reformas al interior de las Fuerzas Militares están produciendo resultados), estos triunfos no estarán acompañados al mismo ritmo por el componente social que se requiere, para evitar protesta social.

Me explico: cuando llegamos al Putumayo a fumigar, o al Guainía, o al sur de Bolívar, existen personas que están quedando sin empleo porque vivían de la droga, eso requiere muy rápido un aparato fuerte del Estado, que llegue con inversión social, con infraestructura, con generación de subsidios contra el desempleo en esas regiones. En ese aspecto tenemos que movernos muy rápido porque, de lo contrario, las victorias militares van a traducirse en la existencia de grupos adicionales de personas que van a quedar sin ingresos y que en buena parte pasarían a aumentar los grupos marginales que tienden a la criminalidad en ciudades y campos o que se constituyen en asentamientos de desplazados, en situación de miseria. Ahí tenemos el reto más grande y debemos ser suficientemente creativos para pasar de la ilegalidad a la legalidad a cientos de miles de raspachines y campesinos que hoy viven de los cultivos ilegales y están forzados a comercializarlos con grupos al margen de la ley. Europa tiene en estos programas una estupenda

oportunidad de vincularse activamente, pues hasta ahora ha sido esquiva a actuar conforme a su corresponsabilidad en el problema de consumo de narcóticos.

LAS AUTODEFENSAS ILEGALES

Un fenómeno creciente, al que es necesario prestarle toda la atención, es el de las autodefensas ilegales comúnmente conocidas como paramilitares. Este fenómeno por su terrible poder criminal es motivo de preocupación al interior de las Fuerzas Militares, lo mismo que en la opinión pública colombiana y en la comunidad internacional. A mi modo de ver las autodefensas surgieron por tres causas fundamentales. Primero, por las atrocidades y abusos de la guerrilla; yo creo que lo que más ha contribuido a que los grupos de autodefensa en Colombia crezcan es la famosa Circular 002 de las FARC. La amenaza de secuestro generalizado disparó el crecimiento de los grupos de autodefensa. Lo mismo que los ataques a las poblaciones y las extorsiones.

En segundo lugar está la responsabilidad del Estado colombiano, porque tradicionalmente no le ha garantizado la seguridad a la que tiene derecho la gente en todos los lugares del territorio colombiano; hay que reconocer que no tenemos la capacidad de estar en cada sitio, particularmente en el sector rural. En las ciudades es posible tener escoltas y hay compañías de seguridad, en el campo no hay esa solución y el Estado tampoco ha proveído ni provee todavía esa seguridad total.

Y en tercer lugar, creo que también es causa de este fenómeno la actitud equivocada de sectores de la población civil colombiana que han financiado estos grupos; es necesario hacer mucha pedagogía sobre lo equivocado de esta decisión. Pero también tengo que advertir aquí que hay en Colombia una especie de doble estándar sobre la actitud de la gente respecto a los grupos de autodefensa ilegales. Los medios de comunicación y la opinión están concentrados en los posibles vínculos entre militares y los grupos de autodefensa ilegales, fenómeno que no puede negarse que existió y que es

probable que a niveles bajos aún se presente, pero estos casos los hemos sancionado y los seguiremos sancionando, es un problema que hay que reconocer y que hay que castigar. Pero para mí hay un problema mucho más grave y son los vínculos de la población, los de los civiles que se están reuniendo con los grupos de autodefensas, ya que además los financian y sin embargo, ahí pareciera que no hay debate. En Colombia hay un doble estándar: si un gobernador, como ha ocurrido, se reúne con Castaño no pasa nada, pero si un sargento recibe una llamada a su celular de un miembro del grupo de autodefensa va a la cárcel. Creo que hay que corregir ese doble estándar que tenemos en Colombia para de verdad solucionar el problema de los grupos de autodefensa en el país.

No me cansaré de repetir que esta deformación de la sociedad colombiana se corrige en parte con incremento en el pie de fuerza de fuerzas militares y policía y con más instrumentos legales para la fuerza pública, la justicia y el sistema penitenciario. Esta deformación ocurre por falta de Estado y no por exceso de Estado. Así que no debe darnos miedo tomar esas decisiones para que la gente del común no tenga la excusa de recurrir a lo que llaman «la justicia privada».

EL PROCESO DE PAZ

En cuanto al proceso de paz que se está adelantando debo decir que como todos los procesos, tiene algunos riesgos, dificultades e igualmente tiene desarrollos importantes. Se ha internacionalizado el proceso, lo cual lo hace menos reversible; se ha cambiado la diplomacia de la guerrilla por una más eficaz diplomacia por la paz a cargo del gobierno. Creo sin embargo que debemos avanzar más rápido en hacer las reformas que sean indispensables para quitarles argumentos a los grupos al margen de la ley. No creo que debemos esperar a pactar todo lo que hay que cambiar con la guerrilla; por el contrario, toda reforma que se perciba necesaria hay que hacerla sin mayor dilación y como laboratorio anticipado de generación de consensos.

Aunque el alto comisionado para la paz hará una exhaustiva presentación sobre el proceso de paz, hay dos o tres temas que debería dejar como motivo de reflexión para que se discutan en este seminario. Primero, me preocupa si realmente en algún momento las FARC, así se firmen procesos o acuerdos, van a dejar las armas. Ese es un punto muy importante porque creo que la opinión pública colombiana no está preparada para que se le diga que hay un acuerdo, una firma de unos documentos, pero que la guerrilla no entrega las armas. Porque, a su vez, eso conduce a un nudo gordiano en virtud del cual los grupos de autodefensa dicen que si la guerrilla no entrega las armas ellos tampoco, con lo cual seguiríamos en el círculo vicioso. Es un aspecto que se debe ir mirando con la debida antelación.

El segundo tema, que hay que contemplar como un posible escenario, especialmente ahora que miramos las experiencias de Centroamérica, es si las FARC, a pesar de estar en un proceso de paz, han descartado lo que comúnmente se denomina «la ofensiva final». La acumulación de armas por tanto tiempo y de gente que han reclutado, usualmente en la lógica de estos grupos subversivos conduce a que siempre traten de realizar la ofensiva final, creyendo que no tienen nada que perder. Si producen un impacto militar e intimidan a la población llegan al poder, que es lo que siempre han buscado, pero si pierden, es tal el daño que han causado a la infraestructura mediante actos de terrorismo, que la sociedad queda dispuesta a negociar. Dentro de las hipótesis para el análisis, no hay que descartar, aunque se esté en este proceso de diálogo, que todavía las FARC conserven, como creo que lo hacen, la opción de su ofensiva final. Para enfrentar esta posibilidad tienen que estar preparados no sólo las Fuerzas Militares, que lo están, sino la propia opinión pública y el conjunto de la población colombiana, que no sé si lo están.

Existe además un tema de coyuntura que requiere atención, y es el relativo al canje. Creo que es un problema que hay que discutir abiertamente y dejarlo como tema de reflexión. A mí me parece que el canje es bueno al final de un proceso de paz, pero me parece contraproducente que se logre el canje como primer acuerdo, en

sustitución de los demás, porque el canje como tal tiene entre otros los siguientes inconvenientes:

Primero, el devolver policías y soldados secuestrados podría estimular más el secuestro, es decir, si ahora uno intercambiara todos los policías y soldados por guerrilleros, lo que veríamos en seis meses sería más secuestros de policías y en un año estaríamos hablando de un nuevo canje y así sucesivamente hasta instaurarlo como permanente. Hoy en día no están secuestrando más soldados y policías porque el instrumento no ha servido, pero si el canje funciona, el instrumento de secuestrar prueba que es exitoso. En segundo lugar, es claro que a la insurgencia le interesa recuperar cuadros directivos, porque la guerrilla está creciendo hoy en día fundamentalmente con menores de edad, más no tiene cuadros directivos, por lo que para ellos resulta importante recuperarlos. En tercer lugar, me preocupa que se pueda fomentar una guerra sucia, para hablarlo con toda claridad. Cuando el instrumento dispara los secuestros, cuando por cada guerrillero nuevo que se capture se secuestra un policía para tener un material intercambiable, eso inexorablemente nos puede conducir a una guerra sucia en donde las partes equivocadamente pueden llegar a la conclusión de que es poco deseable tener «material canjeable» y eso conduce a guerras sucias, de manera que estos temas deben quedar como reflexión para que se discutan. Otro tema diferente es el del intercambio humanitario para quienes se encuentren gravemente enfermos.

También vale la pena profundizar en los mecanismos que estimulen la desertión de miembros de la guerrilla y de los grupos de autodefensa y se induzca la compra o recompensa por entrega de fusiles y armas no amparadas. Tengo la firme convicción de que por esta vía podremos recuperar para la sociedad, miles de personas que hacen parte de estos grupos sin tener identidad ideológica. Son también víctimas de la guerrilla o de los grupos de autodefensa que los han reclutado a la fuerza y les han enseñado o los han conminado a estar al margen de la ley. Este debe hacer parte del análisis del postconflicto, que resulta imperativo para imaginarnos la Colombia en paz y empezar desde ahora a vincular a sectores productivos, previo un proceso de entrenamiento, a estos miles de

compatriotas a quienes el destino sólo les deparó hasta ahora el manejo de un fusil.

Quiero decirles a manera de conclusión, que nosotros en este proceso, Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía, somos partidarios del proceso de paz, lo hemos respaldado claramente, creemos en la solución negociada del conflicto, pero también creemos que es requisito indispensable para que el proceso de paz funcione, que la contraparte, los grupos insurgentes y los grupos al margen de la ley, sientan que tienen de este lado un Estado fuerte. No es disminuyendo ni atacando al Ejército; es fortaleciéndolo, es haciéndolo más responsable, más fiscalizable; es tomando las medidas como las que se han tomado, como tendremos unas Fuerzas Militares y de Policía más profesionales, más exitosas y más victoriosas. También se requiere un trabajo mancomunado de la sociedad y su fuerza pública. Esta guerra no la dan los militares porque se la hayan inventado, esta guerra la dan los militares y los policías como el brazo armado de la democracia colombiana, de acuerdo con un mandato que les dio el pueblo, de manera que no tienen sino buena voluntad para trabajar estrechamente con la población colombiana.

En resumen, se requiere continuar con el proceso de modernización de las instituciones, se requiere modernizar la justicia, se requiere modernizar el régimen penitenciario, se requiere un Estado fuerte, respetuoso de los derechos humanos, no un Estado débil: esa es la condición necesaria para que se logre la solución negociada al conflicto, que todos estamos esperando.

•

JUAN GOSSAÍN, DIRECTOR DE NOTICIAS, RCN RADIO

Muchas gracias, señor ministro, por sus reflexiones pero sobre todo por la gran cantidad de información contenida en su intervención. El ministro Ramírez comenzó su intervención precisamente recordando que llevamos 20 años continuos en esta etapa histórica de procesos de paz en Colombia. A su turno el profesor Palacios,

en la intervención anterior, recordaba también que en esa etapa, el proceso exitoso se cumplió hace exactamente diez años, durante el gobierno del presidente Gaviria, con todas las aproximaciones que se habían heredado del gobierno Barco. Para mantener la coherencia precisamente de la historia, de los hechos y de los protagonistas, vamos a hablar de esos diez años en este momento. Van a hablar en éste que es el mejor escenario para recordarlo, dos de los protagonistas principales de la desmovilización del M-19 y del EPL hace diez años exactos. Antonio Navarro Wolf era uno de los comandantes en ese momento del M-19, grupo que se desmovilizó en su acuerdo con el gobierno, gobierno representado entre otros por Rafael Pardo Rueda, que era consejero de paz y seguridad nacional, luego fue ministro de Defensa y hoy es el director del noticiero CM&. El doctor Navarro Wolf, ustedes lo saben, fue víctima de un atentado contra su vida, luego vino la desmovilización y hoy es representante a la cámara. Primero interviene el doctor Navarro Wolf, luego el doctor Pardo Rueda, como digo actores principales de ese proceso de hace diez años.

LA DESMOVILIZACIÓN DEL M-19,
DIEZ AÑOS DESPUÉS

ANTONIO NAVARRO WOLF
Representante a la Cámara

Mucho se ha dicho en contra y en favor de la manera como el M-19 —seguido del EPL, el ERP y el Quintín Lame— dejó las armas hace diez años. Algunos creen que esa paz fue insignificante para la historia del país, que fue una mera reinserción. Para otros, en cambio, el nuestro es un ejemplo que debe copiarse, al considerarlo como «el único y genuino proceso de paz». Esta es una buena oportunidad para empezar a entender nuestro punto de vista acerca de lo que pasó, para bien de la historia y también del actual proceso de paz.

A fines de la década de los 80, el M-19 había experimentado todas las modalidades de lucha, desde la guerrilla urbana hasta la organización de un pequeño pero macizo ejército revolucionario rural. Para entonces, estábamos convencidos de que la victoria de la revolución armada no era posible, porque cada ascenso militar nuestro era finalmente neutralizado por las Fuerzas Armadas. Pero sobre todo, porque la población colombiana no quería acompañar el esfuerzo guerrillero. La gente apoyaba e incluso aclamaba en ciertos momentos a la fuerza guerrillera (fuimos la guerrilla más popular de la historia de Colombia), pero no se incorporaba masivamente a sus filas, ni mostraba disposición de apoyar las armas de la revolución por la vía de la insurrección popular.

De otra parte, Carlos Pizarro ya vislumbraba que el escalamiento de la guerra nos comprometería inevitablemente con las actividades del narcotráfico y la masificación del secuestro, para garantizar el flujo de recursos que demandaban los nuevos niveles del enfren-

tamiento militar, lo cual terminaría por «degradar las armas de la revolución», según afirmó en diversas ocasiones.

En 1988, el secuestro y posterior liberación de Alvaro Gómez volvió a poner con fuerza el tema de la paz sobre el tapete y el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) mostró interés en iniciar un proceso de negociación con el M-19. Pero estaba claro para nosotros que no valía la pena repetir la experiencia de la época de Betancur, cuando la paz terminó convertida en arma de guerra. Tampoco era deseable emprender una negociación parcelada al dejar por fuera a la guerrilla más antigua y numerosa: las FARC.

En un intento por emprender el proceso conjuntamente, Carlos Pizarro visitó La Uribe, Meta, y permaneció en el campamento del secretariado de las FARC durante un mes. Discutió intensamente con los comandantes de esa organización guerrillera, encabezados por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, hasta convencerse de que un proceso de paz con ellos sería a paso de tortuga. Se dio cuenta de que al M-19 le tocaría arrancar solo y nos convenció de esta idea a los demás.

Y para brindar certezas de que no se iba a repetir un proceso de paz para la guerra, lo diseñó de un modo que Otty Patiño ha denominado «proceso cerrado», esto es, uno en el que de antemano, se anuncia el resultado final, en contraposición con los llamados «procesos abiertos» que —como el actual— no tienen final pre-acordado. Por eso, en enero de 1989, Pizarro anunció que el proceso de negociación, que no tenía plazos y cuyas condiciones se debían negociar, sí tenía un final previsto: el M-19 dejaría las armas.

Durante la negociación con el gobierno de Barco fue cada vez más claro que el M-19 estaba haciendo una apuesta eminentemente política, en busca del poder. Lo que importaba no era lo que se consiguiera en la mesa de negociaciones, sino el efecto que el proceso produjera en el estado de ánimo de los colombianos.

Pero a esa decisión se fue llegando poco a poco, en medio del debate interno. Teníamos como punto de referencia la propuesta del llamado «diálogo nacional», concepto acuñado por Jaime Bateman en 1980, que planteaba que el conflicto sólo podía superarse

resolviendo sus causas estructurales, sociales, económicas y políticas mediante el diálogo y la concertación de los colombianos. Para avanzar en ese terreno, como no había podido hacerse en 1984 durante el intento con Betancur, se organizó un sistema de «mesas de trabajo». Estas sesionaron durante el período de la negociación en las diferentes ciudades y discutieron sobre las reformas políticas, económicas y sociales que el país necesitaba. Las conclusiones de tales mesas enriquecieron las propuestas que el M-19 levantó una vez incorporado a la vida civil, pero no tuvieron mayor aplicación, excepto las que se convirtieron en normas constitucionales en 1991.

El corazón del proceso seguía siendo la política. El gobierno aceptó que un grupo de militantes del M-19 saliera a la actividad pública, a condición de que sobre ellos no hubiera procesos judiciales pendientes. Esto permitió conectar al país con Santo Domingo, Cauca, donde estaba concentrada la fuerza guerrillera. También se negoció una favorabilidad para que los firmantes de acuerdos de paz participáramos en condiciones especiales en la elección del congreso, las asambleas y los concejos. Sin embargo, ello requería modificar la antigua constitución de 1886, lo cual no fue posible, pues el acto legislativo que aprobaba la reforma se hundió durante su trámite en el senado: le colgaron el llamado «narcomico» en una de las últimas votaciones.

LA PAZ PARA EL CAMBIO

En diciembre de 1989, cuando de lo negociado en la mesa no quedaba sino lo concerniente a la reinserción, discutimos si aplazábamos por un período indeterminado la firma de los acuerdos de paz, o si dábamos un paso adelante, prácticamente sin paracaídas. Decidimos lo segundo. Pesó enormemente en nuestra decisión la valoración de lo que estaba pasando en el país. Nos convencimos de que los colombianos estaban claramente decididos a apoyar opciones de cambio, pero pacíficas. Vimos que ese espacio estaba vacío y nosotros podíamos llenarlo.

Claramente, fue mucho más que un proceso de reinserción. La paz era la herramienta que nos permitiría meternos con una fuerza que calculábamos grande, en la búsqueda del poder por vías legales. Para confirmarlo, decidimos que Carlos Pizarro y yo viajaríamos a Bogotá, en enero de 1990, a mirar en el terreno si teníamos razón.

Por supuesto que la teníamos. La respuesta del país fue superior a nuestras más optimistas predicciones. Fuimos recibidos como el hijo pródigo y nos dimos cuenta que teníamos un enorme capital político entre las manos. Pizarro se convirtió de la noche a la mañana en un ídolo de multitudes.

Cambiamos las balas por los votos y vinieron los resultados. En una campaña relámpago de dos meses, Pizarro consiguió 70.000 votos como candidato a la alcaldía de Bogotá. Cuando se preparaba su inscripción como candidato a la Presidencia de la República, lo mataron por la espalda, en un avión en vuelo. La decisión inicial fue enterrar a Carlos en paz y ante el tamaño de la agresión, dejamos en suspenso la decisión de continuar cumpliendo los acuerdos de paz. Una semana después, en el seno de una reunión de la dirección del M-19, resolvimos por unanimidad continuar: el entusiasmo y vinculación masiva de los colombianos al proyecto político que encarnábamos, nos mostró que no podíamos dar reversa.

Yo heredé las banderas de Pizarro y obtuve 740.000 votos (12.5%) en la elección presidencial de mayo de 1990.

Simultáneamente se abrió paso la idea de una Asamblea Constituyente, tema que venía de la incapacidad del Congreso de reformar la Constitución. Con la elección presidencial de mayo de 1990, se votó la llamada «séptima papeleta» y se abrió paso lo que sería la Constitución de 1991.

Una vez elegido y antes de su posesión, el presidente César Gaviria promovió un acuerdo político para sacar adelante la Asamblea. El acuerdo lo firmamos cuatro fuerzas políticas: el partido liberal, el conservador, el Movimiento de Salvación Nacional (encabezado por Alvaro Gómez) y la Alianza Democrática M-19 (organizada con dirigentes del eme y otros sectores de izquierda democrática), fuerzas que habíamos conseguido más del 98% de

los votos en las anteriores elecciones presidenciales. Asimismo, acordamos conformar un gobierno de unidad nacional, para garantizar el cumplimiento de lo pactado. En tal contexto —no como resultado de los acuerdos de paz—, el M-19 ocupó el Ministerio de Salud.

Para algunos analistas políticos, la paz del eme y la constitución de 1991 no están conectadas por relaciones de causa-efecto. En estricto sentido, fueron procesos que coincidieron, pero que se alimentaron recíprocamente. La AD M-19, encarnó la tesis que vislumbramos durante nuestra negociación: la decisión de cambio pacífico de los colombianos. Por eso, en la elección de miembros de la asamblea constituyente en diciembre de 1990, nuestra lista fue de lejos la más votada: consiguió el 27%, el porcentaje más alto conseguido en la historia colombiana por una fuerza de izquierda.

Tal votación para un cuerpo colegiado como la constituyente, fue muy superior, porcentualmente, a la conseguida en elecciones presidenciales por Luis Carlos Galán en 1982, del 11%, o a la de Jaime Pardo en 1986, del 4.6%. Sólo había sido superada, en la historia de las fuerzas no tradicionales, por la votación del General Rojas Pinilla en 1970, que fue del 39%, fruto del desgaste del Frente Nacional.

Confirmada por este éxito electoral, se produjo la decisión de otros grupos guerrilleros como el EPL, el PRT y el Quintín Lame, de firmar también acuerdos de paz con el gobierno. Hubo asimismo una propuesta al gobierno de la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar de incorporarse a la vida civil a cambio de treinta asientos (adicionales a los setenta elegidos por voto popular) en la asamblea, propuesta que entiendo que el gobierno desestimó. Nuestro éxito político estuvo a punto de convertirse en el motor de la paz total de Colombia.

Muchas de las críticas a los procesos de paz de hace diez años se sustentan en el derrumbe de la AD M-19 después del 4 de julio de 1991, fecha en que se sancionó la nueva Constitución.

Veamos qué pasó en el terreno electoral. En las elecciones siguientes para «nuevo congreso» el resultado ha sido objeto de muchas controversias, pues aunque la lista de la AD M-19 fue la

más votada con el 9%, seguida de la encabezada por Andrés Pastrana con el 8%, lo cierto es que la llamada «operación avispa» (múltiples listas liberales y conservadoras clientelistas) consiguió las mayorías en el Congreso. Con ello se produjo una especie de «retorno de los brujos» al Parlamento.

Al analizarlo posteriormente, a la luz de los resultados electorales de octubre de 1991, se ha argumentado repetidamente que el error radicó en que los constituyentes nos autoinhabilitamos y no encabezamos las listas al congreso. Esto es parcialmente cierto. Más importante para consolidar la renovación hubiera sido otra medida que no se discutió suficientemente entonces: la de impulsar las listas únicas para todos. Ello hubiera hecho imposible la «operación avispa» y hubiera enfrentado en condiciones de igualdad a todas las fuerzas políticas.

Lo cierto es que la maquinaria clientelista no se jugó a fondo en las elecciones de constituyente, pues acababa de ser elegida al congreso en marzo de 1990, con casi 8 millones de votos. Y cuando tuvo que vencer o morir en 1991, nos venció en un terreno que ha sido siempre favorable al clientelismo: el Congreso. Esa victoria, magnificada hasta por nosotros, fue un punto de inflexión que no supimos superar.

EL PLURALISMO POLÍTICO SOBREVIVE

El tema nos lleva a una reflexión de fondo. La Constituyente de 1991 escogió un modelo de pluralismo y muy baja organicidad para la política colombiana. Tal modelo está hoy sometido a revisión, pues hace que los partidos sean muy débiles frente a sus líderes y que prime un individualismo exagerado. Pero en aquel momento, la Asamblea Constituyente, el cuerpo colegiado más pluralista y representativo en la historia de Colombia, hizo bien en escoger un modelo pluralista. Pero la baja organicidad de los partidos expresada en la posibilidad de múltiples listas por partido, y el fracaso del intento de la Constituyente de minimizar el clientelismo, provocaron que la expectativa de cambio político se frustrara, cuenta de cobro que terminamos por pagar todos los constituyentes.

En este sentido, la AD M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional fuimos las primeras víctimas de nuestro propio invento. Pero si miramos con lente amplia el desarrollo de la política colombiana en esta década, debemos decir que no todo se perdió, pues generamos una apertura con perspectivas bien distintas a las que ha ofrecido la férula bipartidista de hace 150 años.

En efecto, a diferencia del pasado —cuando movimientos como la Anapo, en los setenta, o el nuevo liberalismo, en los ochenta, fueron arrasados por la tradición bipartidista—, los votos hoy llamados «independientes» se han mantenido en ese espectro durante los últimos diez años. En 1994 esos votos abandonaron a los ex constituyentes, para apoyar a Antanas Mockus y a otras alcaldías no tradicionales. En 1998 casi hacen presidenta a Noemí Sanín, que alcanzó nuestro mismo 28% en la primera vuelta. En octubre del 2000, volvieron a elegir a Mockus en Bogotá, a Floro Tunubalá, a Guillermo Alfonso Jaramillo y a Parmenio Cuéllar en tres gobernaciones independientes. Calculamos que por lo menos 2.5 millones de votos se depositaron por expresiones «independientes» en las últimas elecciones.

Y nosotros somos parte de esa corriente. Entonces, ¿por qué aceptar sin discusión que en política electoral, la paz de 1990-91 ha sido un rotundo fracaso? Los resultados admiten, válidamente, varias lecturas.

Si el modelo de participación política de 1991 hubiera sido el de la Constitución Salvadoreña de post-guerra, con un fuerte y estricto régimen de partidos, probablemente sobrevivirían los partidos de entonces. Pero, ¿es ese el mejor régimen político? la respuesta la traslado a Joaquín Villalobos, aquí presente. El tema debe hacer parte de la discusión de este seminario, pues no perdamos de vista que las guerrillas siguen siendo organizaciones políticas, y que en el fondo la paz no es más que cambiar de métodos para la acción política, o sea cambiar balas por votos en busca del único objetivo de la política: el poder.

Es importante concluir que, el que a opciones independientes les vaya bien, ayuda a mostrar que sí hay caminos para el cambio sin armas.

LA SITUACIÓN ACTUAL: RESPONSABILIDAD COLECTIVA

Además del régimen electoral y de partidos, otros factores conspiraron contra el buen suceso de las agrupaciones políticas surgidas de la paz de 1990-91.

En primer lugar, la continuación y el agravamiento del conflicto interno. Nuestra paz no fue la paz definitiva. Los abanderados de la paz no fuimos capaces de lograr que se generalizara y la nuestra se quedó como un esfuerzo parcial e insuficiente. Para hacerlo más difícil, existen aún sectores de la población que nos siguen viendo como «primos» de las FARC y el ELN, y por lo tanto, co-responsables de sus acciones, mientras a su vez estas organizaciones guerrilleras nos ven con antipatía.

En segundo lugar, la miopía de la clase dirigente colombiana, que en buena medida se dedicó a combatirnos despiadadamente como contrincantes políticos, exagerando nuestros errores y dejándonos expuestos a una competencia desigual. No parecieron darse cuenta que nuestros votos migraban a otros independientes y que nuestro debilitamiento le daba argumentos a la guerrilla para continuar su alzamiento en armas.

Como efecto de tal situación, actualmente los insurgentes no se atreven a hacer una apuesta política audaz como la nuestra. Les parece absolutamente equivocado pensar siquiera en que valdría la pena acumular fuerzas sobre la respuesta política de la población a una decisión de paz pronta, en momentos muy favorables para hacerlo, dada la profunda crisis actual del llamado «establecimiento» colombiano. En parte por eso, el actual proceso de paz se mueve en un terreno de discusión de reivindicaciones sociales y económicas, con bajo contenido político, que parece un pantano sin salida. Estamos ante una especie de tautología, donde se argumenta que son necesarios tantos cambios en la sociedad colombiana para lograr la paz, que ella, que es la que mejor posibilitaría tales cambios, se hace a su vez imposible. Ello podría frasearse como «el cambio para la paz», descartando «la paz para el cambio» o el cambio pacífico que nosotros escogimos.

Creo que sigue sin encontrarse el nuevo camino de la paz, que por supuesto ha de ser distinto del nuestro, pero cuyo curso nadie tiene claro todavía. Pero eso sí, debe centrarse en la idea de una negociación política, o sea, en la manera de repartir y acceder al poder.

En tercer lugar, pero no por ello menos importante, cometimos errores —¡cómo no!— y los hemos pagado con creces. Pero como no hay mal que dure cien años, hoy se abren nuevos espacios y nuevas oportunidades para quienes juramos hacer más que lo imposible para cambiar este país.

Por último, en estos 10 años se han profundizado los problemas de nuestra sociedad. Ha crecido la desigualdad, ha aumentado la corrupción, se ha deteriorado la economía, ha aumentado la pobreza, se han envilecido muchas instituciones. ¿Qué tanto ello sirve también para fortalecer los argumentos de la guerrilla?; ¿quién responde por ello?; ¿qué espera el «establecimiento» colombiano para pagar su factura?; ¿cómo puede el gobierno actual aceptar públicamente que la paz requiere profundos cambios económicos, políticos y sociales y no hace prácticamente nada para lograrlos?

Nosotros, los que hicimos la paz hace 10 años, hemos cumplido nuestra palabra y aquí estamos, luchando pacíficamente. Pero muchos de los miembros del «establecimiento» económico y político, no han cumplido la suya y siguen abusando de su poder, como si en este país nada pasara. Ya es hora de que todos le cumplamos a Colombia.

•

JUAN GOSSAÍN, DIRECTOR DE NOTICIAS, RCN RADIO

Muy amable, doctor Navarro, por su recuento histórico desde el punto de vista del M-19 sobre la desmovilización y la firma de la paz hace diez años. El doctor Pardo Rueda, como lo había anunciado, mirará el mismo tema desde el otro terreno, el terreno del gobierno del presidente Barco.

*10 AÑOS DE ACUERDOS, 20 AÑOS DE PROCESOS DE
PAZ, 40 AÑOS DE CONFLICTOS*

RAFAEL PARDO RUEDA

Director del Noticiero de Televisión CM&

Colombia lleva 40 años en conflicto, 20 en procesos de paz y 10 años de los acuerdos de paz con el M-19, EPL, PRT, Quintín Lame y CRS, que permitieron a seis mil guerrilleros entrar en la vida civil. El conflicto, que ha tenido protagonistas constantes por décadas, ha cambiado sustancialmente en el transcurso de los años y lo mismo el proceso de paz, que se inició en 1982, ha tenido también diferencias sustanciales de enfoque y de manejo. Vale la pena mirarlas para poder darnos una idea de lo que está ocurriendo ahora y de sus posibles proyecciones.

EL CONFLICTO ES POR EL PODER

El enfoque de un proceso de paz se deriva de la forma como se entiende el conflicto, pues un proceso de paz no es otra cosa que la resolución del conflicto por medios distintos a los violentos. La guerra es la continuación de la política por otros medios, decía el clásico Clausevicz; y la política, o sea dialogar para llegar a acuerdos, no es más que continuar el conflicto por otros medios, en este caso, pacíficos.

Entiendo el conflicto actual como uno en el que está involucrado el poder político. El centro de esta guerra de cuatro décadas es el poder, aunque en el transcurso de estos cuarenta años de confrontación haya corrido mucha agua bajo los puentes. El Frente Nacional, el sistema político excluyente de fuerzas que no fueran liberales o conservadoras se terminó, su continuidad se extinguió con la

constitución de 1991, esta carta política les dio espacio igualitario a todas las tendencias de pensamiento, el sistema socialista cuya lucha por la hegemonía mundial fue el marco de la aparición de las guerrillas en nuestro país desapareció del mapa mundial, y el ascenso del tráfico de drogas en Colombia fueron, unos con otros, factores que modificaron al país en muchos aspectos y a la dinámica del conflicto armado en muchos otros. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios, las guerrillas actuales tienen una constante a lo largo de todos estos años: se definen por su ambición de obtener el poder político.

Puede parecer una definición simple pero esta manera de entender las cosas descarta, a su vez, otras motivaciones como los propósitos centrales del conflicto. El territorio por ejemplo, en mi opinión no es una motivación principal de las FARC, aunque en el desarrollo del conflicto el control de ciertos territorios puede ser prioritario. Territorios que signifiquen recursos o que permitan proteger a los jefes del grupo, pueden ser prioridad en el curso de la confrontación. Pero esto no quiere decir que el propósito del conflicto sea retener los territorios, ni que éste se solucionaría cediendo su control. Otro ejemplo sería el control de recursos, que puede ser también un objetivo transitorio del conflicto, pero no debe entenderse que sea su propósito final.

Entonces ni el control del Caquetá o del Putumayo es propósito central de las FARC, ni tampoco lo es el control de sembrados de droga. Son sí objetivos parciales en su meta de alcanzar el poder político. Para el ELN lo mismo es válido. Ni el control del Catatumbo ni del oro o del petróleo son sus objetivos finales, sino trampolines parciales para dar saltos mayores.

Entender de esta manera el propósito del conflicto orienta la manera como se puede entender lo que sería la paz. Esta, la paz, en nuestro entender sería el resultado de una negociación por el poder, por su acceso, su distribución y por el control de las fuentes del poder.

*IDEALISTAS Y REALISTAS:
DOS ENFOQUES FRENTE A LA PAZ*

Ahora miremos cómo se ha entendido el proceso de paz para tratar de dilucidar cómo va el proceso actual. En nuestro país ha habido dos tendencias, bien diferenciadas, respecto a los procesos de paz: una que fue muy clara en el gobierno Betancur y otra que caracterizó a la negociación en los gobiernos de Barco y Gaviria.

En la administración Betancur, pionera no sólo en Colombia sino al menos en este hemisferio en la búsqueda de una solución política a los conflictos internos, se entendió éste como un problema de incompatibilidades históricas. Admitir que había condiciones objetivas para la existencia del alzamiento armado en cierto modo implicaba el reconocimiento de que la guerrilla tenía razones válidas para estar en armas. No quería esto decir que se justificara la lucha armada o que se estuviera de acuerdo con los alzados, sino que en cierta forma se les comprendía, se entendían sus razones y se buscaban coincidencias entre la plataforma de la guerrilla y los programas de gobierno o los postulados del establecimiento.

La paz entonces se entendía como una especie de acto de contrición de un establecimiento que reconocía sus errores, que asumía como suyas parte de las inquietudes de la guerrilla y que mostraba una clara disposición a rectificar. La voluntad, la generación de confianza y la demostración de la capacidad de acordar temas sustantivos, son los elementos que pueden permitir avanzar en la paz, según esta concepción. Para demostrar voluntad el gobierno acoge inconformidades de la guerrilla, o parte de ellas, y las hace suyas.

La política de paz aplicada por el gobierno de Belisario Betancur estaba enmarcada en estas líneas. El Estado se arrepentía de comportamientos pasados y de situaciones indeseables que sustentaban la violencia, como la desigualdad, la injusticia, la pobreza, y buscaba mostrar su voluntad para rectificar. El trámite de la elección de alcaldes pretendía quitar piso a las inconformidades de la guerrilla frente a una democracia cerrada y mostrar un Estado abierto y capaz de ser generoso. Convencer a los alzados de la voluntad del

Estado, mostrar para ello un genuino deseo de rectificación y un sentido de autocrítica eran las bases para convencer a los insurgentes de la posibilidad de paz.

Los gobiernos liberales de Barco y Gaviria aplicaron una concepción bien distinta. El conflicto es por el poder y por las fuentes que lo sustentan, por tanto una negociación debe enfocarse hacia abrir espacios para negociar con el poder y sobre el poder. Así se planteó en el marco de política de paz que lanzó Barco a mediados de su administración cuando manifestó que, al abrir un diálogo con los alzados en armas, el gobierno no entraba a debatir los contenidos de las plataformas de la guerrilla. Estas se respetaban en cuanto respetaran la democracia y más que trazar sobre ellas se buscaba abrir espacios para discutir estas propuestas. Barco, desde el principio, indicó que un gobierno es producto de la expresión popular y que como tal no puede cambiar el mandato del pueblo, emitido en las elecciones, para negociar su programa con los alzados en armas. Eso no quería decir no negociar sino por el contrario se trataba de abrir el espacio de negociación con los poderes políticos para que allí, en ese espacio, se buscaran los consensos sobre las plataformas de la insurgencia. La participación del EPL en la Asamblea Constituyente, o la circunscripción especial de paz acordada con el M-19, que no se puso en práctica, fueron espacios democráticos para negociar allí los planteamientos de los alzados. El gobierno no tiene por qué opinar sobre el programa de la guerrilla, no le corresponde, no tiene el mandato para negociarlo, quien sí lo tiene es, o el congreso o un mecanismo constituyente.

Pueden parecer principios retóricos pero tienen consecuencias concretas. Una de ellas es sobre la autoridad y la legitimidad del Estado. En el primer esquema, el idealista, el gobierno se desprendía de defender una serie de postulados por tratar de acercarse a las posturas de la guerrilla. La defensa de la legítima acción de la fuerza pública para restablecer el orden es uno de los aspectos que en la visión idealista se debilitan. La acción del Estado a favor de los pobres se desvía en dirección a los violentos o a los ilegales. La permanente retórica de resaltar la injusticia, las imperfecciones de

la democracia y la tendencia a relegar las iniciativas reformistas a la guerrilla, en suma, acrecientan la ilegitimidad del Estado. El gobierno y las instituciones quedan en una especie de provisionalidad, a la espera de los acuerdos de paz.

Un enfoque se basa en mostrar capacidad de rectificación para que ésta sea valorada por los alzados, y el otro en crear espacios para negociar sobre el poder. Para este último enfoque el hacer gestos, unilaterales y no negociados, no necesariamente aporta al acumulado de la paz. Mostrar simpatías con la guerrilla no necesariamente suma, y procurar no ofender con el lenguaje o con las expresiones no es tomado por la guerrilla con simpatías sino como un signo de debilidad.

LOS PROCESOS DE LOS NOVENTA

Diez años después, se miran los procesos de paz con M-19, EPL, PRT, Quintín Lame y con la Corriente de Renovación Socialista con gran ignorancia, con cierto menosprecio. Es claro que no se logró la paz global y que hoy todavía estamos sufriendo, cada vez de forma más aguda, los efectos del conflicto armado. Sin embargo creo que vale la pena anotar tres elementos relevantes para el análisis.

La Guerra Fría.- Primero el contexto histórico internacional. El mundo para fines de los ochenta y principios de los noventa estaba inmerso en el conflicto global entre comunismo y capitalismo llamado la Guerra Fría. Este proceso moldeó las relaciones internacionales por medio siglo y orientó decenas de conflictos internos, entre otros el colombiano. En ese contexto las negociaciones entre guerrillas izquierdistas y un gobierno eran muy poco creíbles. Los funcionarios y académicos norteamericanos, por ejemplo, tenían un total y absoluto escepticismo sobre el resultado de conversaciones de paz. Segundo elemento que muchas veces se soslaya es el contexto político que entonces se vivía. El país tenía década y media de frustraciones acumuladas en lograr un cambio político. En 1977 el gobierno de López llevó al congreso una reforma cons-

titucional limitada a tres campos. La justicia, el régimen departamental y el municipal. El proyecto pretendía llevarse a cabo mediante una constituyente que recibiría poderes delegados del congreso. El congreso aprobó el proyecto pero la Corte lo declaró inconstitucional. El gobierno de Turbay retomó el contenido de la reforma y la llevó al congreso, quien la aprobó, y la Corte de nuevo la tumbó. Barco intentó hacer una reforma constitucional, primero un plebiscito en 1987 que fue impedido por el Consejo de Estado, y luego presentó la reforma al congreso, la que se hundió al ser contaminada por una enmienda sobre extradición que introdujeron los carteles. La frustración por la imposibilidad de las reformas era grande, los desafíos de los carteles no parecían tener respuesta institucional y la ilegitimidad era creciente. En ese contexto político se fraguaron los acuerdos de paz, los que contribuyeron a un ambiente de renovación y de cambio con la realización de la Asamblea Constituyente. La paz no es independiente de la política, es su desarrollo, y por tanto estudiar los procesos de paz sin tener en cuenta el contexto político es reducir el análisis a simples procedimientos.

El tercer elemento que vale la pena resaltar es el carácter de los acuerdos.

El principio que se esbozó para abordar las negociaciones era que la plataforma del gobierno, ni la de la guerrilla se negociarían en la mesa, pero que sí se abrirían los espacios para discutir las propuestas de la insurgencia con miras a concertar y a implementar los acuerdos alcanzados.

Es así como se acordó crear una circunscripción especial en el congreso, en los acuerdos con el M-19. Este aspecto no tuvo aplicación pues estaba contenido en la reforma constitucional que el congreso hundió en 1989. El EPL, PRT y el Quintín Lame tuvieron acceso a la Constituyente como resultado de los acuerdos de paz. No fue entonces el contenido de los acuerdos lo que dio mayores o menores posibilidades a los grupos desmovilizados para hacer política. Lo que se les dio, al EPL, PRT, QL y CRS, fue acceso a instancias de decisión, constituyente y congreso, pero, ni el éxito inicial del M-19 cuando obtuvo la tercera votación del país o cuan-

do logró ser la primera fuerza política en las elecciones de la constituyente, ni sus malos resultados en 1994, ni uno ni lo otro fueron producto de los acuerdos. Sí lo fue el espacio de acción política en instancias de decisión pero fue su mérito crear y/o aprovechar el ambiente de cambio que vivía el país en esos tiempos.

EL PROCESO ACTUAL

La aproximación de Betancur, que hoy puede ser objeto de críticas a posteriori, merece destacarse pues en primer término fue un enfoque pionero, como dijimos antes, y porque abrió una posibilidad que a través de más de dieciocho años se ha mantenido como la fórmula prevaleciente para resolver el conflicto armado interno.

El conflicto existe porque existe la guerrilla. No al contrario y eso no debemos olvidarlo. Y después de años de diálogos no podemos seguir con un enfoque que depende, para su éxito, de que la guerrilla vea arrepentido al establecimiento, ni de encontrar puntos de coincidencia entre las plataformas de las guerrillas y las de los partidos políticos. Hacerlo no quita un milímetro de argumentos a quienes se alzan en armas. Muchas veces el discurso de la guerrilla puede sonar lógico. Dicen que ellos están alzados en armas por la injusticia y que no han hecho la paz porque el gobierno, o los gobiernos, no los han dejado. Eso no es así y no podemos caer en una especie de culpa colectiva. El Estado colombiano ha sido excepcionalmente generoso para buscar la paz con las guerrillas. Ha hecho la paz con quienes han querido hacerla y persiste en tener una mano tendida a los alzados.

El problema de la voluntad como enfoque de negociación es que ésta no es suficiente si se entiende que el conflicto tiene raíces en la competencia por el poder político. Considero que la aproximación idealista, no sería hoy la más adecuada para hacer frente, en la mesa de negociación, a una guerrilla marxista, sólida en lo doctrinario y crecida en autoestima sobre su capacidad militar.

Las anteriores son referencias para orientar el examen del proceso de paz en que estamos. El actual proceso de paz es más

parecido al esquema idealista que al realista. Partió de una desconfianza por parte de las FARC de siete años y de una ruptura en los diálogos por todo este tiempo y exigía el retomar confianza. La primera prioridad del gobierno fue construir una confianza necesaria para iniciar en firme el proceso de negociación. Para lograr confianza con las FARC el gobierno arriesgó mucho. Sin duda perdió aliados políticos, gastó parte de su capital político, generó desconfianzas de parte de sectores militares, demeritó al ELN, provocó desconfianzas por parte de legisladores norteamericanos, irritó a grupos paramilitares, pero avanzó en proceso, acordó un procedimiento de negociación y pactó en 1999 una agenda para tal fin. Desde 1991, en las conversaciones de Caracas con la entonces Coordinadora Simón Bolívar, no se había tenido un avance tan sustancial. Sin embargo este enfoque está agotado. Por buscar la confianza de las FARC se ha perdido la del país y tampoco se ha ganado gran cosa con la supuesta confianza de parte de las FARC. La semana pasada, para no ir más lejos, después de una fiesta ofrecida por las FARC a uno de los negociadores, qué mayor gesto de confianza, entregaron sin anuncio previo, una destemplada carta de Marulanda que tiene al proceso en su peor crisis. ¿Entonces tanta confianza para qué ha servido? Lo que tocaría es retomar la confianza pero de parte de los colombianos, obviamente sin hacer imposible el diálogo. La crisis actual del proceso, más que la prórroga de la zona, exige una rectificación conceptual en la cual tenga un mayor papel el Frente Común, se reestructuren los mecanismos de diálogo, se separe el manejo del proceso de las FARC con el del ELN y sobre todo se proyecte una política de paz con horizontes más allá de la semana que viene. De lo contrario, seguir en la teoría de la confianza y de la voluntad, pondrá al gobierno contra la pared cada vez que las FARC quieran, y ellos tendrán a su favor un arma demoledora que pueden usar en cualquier momento: sería decir simplemente «dejemos esto para el próximo gobierno».

•

JUAN GOSSAÍN, DIRECTOR DE NOTICIAS, RCN RADIO

Muy amable, doctor Pardo Rueda, y muchas gracias.

Bueno, habiendo escuchado ya a los cuatro expositores de esta primera parte de la mañana, tal como está previsto en el programa, los invito a un debate sobre las ideas, los puntos de vista y los planteamientos que ellos han presentado aquí. Las intervenciones de ustedes pueden conllevar obviamente preguntas a las personas que han hablado. En ese caso les agradecería identificar con claridad a cuál de los expositores va dirigida la pregunta, en caso de que la haya. Pero en todo caso, con pregunta o sin ella, les agradecemos brevedad y concisión para que pueda participar la mayor cantidad posible de ustedes. Abro el debate.

ANGELINO GARZÓN, MINISTRO DE TRABAJO

Una moción de orden. Yo creo que por el contenido de las exposiciones deberíamos hacer el debate después de escuchar a los otros tres expositores, o sea, a los expositores que van a hablar sobre el proceso de las FARC y el ELN, porque me parece que el debate sería mucho más rico y contribuiría enormemente a ver la situación actual en el marco del proceso de paz.

JUAN GOSSAÍN

Entiendo su inquietud, señor Ministro, pero como usted puede verlo, en la agenda hay una sesión uno sobre la experiencia que fue hace diez años el M-19 y el EPL y la desmovilización; se debate ese tema y luego hay una sesión dos de esta mañana, con lo que está ocurriendo en este momento con el ELN y las FARC, de manera que creo que lo que se busca por parte de los organizadores es no mezclar la experiencia de lo realizado con la expectativa de lo que se está haciendo. Me parece que deberíamos proceder a evacuar las inquietudes del debate sobre el M-19 y el EPL. Creo que estamos de acuerdo en eso porque se volvería interminable el tema si mezclamos una cosa y la otra.

ENRIQUE GÓMEZ, SENADOR DE LA REPÚBLICA

Gracias, señor moderador. Aunque usted ha hecho la separación entre los dos temas, no he visto que este tema que voy a tratar muy brevemente como usted lo recomienda, esté dentro de la agenda, pero además me parece fundamental dentro de las circunstancias actuales. Yo tengo el convencimiento de que la zona de distensión del Caguán buscada para recoger la confianza de que hablara el doctor Pardo, ha sido el elemento de mayor desconfianza y probablemente la causa primordial de que no se haya llegado a ningún resultado en las conversaciones de paz. Por esa razón me permito leer ante ustedes y dejar aquí una muy breve constancia que, desde luego, como estas actitudes tienen algunos riesgos, la hago a título absolutamente personal. Dice así: Hace más de dos y medio años le fue entregada a las FARC una extensión de 42 mil kilómetros cuadrados con sus 100 mil habitantes como muestra de voluntad de paz del gobierno nacional. Desde entonces a hoy, ese territorio ha sido convertido en el más grande campo de concentración de que se tenga noticia, en el que se violan la totalidad de los derechos humanos. Ese enorme espacio se ha convertido en guarida de malhechores, lugar de retención de secuestrados, agencia de cobro de extorsiones y punto privilegiado para la plantación, el procesamiento, el comercio y la exportación de narcóticos. Allí van a parar los bienes producto del hurto y la piratería. Se recluta a los niños para que sirvan de carne de cañón. Se les lava el cerebro con intensivo adoctrinamiento marxista, en medio de una atroz dictadura total que podría compararse con la de Pol Pot en Cambodia, que espantó al mundo. Lo que acabo de afirmar es la verdad sabida de todos los colombianos. El hecho de que en medio de ese ambiente se adelanten las conversaciones de paz sin que se obtenga el más mínimo resultado positivo para los colombianos y sí muchas ventajas para los que utilizan la violencia como el medio más eficiente de hacer política, es el factor principal en el proceso de desmoronamiento de la sociedad colombiana. Para nada le ha servido a la causa de la libertad y el orden, la cadena permanente e indefinida de concesiones. Por estas razones veo, como la gran mayoría de

los colombianos, con la más profunda indignación y rechazo que se pretenda entregar a otro grupo de delincuentes la vida y la honra de otras decenas de miles de colombianos, con pérdida de la soberanía, para otra parte del territorio patrio. Nadie ha podido explicar válidamente porqué son necesarios miles de kilómetros cuadrados y la esclavización de decenas de miles de compatriotas para que unas cuantas personas se sienten en torno a una mesa. Lo que se hizo en el Caguán y lo que se propone hacer en el Magdalena Medio, viola la constitución, las leyes de la república, de manera flagrante y escandalosa sin otro objeto que complacer a quienes, de todas las maneras imaginables, se han propuesto destruir la democracia colombiana demostrando en su tarea que para ellos no existe barrera moral y humanitaria de ninguna especie. A todos los colombianos nos corresponde evitar que otros colombianos sean entregados al cautiverio como si de semovientes se tratara y emprender la liberación de quienes han sido enajenados sin contraprestación alguna. Muchas gracias, señor moderador.

JUAN GOSSAÍN

Se recibe la constancia que presentó el doctor Gómez. Guardando la misma equidad en el uso de la palabra en el debate, el orden de inscripción de ustedes, tengo la siguiente lista: Horacio Serpa, Rafael Orduz, León Valencia, Luis Eduardo Garzón, Max Alberto Morales, José Miguel Narváez, de Fedegán, y Carlos Lleras.

HORACIO SERPA, CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lo mío es solamente para hacer una consideración que le pido el favor de analizar lo mismo que a los compañeros de esta interesante sesión. Y es para coadyuvar el pensamiento de Angelino Garzón y presento una prueba al canto, la exposición del doctor Enrique Gómez Hurtado. Es que las interesantísimas exposiciones que se han hecho, la introducción de Marco, las exposiciones del doctor Pardo, del doctor Navarro, los comentarios del señor ministro de Defensa, tienen interés para ser examinados como experien-

cias a la luz de los esfuerzos que en este momento se están haciendo para lograr la paz, lo otro es un análisis histórico que se puede hacer en un claustro universitario, etc. Pero aquí estamos presentes es en el afán de ver cómo en lo que está ocurriendo en el país, en la realidad presente, se pueden lograr unas conclusiones que le sirvan al objetivo de la paz. De manera que ruego considerar esa solicitud.

RAFAEL ORDUZ, SENADOR DE LA REPÚBLICA

El destinatario de mi inquietud es el ministro de Defensa. En la medida en que el narcotráfico es combustible del conflicto armado, en la medida en que siega vidas, que produce daños ambientales, la política antinarcóticos es esencial en todo este proceso.

JUAN GOSSAÍN

A raíz de que todo el mundo quiere quedar siempre en una mesa y no en las otras, en las mesas de trabajo me refiero, lo más equitativo que se ha resuelto es, mientras avanza el seminario, vamos a circular por las mesas de ustedes un canasto que contiene al azar los números de trabajo y cada uno escogerá su mesa de manera fortuita.

Concluido el receso procedemos a la segunda parte de las exposiciones de esta sesión. Los procesos de paz con las FARC y con el ELN, es decir, la actualidad. Participan en este segmento el Alto Comisionado de Paz Camilo Gómez, el profesor Alejo Vargas de la Universidad Nacional de Colombia, además analista, comentarista en los medios de comunicación sobre estos procesos, y el doctor Alfredo Rangel, que es analista político también de reconocida presencia en la vida nacional. Comenzamos con los procesos con las FARC y el ELN y la intervención de Alfredo Rangel.

LA DINÁMICA DE LOS DOS PROCESOS

ALFREDO RANGEL

Analista Político

Quiero empezar agradeciendo a todos los organizadores de este muy pertinente seminario o encuentro que realizamos en la mañana de hoy para discutir los problemas y las circunstancias del proceso de paz en nuestro país. Quiero hacer en el uso de esta intervención un análisis comparativo de las dinámicas de los dos procesos de paz que se están realizando en nuestro país, el proceso de paz con el ELN y el que ya se ha iniciado con las FARC, desde un punto de vista más político, estratégico y militar que desde otro ángulo.

Me parece que estos dos procesos van a ser muy distintos. De hecho sus comienzos ya han sido muy diferentes, debido sobre todo a que los dos movimientos insurgentes parten de unas posiciones o de unas circunstancias absolutamente distintas. Mientras que las FARC son un grupo insurgente que se está fortaleciendo, que está incrementando su pie de fuerza militar, que todavía aspira a lograr mayores éxitos y eventualmente una victoria militar sobre el Ejército Nacional para una toma absoluta del poder, por la vía de las armas, el ELN, a mi manera de ver, ya ha renunciado a esta posibilidad, a esta opción estratégica, y este distinto punto de partida le impone unas dinámicas y unos rumbos muy diferentes a la negociación que va a realizar el Estado colombiano con cada uno de estos grupos. Descarto de antemano la posibilidad de que estos dos procesos en algún momento puedan llegar a confluir en una sola negociación y lo argumentaré más adelante.

Creo que cada una de estas circunstancias, de estos distintos puntos de partida, son la base de unas estrategias de negociación muy diferentes de parte de las FARC y del ELN. Mientras para las

FARC la negociación continúa siendo una táctica política dentro de una estrategia de guerra, para el ELN eventualmente la continuación de las acciones armadas sería solamente una táctica militar dentro de una estrategia de negociación política. El propósito de estas distintas estrategias es que para las FARC la negociación sea una especie de tributaria del fortalecimiento militar que se considera la principal opción estratégica en este momento. Es decir, el dilema de si las FARC tienen o no voluntad de paz, me parece que es errado. La paz no es un asunto de voluntad, de buenas intenciones, sino es un problema de cálculo político y militar que hace cada una de las partes involucradas en un conflicto armado. Yo creo que las FARC tienen efectivamente una voluntad de paz, pero tienen como primera opción estratégica la toma del poder por la vía armada y como segunda opción, en caso de que la primera no fuera viable o posible, la negociación política. Para realizar esa negociación política eventualmente requeriría la mayor cantidad de fuerza política y militar y para eso realiza esa doble estrategia de fortalecimiento militar, en primer lugar, y de aprovechamiento de la mesa de negociación como un escenario, como un proceso que puede llegar a fortalecer esa opción militar, en segundo lugar.

De parte del ELN creo que, como ya se descartó la opción de la toma del poder por la vía armada, y su única opción estratégica es la negociación política, pues la parte militar sería tributaria de la negociación política. Esto le imprime, obviamente, a los dos procesos, y de hecho les está imprimiendo, una distinta dinámica y un distinto ritmo y una diferente percepción del tiempo de parte de cada uno de los dos grupos insurgentes. Mientras para las FARC el asunto es seguir ganando tiempo para lograr aprovecharlo en un mayor fortalecimiento militar, y eso le imprime a la negociación un ritmo muy lento, muy pausado, muy dilatado en el tiempo, para el ELN eventualmente el tiempo es un factor muy escaso, yo diría que al ELN le podría empezar a correr prisa para efectuar una negociación en vista de que a medida que pasa el tiempo su debilitamiento podría ser mayor y esto lo pondría en unas circunstancias muy desfavorables para lograr un resultado decoroso en una negociación con el Estado. Y esta circunstancia me parece que está

coloreando, dándole un matiz muy diferente a todos y cada uno de los temas del proceso de paz, de los principales aspectos del proceso de paz.

En primer lugar, por ejemplo, sobre el tema del despeje. Me parece que el país está presenciando una situación muy paradójica en torno del tema de la desmilitarización de las zonas para realizar estas conversaciones de paz. Mientras en el Caguán la opinión pública se ha quejado de la carencia de unas reglas del juego desde el comienzo claras, transparentes, escritas, públicas, que permitan garantizar la seguridad de la población en la zona de distensión y un adecuado manejo de esta zona, sin embargo se cuenta allí con el apoyo de la población o buena parte de ella a este despeje, a la persistencia e incluso a la prolongación de la zona de despeje y más bien se siente un gran temor ante la suspensión eventual de las negociaciones y la terminación de la zona de despeje.

En el sur de Bolívar, por el contrario, ya se han pactado unas reglas del juego muy claras, un estatuto muy detallado que implicaría una gran transparencia en el manejo de la zona de desmilitarización, una presencia de la comunidad internacional ostensible, veedores nacionales, un conjunto de reglas del juego que garantizarían la seguridad de la población allí localizada, una eventual continuación de la vida social y económica de la región sin mayores contratiempos. Sin embargo allí la población, o sectores muy significativos de la población, están rechazando esa zona de despeje. Alguien decía en estos días que la zona de despeje del ELN tiene todo lo que le falta a la zona de distensión de las FARC. Yo diría que eso es cierto pero le falta un pequeño detalle: el apoyo de la población que vive en ese sector. Obviamente que ya es conocido de todos que hay unos intereses supremamente grandes que se están oponiendo de una manera radical y rotunda a la realización de esta zona de despeje y esos intereses están fundamentalmente localizados en los sectores del narcotráfico, que perciben que un despeje en el sur de Bolívar significaría, ni más ni menos, que el acabose para este negocio ilícito.

Implicaría eso porque también hay una distinta relación de parte de las FARC y de parte del ELN con el tema del narcotráfico.

Mientras para las FARC el narcotráfico ha sido utilizado de una manera muy pragmática, como una forma de recabar recursos para su fortalecimiento militar y para sus estrategias de guerra, de parte del ELN ha habido una actitud muy fundamentalista, diría yo que muy moralista, poco pragmática, en relación al narcotráfico que incluso le ha ocasionado la pérdida de influencia territorial en algunas zonas del país como por ejemplo en el Norte de Santander. Ello no obstante que algunos sectores del ELN hayan efectivamente utilizado en algunas regiones los recursos del narcotráfico para su propio sostenimiento. Sin embargo, esa distinta actitud de las FARC y del ELN frente al tema de los cultivos ilícitos, en particular, pues lleva a unas consecuencias muy diferentes en relación con la población en cada una de las zonas de distensión. Mientras las FARC promueven los cultivos ilícitos, tienen una mayor integración al negocio del narcotráfico, una mayor participación en los márgenes de ganancia, y todo esto es utilizado para sus planes de guerra, de parte del ELN, por el contrario, habría eventualmente una mayor colaboración con el Estado en su zona de distensión para acabar con los cultivos ilícitos. Por eso se nota a las claras que el despeje en el sur de Bolívar ocasionaría un peligro muy significativo para quienes allí viven de este negocio ilícito.

De igual manera habría una distinta situación con relación al tema de la tregua. Me parece que, mientras las FARC este tema lo han manejado políticamente, yo estoy convencido de que ellas no están pensando en una tregua ni en el corto ni en el mediano plazo. Desde un comienzo fueron muy renuentes siquiera a discutir el tema del cese al fuego y, en múltiples declaraciones, daban a entender que éste sería un tema para discutir una vez hubiese avanzado suficientemente la negociación. Incluso planteaban que cuando se hubiera alcanzado el 80% de acuerdos sobre los temas de la negociación, podría empezarse a negociar un cese al fuego. Hemos visto, recientemente, que ha variado la posición de las FARC en el sentido de que ahora sí han aceptado, por lo menos, la discusión del tema del cese al fuego. Me parece que ahí hay un cálculo político, un cálculo político muy hábil, que, a partir del razonamiento de que la justificación de la guerra no se puede hacer

por la guerra misma sino en busca de la paz, las FARC intentarían entonces justificar la continuación de la guerra a partir de un planteamiento ultimalista acerca del tema de la tregua.

Es decir, condicionar una eventual tregua con el Estado, un cese al fuego, al cumplimiento de una cantidad de condiciones que implicarían, en primer lugar, una gran ventaja militar y política para las FARC, y en segundo término, por ser tan inaceptables esas exigencias de las FARC al Estado, esto conllevaría a que la responsabilidad de la continuación de la confrontación armada sería adjudicada por las FARC al Estado por no haber aceptado esas condiciones. En dos palabras, creo que las FARC condicionarían ahora un acuerdo sobre cese al fuego a que, en primer lugar, el Estado lograra unos resultados muy ostensibles, muy definitivos en contra del paramilitarismo; en segundo lugar, a un reconocimiento por parte del Estado de su presencia en múltiples zonas del país, lo que les posibilitaría un avance sobre todo en términos estratégicos para cerrar el cerco sobre las grandes ciudades; y en tercer lugar, al cumplimiento de una serie de exigencias de orden social como terminar con las privatizaciones, o lograr resultados muy significativos sobre el empleo, el congelamiento del Plan Colombia en lo que tiene que ver con el programa de fumigaciones.

Como se ve, todos estos temas son de una gran inviabilidad pero les permitirían a las FARC aparecer como amigas de la tregua, amigas del cese al fuego y adjudicarle al Estado colombiano la responsabilidad de la continuación de la confrontación. Me parece que esa es una maniobra política que están manejando las FARC con el tema del cese al fuego y que están mucho más interesadas, claro, en continuar la confrontación, que es la que les da la posibilidad de seguir desarrollando su estrategia de negociación basada en un escalamiento de la confrontación armada para lograr mejores condiciones de negociación y mayor presión sobre el Estado.

De parte del ELN creo que, por el contrario, estaría más interesado en negociar mucho más prontamente un cese al fuego, una tregua con el Estado, porque ello le permitiría, de alguna manera, conservar su actual fuerza política e impedir ese debilitamiento progresivo. El caso es que el ELN en este momento se ha converti-

do, por decirlo así, en una especie de botín de guerra de todos los otros actores armados de la confrontación, de parte de las fuerzas militares, de los grupos paramilitares de autodefensa e igualmente de las FARC. Tanto los paramilitares como las FARC están tratando de copar los espacios que eventualmente vaya dejando el ELN. Al ELN le están, por decirlo gráficamente, respirando en el cuello todos sus adversarios políticos y militares y esta circunstancia podría, en términos de cálculos estratégicos, inclinarlo a aceptar o a negociar con el Estado mucho más prontamente una tregua o un cese al fuego. Esto no es, sobraría insistir en ello, un problema de buena voluntad o que se volvieron buenos los elenos o que hay una mejor intención de paz. Es un problema de las circunstancias políticas y militares que están viviendo en muchas zonas del territorio nacional.

Me parece igualmente que hay una distinta actitud frente a la comunidad internacional por parte de estos dos grupos insurgentes. Mientras para las FARC continúa existiendo una gran desconfianza frente a la participación de la comunidad internacional en el proceso de paz, el ELN está reclamando esa participación desde el comienzo del proceso, de hecho la está exigiendo y la está aceptando con mucha satisfacción en las primeras negociaciones de la zona de despeje. Esto también le imprime unas dificultades y unas circunstancias muy diferentes a la internacionalización, por decirlo así, del proceso de paz con las FARC y con el ELN.

De igual manera su distinta ideología, su distinta historia, su distinta dinámica, que los llevan a tener una actitud muy diferente con relación a la sociedad civil. Las FARC, que son un grupo marxista, leninista, ortodoxo, que se siente en un Estado en las regiones que controla por el hecho de tener el monopolio de las armas, de administrar justicia, de recaudar tributos, quieren negociar de poder a poder con el Estado nacional y reconocen al Estado nacional como el otro poder. En el ELN, que es un grupo populista con una ideología que es una mezcla de teología de la liberación, de populismo, de guevarismo, una cosa muy difusa, hay una actitud muy distinta. Desconocen la legitimidad del Estado colombiano y más bien adjudican a la sociedad civil todas las bondades, casi que diría yo que a la sociedad civil no la ven como una categoría sociológica o política, sino como una categoría moral. Es decir, la

sociedad civil para el ELN es la encarnación de lo bueno, en contra del Estado que es la encarnación de todo lo malo. Y eso lo lleva, claro, a tener que darse golpes en la cabeza para tratar de entender por qué esa sociedad civil, que es la encarnación de lo bueno, se está oponiendo, de una manera tan franca y tan abierta, a las zonas de despeje del sur de Bolívar. No entenderían cómo ellos, que se perciben a sí mismos como los redentores de la pobreza del país, tienen que soportar esos bloqueos campesinos de las carreteras, esas movilizaciones de esa población en contra de la zona de despeje en el sur de Bolívar.

Por esa visión moralista de la sociedad civil han condicionado el inicio de los diálogos con el Gobierno a la realización de una convención nacional entre la guerrilla y esa sociedad civil. Yo creo que todavía no es muy claro, ni siquiera para los elenos, qué es lo que se busca en esa convención nacional, o cómo ella se articula dentro de una estrategia de negociación. Uno puede registrar distintos pronunciamientos un poco contradictorios o, por lo menos, distintos entre los mismos dirigentes del ELN acerca de qué es esa convención, de cuál es el producto, el resultado de esa convención, quiénes serían los participantes, cuál es la metodología, cómo se inscribe esa convención nacional dentro de ese proceso de negociación. En un comienzo se podría haber entendido que ellos esperaban que en la convención se acordara entre la sociedad civil y la guerrilla una agenda de negociación que posteriormente la guerrilla abanderaría y, en representación de la sociedad civil, negociaría con el Estado. Puede haber algunas variaciones, pensarse que se podrían discutir algunos temas donde la guerrilla podría escoger éstas u otras propuestas sobre determinados asuntos para discutirlos con el Estado no necesariamente con todo el apoyo, con todo el consenso de la convención nacional. Me parece que eso todavía no es claro.

La otra estrategia, la de las FARC, fue una negociación directa con el Estado en donde la sociedad civil cumple a mi manera de ver un poco el papel de decoración; por lo pronto, las mesas de trabajo son simplemente unas audiencias públicas, como se han denominado muy bien, donde se hacen muchas propuestas, decenas, centenares de propuestas que pueden ser tomadas o no, consideradas o no, por los poderes, por los dos poderes que están negociando a

uno y otro lado de la mesa: la guerrilla y el Estado colombiano. Hay una actitud entonces que relega el papel de la sociedad civil simplemente a hacer esas propuestas que son discutidas por los dos poderes, parcialmente legitimados, el poder del Estado y el poder de la guerrilla.

A mi manera de ver, estas distintas circunstancias, estas distintas situaciones, van a generar dos procesos que van a ser muy diferentes y para los cuales el Estado debería tener, por lo menos, ya no solamente dos sino tres estrategias: una con las FARC, otra con el ELN y otra para evitar interferencias entre los dos procesos. Me parece que las FARC van a querer relegar el proceso con el ELN a un plano secundario, como un proceso subordinado al principal, que sería el de ellos, para que el otro gravite a su alrededor. No creo posible, como decía al comienzo, que se lleguen a integrar las dos mesas de negociación en una sola, hacia el futuro. Hay unas dificultades históricas muy grandes, incluso hay un mutuo desprecio entre las FARC y el ELN. Las FARC ven al ELN como unos simples «vuelatubos» sin capacidad de realizar acciones contundentes contra el Estado, contra el ejército, y el ELN siempre ha visto a las FARC como un grupo mamerto, revisionista, que por su apoyo y su cercanía al Partido Comunista y su participación en la lucha electoral, etc., no era fiel a los principios revolucionarios. Me parece que esa actitud de mutuo desprecio y descalificación va a impedir hacia el futuro la integración de los dos procesos. Eso no obsta, claro, para que el ELN tenga eventualmente un deseo de que su proceso sea avalado de alguna manera por parte de las FARC, para ganar una mayor legitimidad o un mayor reconocimiento a nivel nacional y facilitar el despeje de la zona en donde hay presencia de frentes del ELN.

Creo que éste es un panorama muy complejo, muy complicado que se le presenta al Estado para realizar de manera fructífera estas dos negociaciones. El resultado de las dos es, obviamente, incierto. El país se está inevitablemente abocando hacia un camino de incertidumbre donde el resultado de cada uno de los procesos es supremamente incierto, pero yo creo que hay elementos de certidumbre dentro de esta gran incertidumbre general. Me parece que, por ejemplo, a estas alturas, a no ser que ocurra algo extraor-

dinario en el curso de la confrontación armada, las FARC no van a renunciar al uso de las armas, no se van a desmovilizar como grupo armado y, a no ser que el Ejército Nacional las coloque en una situación tal que las obligue a aceptar la desmovilización y el desarme, los colombianos tenemos que ir pensando en una eventual continuación de este grupo en armas como grupo en armas integrado institucionalmente de alguna forma, como ha ocurrido en otros casos de procesos de paz. Pero esto solamente lo dirá el resultado final, el balance final de la confrontación militar entre las FARC y el Estado colombiano.

De parte del ELN podría uno pensar que hacia el final de la negociación eventualmente hubiera una desmovilización y un desarme de este grupo insurgente, dada la precariedad de su situación actual y eventualmente de su situación futura.

Los otros temas de la negociación son de una gran incertidumbre pero pensaría uno que las FARC aspiran, si no logran obtener esa victoria militar definitiva sobre el Estado colombiano, a convertirse a través de la negociación en un factor estructural de poder permanente y decisivo a nivel nacional en términos políticos, económicos, sociales y militares. Y creo que el ELN tendría una agenda y unas pretensiones mucho más recortadas, con énfasis en algunos puntos de la negociación que son muy caros para su tradición y para su historia, con un gran énfasis en las reivindicaciones sociales, regionales. En mi opinión, éstos son los eventuales escenarios que se podrían presentar hacia el futuro.

•

JUAN GOSSAÍN, DIRECTOR DE NOTICIAS, RCN RADIO

Gracias, doctor Rangel. Nos acompaña también ahora en la mesa la señora Barbara Moore, de la embajada de los Estados Unidos, que tendrá a su cargo los comentarios al final del día. A continuación vienen los puntos de vista del profesor Alejo Vargas, de la Universidad Nacional, naturalmente sobre el mismo tema: los procesos de paz que se adelantan con las FARC y el ELN.

LOS ACTUALES PROCESOS DE NEGOCIACIÓN:
ENTRE LA INERCIA Y LA INCERTIDUMBRE

ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ

Profesor Asociado Universidad Nacional

Voy a plantear la exposición con relación a los tres actores: las FARC, el ELN y el Estado y a partir de cuatro elementos, los históricos, la estructura interna, las experiencias de negociación, los esquemas de diálogo, para concluir en las perspectivas de los procesos, pero me parece que, de entrada y creo que éste es un punto polémico pero necesario, es importante decir que hay que diferenciar lo que podríamos llamar los factores estructurales que estarían explicando esa persistente relación entre violencia y política, con las causas específicas que dan origen al movimiento guerrillero y factores más contemporáneos que permiten su reproducción.

Dentro de los primeros se encuentran, además de la persistente tendencia histórica a utilizar la violencia para obtener objetivos políticos, las estructuras de exclusión o «inclusión perversa», socioeconómicas, políticas y regionales, junto con una cultura política autoritaria refractaria a los comportamientos democráticos, todos los cuales forman una especie de telón de fondo.

Dentro de los segundos, podemos mencionar los de orden externo (la Guerra Fría y sus influencias en la llamada doctrina de la seguridad nacional, la revolución cubana y la ruptura política chino-soviética), así como los de tipo interno (la democracia restringida del Frente Nacional, el viejo problema agrario no resuelto, la radicalización de sectores de la juventud, especialmente estudiantiles, en los 60s, los remanentes de las guerrillas liberales de la anterior violencia, las tendencias al radicalismo político en algunos sectores de la dirigencia sindical, especialmente petrolera).

Posteriormente aparecen otros factores que van a ayudar a la reproducción de la confrontación, el narcotráfico en primer lugar, y especialmente los cultivos de uso ilícito, que se vuelven en fuentes de rentas para la financiación de la guerra, el colapso del aparato de justicia como elemento de regulación de las conductas sociales y la disparada de la impunidad, la pérdida de la confianza como valor social de cohesión, conductas delincuenciales y corruptas asociadas a la gestión del Estado.

Esta es una distinción necesaria en la medida en que se ha dado en los últimos tiempos una tendencia a pretender presentar el conflicto interno armado como uno ligado exclusivamente al narcotráfico y a partir de allí derivar a una lectura que implica que la lucha contra el narcotráfico y contra la guerrilla son la misma cosa, sobre todo por razones del uso de la ayuda militar norteamericana, e igualmente considerar que el conflicto interno armado se resuelve si se logra «derrotar» al narcotráfico.

Creo que ahí hay una lectura equivocada, lo cual no significa que se desconozca el papel que éste cumple como elemento de financiación de los actores de la guerra interna.

En relación con las FARC, es importante destacar que es una organización que tiene unos troncos muy fuertes en las luchas agrarias. Me parece que eso es fundamental en la mirada posterior de esta organización y, en ese sentido, toda esa historia de ligazón a las llamadas zonas de autodefensa campesinas desde los años 30s, 40s, 50s, va a estar marcando mucho el pensamiento de dirigentes históricos como Manuel Marulanda. Igualmente es muy importante entender cómo las FARC son una organización que inicialmente parte de dinámicas sociales regionales y que posteriormente se entrecruzan con un discurso político nacional. Ahora el hecho de que en las FARC de alguna manera su dirigente histórico, que encarna lo que podríamos llamar el mito fundacional de esta organización, se mantenga al frente, ha permitido que la misma se conforme como una estructura jerárquica piramidal muy clara, y muy similar a lo que podríamos llamar la estructura propia de un ejército, lo que le ha permitido desarrollar de manera adecuada, hasta ahora, su proyecto militar y político. Un proyecto militar y

político que en la práctica se parece mucho a la guerra popular prolongada de la experiencia china y vietnamita, aunque discursivamente no se plantee como tal. En ese sentido la prioridad de las FARC ha sido construir un ejército guerrillero que progresivamente pase a desarrollar acciones militares de gran envergadura, con gran concentración de tropas contra las fuerzas adversarias, aunque podríamos decir que a diferencia de los otros modelos, la idea de zonas liberadas no ha sido una preocupación central.

En esa medida las FARC han combinado adecuadamente tres elementos: una recurrente presencia en zonas de influencia directa en donde se ha convertido en una especie de poder paralelo; la clásica propaganda armada y, la transformación de las victorias militares en triunfos con efectos políticos sobre el conjunto del país. Ahí hay una adecuada combinación de lo político y lo militar, lo consensual y lo coercitivo. Para el desarrollo de la anterior estrategia la consecución de recursos financieros se ha vuelto un elemento básico, necesario para adelantar ese proyecto de guerra revolucionaria de gran magnitud y para ello pragmáticamente han acudido a diversas fuentes: rentas provenientes del proceso del narcotráfico, especialmente de la fase de los cultivos de uso ilícito, secuestros y extorsiones y otras acciones de finanzas basadas todas en su capacidad coercitiva.

Las FARC han sido una organización que históricamente y desde muy temprano ha acudido a incorporar el diálogo como parte de su estrategia política y militar. En ese sentido la propuesta del diálogo y la expectativa de negociación han sido, digámoslo así, parte de su táctica política. Es en el gobierno del presidente Betancur donde se consolida lo que podríamos decir la perspectiva de cómo ven las FARC una eventual superación negociada del conflicto, que podríamos sintetizar diciendo que para ellos el gasto fundamental de un proceso de este tipo debe correr a cargo del Estado, quien es el responsable de hacer las reformas y los cambios que apuntan a las causas estructurales asociadas al conflicto armado, y la organización alzada en armas solamente tiene la responsabilidad de constatar que las mismas se hayan realizado o por lo menos se hayan iniciado seriamente y, a partir de ahí, definir un itinerario

posible de su futuro, incluida la posibilidad de impulsar una fuerza política legal como podría ser eventualmente propuestas como la del Movimiento Bolivariano. Es decir, en la perspectiva de las FARC está lejos la idea de concebir la negociación por parte de ellos como lo dicen los manuales, como un proceso de intercambio entre actores en el cual cada uno coloca sus propuestas y está dispuesto a ceder. Me parece que el modelo de negociación de las FARC no es para nada parecido a un modelo de negociación sindical. Eso es lo que explica también, además de esa perspectiva clásicamente ortodoxa del marxismo que lleva a las FARC a autoconcebirse como la vanguardia de los explotados y de los oprimidos, a mirar su proceso de negociación como uno entre dos partes: el Estado, que se supone representa el establecimiento, y ellos, que se auto-proclaman representantes del resto de la sociedad. Evidentemente dentro de ese esquema la participación de la sociedad, es un elemento mucho más subsidiario, a veces un poco decorativo y ese esquema es en buena medida funcional a la concepción de negociación que, a mi juicio, tienen las FARC. Es decir, que el gasto de la negociación corre a cuenta del Estado y probablemente mecanismos como las audiencias son formas de reiterar carencias y demandas sociales para que el Estado entre a dar respuesta en términos de reformas y de políticas públicas.

El ELN evidentemente es una organización que tiene una historia distinta. Todos sabemos que parte más de la influencia de la revolución cubana y a partir de allí se crea un proyecto de construir una organización política que se interrelaciona con dinámicas regionales, particularmente en el Magdalena Medio, con dinámicas sociales y políticas como las luchas de remanentes de las guerrillas liberales de Rafael Rangel y dinámicas de corte nacionalista como las que desarrollaban los trabajadores del petróleo.

En ese sentido podríamos decir que el ELN es más primariamente una organización de pretensiones políticas que se entrecruza con dinámicas regionales para tratar de reproducirse. Ahora, evidentemente la evolución del ELN es muy interesante. Primero va a tener un período donde predomina un caudillismo y una estructura jerárquica. Diríamos que ese es el momento en el cual el ELN tiene

clara una estrategia, discutible o no, que era la de adelantar una guerra de liberación nacional para lo cual tenía que, digámoslo así, entremezclarse con movimientos sociales y con movimientos políticos. Es decir el modelo del movimiento 26 de Julio cubano estaba gravitando allí en la cabeza de ese ELN inicial. Esto en los años 60s parcialmente lo logra con el Frente Unido del sacerdote Camilo Torres y con la influencia sobre el movimiento universitario de la época. Luego viene el período de la gran crisis, después de la derrota militar y política de Anorí, donde prácticamente está al borde de su extinción; luego tiene una tercera etapa en la cual se reconstituye. Sin embargo, esos altibajos del ELN me parece que es importante no pasarlos rápidamente porque mostrarían una organización con una gran capacidad de reproducirse y, en esa medida, probablemente la posibilidad de estar renaciendo a partir de eventuales derrotas.

En esa tercera etapa se reconstruye justamente negando lo primero. Por eso la estructura que asume después es una estructura muy de tipo confederal, una estructura con débiles mecanismos de mando efectivo y con una gran lentitud en la toma de decisiones internas. Allí diríamos que se prioriza el dirigente conciliador antes que el caudillo y podríamos decir que, de alguna manera, el ELN pareciera estar atrapado en eso que fue muy importante en su concepción inicial: lo político y lo militar. Porque por tratar de combinar las dos cosas no ha podido desarrollar adecuadamente un ejército, es decir lo militar, porque los ejércitos son por esencia organizaciones jerárquicas y disciplinadas y tampoco consolidar una organización política, porque las organizaciones políticas son de participación, de democracia, y para nada jerarquizadas.

Podríamos decir que en esa tercera etapa la estrategia se ha centrado en el control de poderes locales y regionales mostrando una buena capacidad de adaptación a transformaciones institucionales como la de la descentralización y, de alguna manera, tratando allí de incorporar, por lo menos parcialmente, experiencias internacionales como la salvadoreña del llamado doble poder.

Desde el punto de vista militar podríamos decir que el ELN desde finales de los 80s pareciera abandonar la prioridad de cons-

truir fuerzas militares regulares, tipo batallón, para lo cual las llamadas compañías serían una base y pareciera que su preocupación se centra más en desarrollar y expandir frentes en áreas geográficas nuevas. Eso explica la presencia en los últimos años de frentes en Cundinamarca, Tolima, Nariño, entre otras regiones. Es decir, de alguna manera, tomando distancia de la tradición inicial muy santandereana del ELN.

Ahí me parece que hay un elemento interesante a plantear en términos de debate y es que yo no estoy muy seguro pero creo que hay pistas en el sentido de que hay una gran confusión en relación con la región del Magdalena Medio: se confunde una zona histórica para el ELN con una zona estratégica. Es decir, una cosa es que esa es una zona histórica pero pareciera que el proyecto estratégico del ELN no esté necesariamente centrado en esa región. Su proyecto de expansión parece estar en otras regiones del país y en esa medida me parece muy equivocada la lectura que supone que aparentes derrotas militares allí significan una derrota en el conjunto del país. Ese es un elemento interesante a tener en consideración.

Sus fuentes de financiación fundamentales han sido el secuestro y la extorsión o boleteo y otro tipo de rentas que han captado históricamente de las actividades mineras. Sin embargo, todo indica que es poco probable adelantar una guerra, con todos los costos que esto conlleva (armas, hombres, logística), a partir de estas fuentes tradicionales de recursos.

Evidentemente por esa historia el ELN, en lo que tiene que ver con experiencia de negociación, sabemos que fue muy refractario durante mucho tiempo; el discurso frente al Estado fue un discurso fundamentalista y, en esa medida, se rechazaba cualquier posibilidad de conciliación con su enemigo de clase, como lo consideraba. Podríamos decir que sólo al final de los 80s y en buena medida jalonado por las FARC en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en que por primera vez participa en un proceso de conversaciones en Caracas y Tlaxcala, probablemente más con la idea de sabotear cualquier posibilidad de negociación que de eventualmente avanzar.

Y diríamos que es en los 90s cuando ya la Coordinadora se desvanece, en que el ELN incorpora el diálogo y la negociación como parte de su propuesta política, en el centro del cual está la idea de Convención Nacional, idea cuyo origen, a mi juicio, está más en los diálogos nacionales del M-19 que en otras paternidades posibles. Ahora, evidentemente que durante buena parte del tiempo el ELN no parece ni pensar con cabeza propia ni andar con pies propios, sino que está todo el tiempo pensando en la posibilidad de que su proceso se articule con el de las FARC. En los últimos años esto pareciera estar cambiando y estarse consolidando la idea de una estrategia de negociación independiente de las FARC e independiente de lo que suceda en el otro escenario.

El Estado colombiano podríamos decir que es uno y en eso no creo que tengamos muchas coincidencias, pero que es importante plantearlo, es un Estado que históricamente ha sido cuestionado en su legitimidad. Es un Estado que ha sido cuestionado en su imparcialidad en la medida que no ha sido capaz históricamente de separar los intereses de los grupos o partidos que transitoriamente están en el gobierno de los intereses del conjunto de la sociedad, además de un Estado que ha sido históricamente muy ineficaz en la mayoría de su gestión y también diríamos en buena medida alimentado por las lógicas clientelistas y por las lógicas de corrupción. Sin embargo, me parece que es importante señalar que ese Estado con esas características, ha venido transformándose y tratando de mejorar sus niveles de legitimación. Me parece que el hito de la Constitución del 91 es muy importante en esa dirección sin que haya podido resolver completamente estos problemas.

Desde el punto de vista de las Fuerzas Militares, podríamos decir que en los últimos tiempos, como ya lo señaló aquí el ministro, parecen haberse dado unos cambios muy importantes en el sentido de incorporar dentro de ese proceso de reestructuración innovaciones en la operatividad que empiezan a cambiar de alguna manera la correlación táctica de la confrontación, mas no necesariamente la posibilidad estratégica. Evidentemente mejorar la capacidad de movilidad, el apoyo de la inteligencia técnica particularmente satelital, la respuesta aérea, la profesionalización del Ejército, todo

esto me parece que ha cambiado en los últimos tres años de manera muy importante el curso de la confrontación desde el punto de vista táctico, por ahora.

Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la negociación, evidentemente el Estado colombiano parece no haber aprendido casi nada. Llevamos 20 años pero cada gobierno considera que el inicio de él es como el primer día de la creación, desecha toda la experiencia acumulada del pasado y pareciera estar siempre empezando desde el punto cero. Esto le ha impedido al Estado colombiano contar con una clara estrategia que defina puntos de llegada, objetivos intermedios y de corto plazo y mecanismos y algo mucho más importante, no ha sido capaz de construir un frente interno para afrontar un proceso de negociación.

Podríamos decir que el llamado Frente Común por la Paz y contra la Violencia es un primer paso, todavía precario, en esa dirección. Es un avance importante pero creo que ahí hay todavía una gran debilidad del Estado para poder consolidar, desde el punto de vista político, un frente que permita afrontar de manera eficaz un proceso de negociación, sobre todo con interlocutores como en el caso de las FARC, que han ganado una gran experiencia en cerca de dos décadas de negociaciones en las cuales en general ha habido una gran estabilidad en sus dirigentes, en sus mandos.

Vistas las cosas de esta manera, podríamos decir que estamos hoy en estos dos tipos de proceso de negociación: las FARC en un proceso que claramente podríamos llamar bilateral, con una participación de la sociedad bastante subsidiaria; el ELN con su propuesta de Convención Nacional, que evidentemente tiene todavía muchas zonas grises en términos de sus resultados y de su articulación con una mesa específica. El proceso de las FARC creo que sin duda va a concluir hasta el final del presente gobierno por lo menos, no sólo por una razón de inercia sino además porque pragmáticamente las dos partes consideran que es más costoso romperlo que mantenerlo, así no se avance mucho.

El proceso con el ELN, por el contrario, pareciera que todavía no hay mucha certeza de si logra o no iniciarse en este gobierno y, por ello, diríamos que es un proceso que se mueve con un ámbito

de incertidumbre bastante grande, sobre todo en la medida en que pasa el tiempo, ya que el tiempo del Estado o mejor del gobierno es muy distinto al tiempo de la insurgencia; la insurgencia siempre tiene tiempos de largo plazo, el gobierno tiene tiempos de mucho más corto plazo. En esa medida probablemente también el tiempo político del gobierno empieza a agotarse.

Yo creo que lo que parece visionarse en la perspectiva de los dos procesos es fundamentalmente dos probables escenarios. Uno, el pesimista podríamos llamarlo, pero que creo que es el más probable, es aquel en el cual este periodo de conversaciones con la guerrilla con participación de la sociedad, no logra transformarse en una negociación, es decir en una negociación en serio y, en esa medida, va a ser un período de intercambios importante pero que eventualmente tiene el riesgo de que caiga de nuevo en un recrudecimiento de la confrontación militar.

El otro escenario sería el más optimista y deseable, no parece tan posible pero está allí, es aquel que efectivamente permitiría que el tránsito de este período de conversaciones hacia una negociación formal se dé y en esa medida, digámoslo así, se pueda marcar una ruta clara hacia la terminación de la guerra en el mediano plazo.

Me parece que en esos dos escenarios se van a mover estos procesos y muy probablemente el primer escenario va a estar primando. ¿De qué van a depender uno u otro? Considero que hay varios elementos que pueden influir: en primer lugar, la existencia de una clara voluntad reformista de las élites para dar respuesta audaz a las demandas sociales más relevantes que han sido las que la insurgencia ha convertido en sus banderas, lo que podríamos llamar tomar la ofensiva política frente a la insurgencia; segundo, sin duda, es la posibilidad de que las partes lleguen a una autoconvicción de que no pueden ganar militarmente la guerra y en esa medida prioricen la negociación; tercero, que la sociedad colombiana pueda lograr una posibilidad de presión política muy grande sobre los actores y cuarto, sin duda, la posibilidad de que la comunidad internacional logre presionar de manera eficaz a los distintos actores del conflicto.

En síntesis, me parece que los actuales procesos de negociaciones, de conversaciones para ser más precisos, están de alguna manera atrapados entre la inercia y la incertidumbre.

•

JUAN GOSSAÍN

Muchas gracias, profesor Alejo Vargas, por su exposición. El Alto Comisionado de Paz, doctor Camilo Gómez, me ha dicho que va a necesitar un poco más de 20 minutos para exponer sus planteamientos y yo le he dicho que si va a contarle todo, estoy de acuerdo. Doctor Camilo Gómez, tiene la palabra.

*LA VISIÓN GUBERNAMENTAL
SOBRE EL PROCESO DE PAZ*

*CAMILO GÓMEZ
Alto Comisionado de Paz*

No se si llegemos al punto de contarlo todo pero por lo menos la idea es tratar de contar lo que más se pueda y en medio de esta presentación voy a tratar de ser más bien práctico y no teórico. No quiero y espero no acabar haciendo algunas divagaciones de índole académica o teórica, sino tratar de contarles un poco en la práctica y en el terreno, cómo es que se desarrolla el proceso de paz, las implicaciones y las dificultades que tiene y los avances.

El punto de partida creo que es una afirmación que se hacía hace algún momento en cuanto a que el panorama era muy complejo. Evidentemente. El panorama en el caso del conflicto colombiano es tal vez el más complejo. Muchas veces quienes estamos encargados de este tipo de actividades vemos con preocupación cómo se simplifican al máximo las cosas y resulta que definitivamente es muchísimo más complejo el tema de lo que todo el mundo alcanza a imaginarse. Hace algunos días y por fortuna algunas de las personas que están aquí me han oído esa pequeña historia, en una reunión con uno de los grupos asesores, específicamente con el profesor Fisher, de Harvard, el mismo profesor hacía una mención que me causó curiosidad y es que en ese círculo de análisis de problemas de negociación hoy el caso colombiano es considerado el más difícil dentro de los esquemas conocidos en el mundo. Tenemos dos grupos guerrilleros con los cuales se están iniciando procesos. Procesos separados en este momento. Dos procesos con características distintas, dos grupos que como se mencionaba anteriormente tienen posiciones opuestas, tienen disputas internas, tienen encuentros armados y naturalmente tienen niveles de des-

precio el uno con el otro. Tenemos el problema del narcotráfico, y de autodefensas, y como en todos los países, tenemos el problema de delincuencia común. Frente a la complejidad de ese escenario, naturalmente, los desarrollos nunca van a ser fáciles y nunca van a ser rápidos.

Si uno hace un alto en el camino y hoy mira hacia atrás, vale la pena preguntarse en qué estábamos antes de iniciarse los procesos. ¿En qué estábamos hace dos años y medio, tanto en el tema de la paz como en el tema de la guerra?

Estábamos enfrascados en un panorama de lucha contra el narcotráfico de pronto con algunas características distintas, veníamos de la época de los dos grandes carteles; estábamos enfrascados en una situación militar substancialmente diferente de la que hay hoy, creo que no son gratos los recuerdos para nadie de las circunstancias militares de dos o tres años hacia atrás; estábamos frente al tema de la paz en cero diálogos, algunos avances y acercamientos en el caso del ELN pero sólo con la sociedad civil, no con el Estado ni con el gobierno, el gobierno estaba aislado de las determinaciones y de las reuniones con el ELN por la misma posición de este movimiento; las FARC estaban en este momento también sin posibilidades de diálogo aunque habían hecho el acto de la entrega de los soldados que tuvo en su momento un importante valor, pero ahí quedo todo. Es decir, en la paz no había mayores opciones, en la guerra teníamos serios problemas, el tema de las autodefensas estaba en un punto sustancialmente. Hoy en el panorama militar, el señor ministro de Defensa creo que hizo una amplia explicación al respecto, estamos en un escenario nuevo y estamos avanzando en dos procesos de paz. Uno con el ELN, siendo ésta la primera vez que este grupo avanza en un proceso de negociación con el Gobierno de manera independiente a otros grupos. El ELN ha hecho manifestaciones claras de querer avanzar. Solamente el hecho de la liberación de más de 60 soldados, policías y agentes del DAS y otras como por ejemplo, en acuerdos sobre la infraestructura eléctrica o la infraestructura petrolera; temas que han sido ya mencionados, aún no tratados, porque la negociación no ha empezado. Entre los puntos y la definición esa sí ya

clara de que el primer punto de la agenda va a ser todo lo relacionado con el DIH, con los temas derivados de él como el secuestro y los que afecten la población civil.

Estamos en un proceso con las FARC, desde el 7 de enero, que ha tenido altibajos y está en las circunstancias que más adelante voy a mencionar con la idea inicial de que definitivamente creo que la posición de hoy es mucho mejor que con la que iniciamos el proceso, sin decir que todo está hecho o que no haya problemas. Los hay y son muchos, hay muchos obstáculos y la idea obviamente es buscar las formas para superarlos definitivamente.

La otra pregunta que uno se hace es la de si habremos ganado algo con el proceso de paz. Es decir, ¿los procesos de paz habrán servido para algo? Esa es la pregunta más común. Es que todavía secuestran. Es que todavía atacan pueblos. Sí, eso pasa. Las acciones violentas todavía existen, pero si uno ve los procesos de paz un poco más allá de los hechos de la guerra, va a encontrar un contexto político diferente. Aunque no es muy buena la comparación, para efectos prácticos se podría hablar de pérdidas y ganancias. Creo que es un buen momento para hacerse la pregunta: ¿ha ganado el Estado algo, han ganado los ciudadanos algo, hemos ganado políticamente, internacionalmente? Internamente, ¿hemos ganado en materia de conciencia sobre los problemas del país, el común de la gente habrá ganado algo? Definitivamente creo que sí.

Creo que el Estado, no sólo el gobierno, el Estado en su conjunto ha ganado, creo que el país en lo internacional ha ganado muchísimo, creo que hemos ganado en la conciencia de la dificultad y la complejidad del conflicto en Colombia, aunque todavía a nivel común de la gente es aterrador ver el aislamiento, la apatía frente al tema. Este definitivamente no es un tema que se pueda resolver sólo a nivel de un grupo de negociadores o a nivel del gobierno, sino que en él tiene que participar una enorme cantidad de colombianos. Creo que en ese caso hay todavía muchos que aún no lo están haciendo como debería ser.

¿Habrá entendido también el país lo que implica el problema de la guerra, lo que implican una solución política y una negociación? Me parece que en ese punto hay mucho camino por andar todavía.

Pero además estamos en una negociación en medio del conflicto, que como ustedes bien saben, tiene unas características todavía más complicadas. Negociar y sentarse a negociar con la guerrilla al día siguiente de que acaba de tomarse un pueblo, o al día siguiente de que ha hecho un secuestro masivo, o al día siguiente de que ha hecho cualquiera de los actos que a diario comete, no es sencillo. Mucha gente, permítanme también a lo largo de la exposición introducir pequeños detalles de la vida diaria del proceso, se aterra que al llegar al Caguán o al Sur de Bolívar, uno se salude cordialmente con los guerrilleros, los abraza y se vea una sonrisa en las tomas de televisión, sobre todo al día siguiente de haber sucedido un hecho de éstos. Yo creo que lo único que uno nunca puede perder de vista ni se le puede olvidar al sentarse a una mesa con la insurgencia es toda la historia que ha pasado pero no por eso puede dejar de mirar hacia el futuro.

Para negociar hay que reconocer muchos actos o posiciones de la contraparte, y reconocer es un verbo distinto a arrodillarse. «Reconocer» es un verbo que en la negociación se tiene que utilizar para poder avanzar y no por una sola parte sino que se tiene que utilizar por las dos partes de la negociación. Empezando por quienes estamos en frente de esto, el Presidente que lo lidera, y quienes lo representamos quisiéramos negociar en medio de la paz, pero es que para hacerlo necesitamos no sólo la voluntad nuestra, sino la voluntad de la guerrilla y en la medida en que la guerrilla no quiera y esas sean las condiciones tenemos que avanzar en la búsqueda de las paz. Además, bien lo ha dicho el Presidente Pastrana varias veces, aquí hay un ejército preparado para la paz, pero también preparado para la guerra. Todos lo que queremos naturalmente es que estemos no sólo el ejército sino todos los colombianos más preparados para la paz que para la guerra.

Este proceso tiene dificultades y quiero mencionar algunas. La primera dificultad de fondo frente a la insurgencia y que la beneficia, sin duda es la desunión de este lado de la mesa. No ir a la negociación como un Estado unido con una sociedad unida en torno a unos propósitos comunes es un problema serio. Para la guerrilla qué más agradable que sentarse, como alguna vez lo presentó la

revista Semana, a ver esa descoordinación del Estado donde todos atacamos a todos y la guerrilla allá tranquila, porque claro, en una organización de ese tipo no hay lugar de que no estén unificados y si no lo están nunca lo van a reconocer. Entonces la falta de unidad del Estado tiene que ser un problema que se debe superar y vamos para allá. La paz debe ser una política de paz de Estado. El Frente Común que se ha constituido, ha mostrado una faceta totalmente distinta y que es posible avanzar en un propósito común entre los distintos partidos políticos. Por ejemplo, con el doctor Serpa, que hoy está aquí, tenemos diferencias en algunos temas, en el económico, pero en la paz no hay dudas. Aquí está también Antonio Navarro. Con muchos tendremos diferencias pero en el Frente Común hemos logrado una unidad política fundamental que a la guerrilla la ha puesto a pensar frente a la situación del Estado. Igualmente en el sector empresarial, en el mismo Consejo Nacional de Paz donde están representados toda suerte de estamentos de la sociedad, sindicatos, agremiaciones, ONGs, se ha ido consolidando una unidad que le muestra a la insurgencia una posición mucho más sólida por parte del Estado.

Otro punto y en ese reconozco la posible culpa porque creo que hay mucho campo que avanzar y se mencionó insistentemente en la última reunión celebrada con las FARC y los movimientos políticos, es la falta de pedagogía en las implicaciones que tiene la negociación política y el proceso de paz. Hace falta pedagogía, hay desconocimiento de puntos críticos que se deben enseñar, porque es un proceso nuevo. No es una negociación común y corriente ni se puede ver como una simple negociación. Es una negociación con implicaciones políticas y toda negociación política de esta naturaleza requiere de un enseñanza para la población, se hace necesario que el colombiano común tenga claros los conceptos que rigen la salida negociada con la guerrilla.

Cuando se llega a la mesa con la insurgencia hay otros problemas que generan enormes complicaciones. Temas, por ejemplo, como el de la corrupción. Es absolutamente imposible y nadie va a poder defender el tema de la corrupción en los niveles que se dan en el Estado. Ese punto es un obstáculo para la legitimidad de

cualquier gobierno que se siente frente a la insurgencia a negociar o replantear políticas de índole social.

El tema del paramilitarismo, de los grupos ilegales de autodefensa, es sin duda la más complicada debilidad del Estado. Hoy por hoy y así lo decía el general Tapias en unas declaraciones muy recientes, éste es el peor problema que el Estado colombiano va a enfrentar en unos pocos años. El problema del paramilitarismo no se debe ver simplemente como el enemigo de la insurgencia. No. Creo que si hay algo que está debilitando las instituciones colombianas a fondo, empezando por las fuerzas militares, es este fenómeno. Si hay algo que debilita la democracia colombiana, definitivamente es el paramilitarismo. ¿Cómo va a creer alguien que un fenómeno de éstos puede reemplazar a las instituciones o reemplazar al Estado mismo? Eso es absolutamente imposible. No tiene ninguna posibilidad de defensa y la posición genera un debilitamiento en la medida en que muestra a las instituciones más debilitadas y al Estado en la posición de que, de acuerdo a la argumentación de la guerrilla, si no pudo defender a la gente, tampoco puede dejar que a la gente le dé por defenderse sola montando unos grupos totalmente al margen de la ley. El fenómeno del paramilitarismo creo se debe convertir en materia de análisis, seguimiento y estudio, se deben crear unos niveles de conciencia mucho mayores de los significados que tiene su existencia y su nivel de afectación al proceso de paz. La obligación del Estado es combatirlos, repito, atacar al paramilitarismo no por un acuerdo con la insurgencia. Y no sólo por las fuerzas militares sino por la sociedad toda.

Creo que gran parte de la causa del problema está también en la sociedad. En gentes de la sociedad que han considerado que en vez de apoyar a las fuerzas militares es mejor apoyar a este tipo de grupos ilegales de autodefensa y eso lo que le ha hecho es daño al Estado, a las fuerzas militares y paradójicamente acaba en fortalecimiento de la insurgencia.

Otro gran problema de los procesos tiene que ver con el tema del narcotráfico. El narcotráfico como el enemigo principal de la paz, no me cabe duda, que ha generado en Colombia de tiempo atrás el mayor daño que se haya podido conocer. El narcotráfico

no sólo por la financiación de la violencia, sino por lo relacionado con la corrupción y con el debilitamiento de los valores, es hoy el gran ganador del problema de la guerra. Si en un escenario, que puede que hoy suene un poco soñador, de llegarse muy pronto a todos los acuerdos de paz y que se alcanzara un acuerdo de paz general en el país y no hubiera más guerra, ¿quién sería el gran perdedor? No sería nunca el Estado, ni los ciudadanos, tampoco los grupos insurgentes porque habrían obtenido resultados de la negociación, el gran perdedor sería definitivamente el narcotráfico. Porque al narcotráfico no le importa dónde está. Si está con unos o con otros, lo que le importa es obtener las utilidades del negocio. Ni siquiera se puede hablar del problema del narcotráfico desde el punto de vista de los cultivos ilícitos porque creo que nadie ha conocido nunca a un campesino cultivador de coca rico. Un pequeño cultivador de coca rico no existe. El narcotráfico es el gran enemigo de la paz.

Aquí hay varios periodistas de diferentes medios de comunicación que tal vez no coincidan conmigo y no estoy tratando con lo que voy a decir, de hacer una defensa anticipada. Pero quiero decirles que en el país, la crítica destructiva prevalece sobre la constructiva y en esto de los procesos de paz sería mucho más grato y constituiría un mayor aporte oír más que críticas sueltas, buenas ideas para solucionar los problemas. Sin desconocer, por supuesto, que las críticas siempre hay que tenerlas en cuenta.

Sería muy grato oír no solamente las críticas destructivas sino también las constructivas, valga la pena mencionar, las posiciones frente a la zona de distensión o a la eventual zona de encuentro.

Los problemas que le endilgan al proceso se han generado más por la zona que por el desarrollo del proceso mismo. Sin que yo diga que la zona es un paraíso también tengo que decir que ha permitido muchas cosas, ha permitido entre otras, que el Estado reafirme la soberanía.

La Corte Constitucional en una sentencia de finales de enero de este año, lo mencionaba. La creación de una zona de distensión no es la entrega de territorio a la insurgencia, ni mucho menos, es la reafirmación más clara de soberanía porque la zona depende de

la voluntad del Estado no de la voluntad de ningún grupo insurgente. La Zona de Encuentro, por ejemplo, en el sur de Bolívar hoy es un imperativo de soberanía del Estado. Cuando un grupo al margen de la ley como las autodefensas dice que no va a dejar hacer la zona, ¿qué puede hacer el Estado? Ejercer la soberanía.

Muchas veces se han exagerado problemas de la zona y repito sin dejar nunca de admitir que los tiene y que se ha trabajado en solucionarlos y si se siguen presentando tendremos que solucionarlos. Nunca voy a dejar de hacer ese reconocimiento porque sería tratar de tapar el sol con las manos. A pesar de los problemas la zona ha permitido avances y seguramente una vez se dé la del ELN también los va a permitir.

Quiero referirme a tres puntos que tienen que ver con ambos procesos para entrar ya a los últimos avances de manera individual en el caso de las FARC y en el del ELN a propósito de las noticias que han aparecido en el día de hoy.

En los dos procesos hay unos elementos comunes que vale la pena mencionar. El reconocimiento político es uno, la vinculación de distintos sectores de la sociedad es otro y la presencia internacional, que creo que con los últimos sucesos merece una serie de comentarios especiales.

El reconocimiento político es aparentemente y en un principio se vio así, un elemento formal para el inicio de los diálogos. La ley 418 decía: «aquellos grupos a los que se les reconozca el carácter político...», pero me parece que ese reconocimiento político es realmente el hecho más importante para el proceso de paz. Sin él simplemente no es posible que se desarrollen las conversaciones entre el Estado y un grupo insurgente. Es un reconocimiento político que además no solamente se da por la expedición de un simple decreto, eso es la parte formal. El reconocimiento político se ha dado de distintas maneras, incluida, por supuesto, la visita del Presidente Pastrana a Manuel Marulanda. Un reconocimiento como el que los embajadores hacen al estar reunidos y sentados en la mesa con la guerrilla y el reconocimiento político que a diario mucha gente acaba haciendo así sea de manera involuntaria, mencionando y tratando los temas que tienen que ver con la insurgencia.

Pero en este campo a mí me preocupa que a veces se cree que el reconocimiento político, más que una ventaja, es un problema. Creo que la guerrilla ha cometido el tremendo error de ir abandonando poco a poco o de ir extraviando por el camino, varios de los ideales políticos que pudieron tener en un principio. La historia ha demostrado que hoy ninguna lucha armada tiene una justificación política. Eso puede que la insurgencia no lo crea, pero nada justifica un secuestro, ni la toma de un municipio ni mucho menos la muerte de una persona inocente a nombre de un ideal político, más cuando algunas de estas ideas ya están revaluadas en el mundo entero.

Como ustedes saben, el reconocimiento político le otorga a la guerrilla un estatus pero también le impone una serie de obligaciones. El accionar de los grupos insurgentes debe corresponder a ese estatus. Esto no va a ser de un día para otro, pero poco a poco los ha ido llevando a tener ese nivel de responsabilidad política al cual queremos que lleguen algún día para convertirse en actores «políticos» sin armas.

Ese reconocimiento político a las FARC y el ELN es claro además porque marca la diferencia con los demás grupos que no lo tienen y que seguramente no lo pueden tener. El reconocimiento político va ligado a la vinculación de sectores de la sociedad a los procesos. Valga la pena mencionar cómo, a diferencia de algunos de los procesos centroamericanos, donde el sector privado nunca se vinculó, el empresariado colombiano está vinculado desde el primer día que se inició el proceso de paz. Está aquí el doctor Nicanor Restrepo, que fue precisamente a nombre del sector privado, durante varios meses uno de los voceros del Gobierno Nacional junto con la doctora María Emma Mejía.

Permanentemente el sector privado ha estado presente y hago énfasis en el sector privado porque cuando existe una agenda social y económica a discutirse que involucra a este sector y a los sectores sindicales, no se entendería que no estuviesen participando activamente en este tipo de actividades. Creo que la vinculación del sector privado ha marcado una pauta interesante para las dis-

usiones y espero que cada vez fortalezca más su participación en el proceso de paz.

También la vinculación de otros sectores sociales: el sindical, que ojalá fuera más activo que hasta el momento, y el de los medios de comunicación, que son un elemento que afianza el desarrollo de los dos procesos. Procesos sin participación no llevan a nada. Procesos con participación se solidifican más rápido, se hacen más legítimos y reafirman el concepto de Paz de Estado.

Finalmente, la presencia internacional en los procesos marca una diferencia fundamental. No se trata de empezar a ver en Colombia los cascos azules ni la intervención militar norteamericana que se imagina la guerrilla. Obviamente esta posibilidad no está en la mente del Gobierno colombiano ni en la de ningún Gobierno. La presencia de la comunidad internacional tanto en el caso de las FARC como en el del ELN es la prenda de garantía, entre otras cosas del cumplimiento de la palabra de las partes. Cuando cualquiera de los dos grupos insurgentes dice algo frente a la comunidad internacional, sabe de la responsabilidad que adquiere. Igualmente, cuando suceden hechos coyunturales que en el contexto nacional es complicado dejar de lado, la presencia internacional ayuda a superarlos.

Por tanto la presencia internacional en los procesos con ambos grupos ha sido positiva, creo que siempre será una valiosa ayuda y en la medida que avancemos se incrementará.

Con las FARC más difícil, el ELN mucho más abierto en su posición de aceptar esta participación desde un principio. El grupo de los cinco países amigos del proceso del ELN y ahora el grupo de cinco países más que se suman para desarrollar todos los elementos de la verificación creo que son muestra clara de esto.

La gira internacional que hicimos con las FARC marcó la primera pauta de participación internacional en este proceso de paz. Y ha venido marcando otras. Esa visita fue precisamente la que generó la primera audiencia internacional y ahora viene una etapa nueva en la que no solamente se hará una nueva reunión para analizar exclusivamente el tema del proceso, sino que queda constituido un grupo de diez países que va a hacer un acompañamiento permanente al proceso de paz con las FARC. Toda ayuda de la comunidad

internacional en el proceso de paz afianza, consolida y va a permitir sin duda solucionar muchos inconvenientes que se presentan.

No quiero referirme a la gran historia del proceso de paz con las FARC. Simplemente quiero hacer un recuento de las etapas. Se inician los contactos y dentro de los primeros seis meses del gobierno se desarrollan todos los mecanismos, el reconocimiento político, la zona de distensión, se instala una primera etapa el 7 de enero del 99, etapa que culmina entre el 2 y el 6 de mayo. El 2 de mayo con la reunión del presidente y Marulanda en un momento en que el proceso estuvo terminado, entramos nuevamente a recuperar la conversación y el proceso pasa a la etapa de negociación; se define tres o cuatro días después la Agenda Común acordada y se pasa a la etapa propiamente de discusión de la agenda que posteriormente se suspende por las discusiones de la comisión de verificación internacional de la zona. En octubre se instala la mesa de negociación como tal. Entre noviembre y enero se desarrollan los primeros nueve comunicados y acuerdos iniciales en donde vale la pena resaltar el que tiene que ver con el primer punto de la agenda: la metodología de la negociación.

Lamentablemente a ese tipo de acuerdos no se le ha dado un realce de la dimensión que tienen pero está acordada una metodología para negociar que describe con precisión, por ejemplo, qué pasa cuando hay acuerdos, qué pasa cuando no los hay, qué pasa si no llegamos a un acuerdo total, cómo podemos avanzar en los temas. Acuerdos sobre divulgación y sobre participación. En fin, hay un paquete de acuerdos procedimentales que se logran en más o menos tres meses. Viene la etapa del viaje y empieza la de las audiencias públicas que han mostrado algunas facetas interesantes del proceso y de las posiciones de la insurgencia que ha utilizado ese escenario para hacer política. A mí eso no me disgusta porque prefiero mil veces a la insurgencia haciendo política que combatiendo y la prefiero mil veces frente a un micrófono que disparando.

Después de esa etapa viene el proceso del congelamiento durante tres meses antes de entrar al acuerdo de Los Pozos. Curiosamente, en esos tres meses logramos unos avances y unos niveles

distintos que no se habían logrado antes. En los tres meses del congelamiento la interlocución cambia, pasa de una mesa de negociadores a Manuel Marulanda y lo mismo de manera simultánea en el caso del ELN la interlocución cambia también a Nicolás Rodríguez, «Gabino», que es el máximo comandante. Entonces en diciembre nos encontramos en una etapa en donde los interlocutores son los dos máximos comandantes negociando o avanzando en discusiones que tienen que ver con el proceso.

En la etapa del congelamiento se avanza no solamente, como se pensó, en la discusión del acuerdo humanitario sobre soldados y policías enfermos, sino que se adelanta mucho más en temas que tienen que ver con el conflicto directamente. Se da por ejemplo, a manera de anécdota, una de las discusiones más intensas sobre el tema del secuestro. Tres o cuatro sesiones discutiendo durante varias horas el tema del secuestro. Con uno de los expertos, como le decía yo, que era el Mono Jojoy, con Marulanda, con Reyes, unas discusiones amplísimas. Hemos logrado hablar de todos los temas. Hoy no hay un solo tema sobre el cual no se pueda hablar de una manera abierta y directa con las FARC y lo mismo con el ELN.

Viene después de esa etapa el desarrollo del Acuerdo de Los Pozos y la invitación del Presidente a participar en la reunión del 8 de febrero. Cuando se produce la alocución del Presidente del 31 de enero, fecha del vencimiento de la zona, en la que se hace la prórroga por algunos días para hacer la invitación, creo que se generan dos hechos muy importantes que tampoco han sido muy bien analizados.

El primero, la posición del Presidente en la que formula una invitación a las FARC a entrar a compartir responsabilidades políticas en los cuerpos colegiados o en otras áreas de la política, naturalmente en las condiciones lógicas para hacer política; y la segunda, el Presidente plantea entrar en el tema agrario. Además se da otro hecho muy curioso que quiero mencionar con un par de ejemplos y es cómo las FARC dan un reconocimiento absoluto al Presidente. Sobre esto vale la pena contar otra pequeña historia. El Presidente pronuncia su discurso el 31 de enero a las 7:30 de la mañana. Pasa todo ese día y no hay reacciones de las FARC. Pasa

el primero de febrero, no se sabe nada, incluso confieso, no hay ninguna interna comunicación con las FARC (habitualmente todos los días tenemos dos o tres comunicaciones.) En ese momento como Gobierno, estábamos jugando una carta definitiva.

Algún periódico y ya hice el regaño, tituló: «inminente la prórroga del despeje», cuando en el gobierno lo que estábamos discutiendo era el «no» despeje. Las circunstancias eran realmente complejas, el proceso estaba en un punto crítico, tal vez el más crítico de todos. Al tercer día, el 2 de febrero en las horas de la tarde, se concreta una reunión del comisionado con Marulanda en la que íbamos a discutir la propuesta del Presidente. A la propuesta le quedaban dos días. Me dijo: «Le tengo una respuesta. Venga mañana y la comentamos». En efecto me voy para allá y llego a donde estaban Marulanda, Jojoy y Joaquín Gómez y les digo: «¿Van a hacer la reunión?» Y Marulanda me dice: «Sí, aceptamos la reunión pero la hacemos el 8». Le contesté: «Mire, Manuel, yo creo que el 8 es demasiado tarde, la propuesta del Presidente es para el 6». Y Marulanda me dice: «Perdón, Camilo, déjeme explicarle que el que viene es el Presidente de los 40 millones de colombianos, viene el Presidente de todos nosotros y yo no puedo improvisar para recibirlo». Ese es el argumento que Marulanda utiliza y que es un argumento que definitivamente tiene un contenido mucho mayor que el que aparece a primera vista. Es un reconocimiento absoluto del jefe guerrillero al Presidente, eso no sería extraño si ellos mismos no se sustentaran permanentemente en la negación del Estado y de este sistema democrático.

Se llega a la reunión con la idea muy clara de que en ésta podía continuar o terminarse el proceso.

En esa reunión se plantean todos los temas y se llega al Acuerdo de Los Pozos que ustedes conocen con claridad. Un acuerdo que ya se ha ido cumpliendo, que tiene como primer elemento la ratificación de la voluntad de proseguir en el proceso de negociación, y que involucra la creación de la famosa comisión para acabar el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. Menciono esto porque en un acuerdo con la insurgencia es muy fácil hablar sobre el tema del paramilitarismo pero con las FARC acabó siendo

muy difícil tratar la posibilidad de disminuir la intensidad del conflicto, aparte obviamente del tema del cese al fuego y las hostilidades, al que quiero entrar ahora, pero quedó plasmada la posibilidad de entrar, en esa comisión, a la disminución de la intensidad del conflicto. Se descongelan los diálogos, se menciona la importancia de retomar los temas de la agenda y el del cese al fuego y las hostilidades, lo cual ya se empezó a hacer, desarrollo del acuerdo humanitario y los mecanismos tanto para que las negociaciones no se vean interrumpidas, para vincular a la comunidad internacional y para que haya mucha más información sobre la zona de distensión.

Estamos hoy discutiendo el cese al fuego y las hostilidades. La semana pasada y antepasada se dieron las primeras rondas de discusiones con las dos propuestas que han sido hasta el momento propuestas cerradas de la mesa. Y han sido de esta manera porque es tal vez la discusión más compleja de todas. Un cese al fuego sin cese de hostilidades es absolutamente imposible, a mi modo de ver. Un mal pacto en estas materias puede ser el elemento que le permita a la insurgencia un mayor fortalecimiento militar. Pactarlo para fortalecer a la insurgencia no se puede hacer. Pactarlo para que se rompa por cualquier hecho intrascendente no se puede hacer y pactarlo sin que se involucre el tema de las hostilidades a la población civil tampoco se puede hacer. El tema no va a ser ni corto ni fácil de discutir. Estamos avanzando en la discusión para ponernos de acuerdo sobre qué entiende cada parte por «hostilidades» y qué entiende cada parte por «cese al fuego» para poder llegar en unidad de criterios a algo realmente que permita avanzar en lo que a todo el país le interesa.

Sobre la disminución del conflicto hemos tratado ya aspectos y ya dentro de las FARC hay una discusión sobre el uso de cilindros, las tomas de carreteras, el reclutamiento de menores y naturalmente sobre el tema del secuestro, que aunque no puedo decir que se está avanzando en un acuerdo, dentro de este contexto del cese de las hostilidades tiene que ir evolucionando. Tanto la comunidad internacional como el gobierno lo han planteado constantemente.

Se está discutiendo el primer punto de la agenda. Se están empezando las discusiones en firme con base en todo el material que se recogió en las audiencias. 22 mil personas han participado, con más de 1.500 propuestas que deben ser analizadas por las FARC y el Gobierno, para entrar a firmar, espero que muy pronto, los próximos acuerdos. Del Acuerdo de Los Pozos se deduce una conclusión: la etapa que viene es la de «concretar» acuerdos en el primer punto de la agenda.

Hay otro tema que es el que se refiere al Acuerdo Humanitario sobre soldados y policías enfermos. Este es un tema que no está en la mesa, está tratándose directamente con Marulanda. Las FARC arrancaron con tres propuestas: una de canje, otra de canje por una sola vez y una última de sacar a los soldados, policías y guerrilleros a otro país. Tres propuestas que fueron desechadas por el Gobierno. Las FARC entonces aceptan hablar de un «Acuerdo Humanitario».

En lo que hemos avanzado es en un acuerdo basado en el DIH, lo que constituye un adelanto importante. Está basado en el principio de que no hay igualdad en el número de guerrilleros que saldrán con el número de soldados y policías. Tampoco se trata de buscar que sean guerrilleros señalados por las FARC sino los que estén enfermos. Naturalmente esto traerá consigo la liberación unilateral a la que ya se comprometieron públicamente las FARC de más de 50 de los militares. Tendríamos en ese campo, no un canje, eso no existe, sino un acuerdo basado en el DIH por primera vez con las FARC, y habría participación del CICR, de la comunidad internacional.

Esto no tiene nada que ver con el tema de la beligerancia, que es un tema que siempre ronda por ahí. El tema de la beligerancia no existe hoy en el contexto internacional ni tiene mayor interés para nada.

Para terminar, muy rápidamente, les quiero contar en qué estamos con el ELN. Hemos logrado avances importantes frente a la zona. Hay un grupo de países amigos, hay un reglamento para la zona, hay un reglamento para la verificación en donde un grupo de otros cinco países están trabajando para que el componente inter-

nacional de la verificación de esa zona esté activo y presente muy rápidamente. Se ha sostenido un amplísimo intercambio de opiniones con representantes de la comunidad, se han llevado a cabo acciones militares de enorme importancia porque la presencia y la influencia de los grupos paramilitares es grande, clara y reconocida expresamente en entrevistas por los medios de comunicación. Existe un compromiso para que no haya un efecto perjudicial para la población. Además existe el compromiso de la comunidad internacional para canalizar los recursos para la paz, inversión social en la zona, sin embargo el fenómeno del narcotráfico y el del paramilitarismo, sin duda, tienen una influencia enorme en esa zona y eso habrá que resolverlo pronto.

Creo que los dos elementos del proceso con el ELN están planteados: la Convención Nacional y la mesa de negociación. En un principio la Convención Nacional fue planteada de tal manera que ni siquiera el Estado aparecía; hoy está el Estado. Aparte de la Convención Nacional está la mesa de negociación que de manera simultánea tratará los temas; hay avances y discusiones sobre el tema energético, sobre el tema petrolero, DIH, el secuestro en donde ellos han propuesto el famoso tema de la financiación sobre el cual no me espanto sino que creo que hay que estudiarlo y convertirlo en una oportunidad para ir más allá simplemente de la financiación de un grupo insurgente. En concreto, existe con el ELN una posibilidad clara de avanzar, una determinación tanto del grupo guerrillero como del gobierno de concretar el cronograma que implicaría que se dé la zona de encuentro e iniciar las conversaciones. Tengo la certeza de que vamos a poder con el ELN superar los inconvenientes que se han anotado en la comunicación conocida hoy. Vale la pena mencionar simplemente que lo que se han suspendido son los contactos y no el proceso.

•

JUAN GOSSAÍN

Después de oír al doctor Camilo Gómez me permito informarles, para seguir ejerciendo el papel del reloj humano, que tengo en la

lista de las personas que nos pidieron su derecho al uso de la palabra, antes del receso anterior, siete personas que se habían anotado. A la 1:30 p.m. deberemos haber terminado esta primera parte. Luego, si las matemáticas no fallan, y en previsión de uno o dos más, disponemos de tres minutos por cada intervención. Si alguien quiere plantear, como dije, preguntas a los expositores para aclarar pensamientos y puntos de vista, perfectamente, pero en ambos casos, exposición individual o que incluya pregunta a uno de los participantes, cada uno dispone de tres minutos.

RAFAEL ORDUZ, SENADOR

Juan, creo que lo que quiero plantear lo puedo hacer en la mesa número 6 de narcotráfico y paz, de manera que lo haré allí, debido a las limitaciones de tiempo.

LEÓN VALENCIA, ANALISTA POLÍTICO

Creo que Alfredo Rangel le ha aportado mucho al debate sobre la paz y la guerra en Colombia rescatando esta mirada clásica de la correlación de fuerzas como variable principal para analizar un proceso, variable muy importante. Eso sacó el debate de la cosa puramente ideológica, que es más o menos la idea de Enrique Gómez. Eso tiene, más o menos, diez años ya de irse superando como debate puramente ideológico. Pero el análisis de Rangel es insuficiente en dos puntos importantes y es que hay otras variables y no sólo la correlación de fuerzas.

Una de las variables muy importantes en este proceso son las aspiraciones y los intereses de la guerrilla, las aspiraciones de ellos, surgidas de este conflicto. Tanto, que ellos han hecho incluir en los documentos oficiales la idea de que es un conflicto social y armado. Y eso también hace diferencia con los otros procesos. Las aspiraciones políticas del M-19 y de las otras fuerzas quedaron bien claras acá. Que eran aspiraciones ligadas más al terreno de las transformaciones políticas y de jugar papel político. Y esto hace cuenta de un debate profundo que hay sobre los cambios. Ahí hay,

entonces, digo yo, un círculo vicioso que, también, fue expresado acá. La guerrilla plantea que es necesario que se den los cambios para cesar el accionar armado y ese es digamos el esfuerzo tanto del ELN como de las FARC. Y en segundo lugar, en la dirigencia del país hay la idea de que primero cesen las armas para arrancar los cambios. Tenemos que encontrar una manera de romper ese círculo vicioso, arrancando los cambios y buscando un camino para parar la guerra de manera simultánea. Esa es una primera anotación.

La segunda, es que hay otra variable que ayuda a explicar un poco toda esta guerra, y es una variable cultural. Las guerrillas colombianas son mesiánicas, hay un mesianismo muy fuerte. Eso explica también que hayan durado 40 años en una guerra en la que muchas veces han estado derrotadas. Es que el ELN y las FARC, el ELN especialmente pero las FARC también, las FARC eran una fuerza más de apoyo a una fuerza política que era el Partido Comunista, no era una gran fuerza militar, sólo se ha crecido militarmente en los últimos 10 años. Y eso explica ese mesianismo que es una variable también importante, cultural. Entonces yo no creo, como dice Rangel, tomando sólo la idea de la correlación de fuerzas, que esta guerra con el ELN se pueda terminar tomando solo esa variable. Ahí hay un mesianismo muy grande y hay también unas aspiraciones y unos intereses. Igual en las FARC, miren, una cosa que es una radiografía de la psicología de las FARC, es la carta que hace unos tres años, con motivo de los 33 años de las FARC, le envía Manuel Marulanda a la militancia, y ahí cuenta los 5 hitos más importantes de las FARC, en toda la historia. Es una carta muy personal y dice: de los 5 hitos, 3 de los hitos más importantes de las FARC son niveles de reconocimiento y en el momento que ha sido reconocido como actor político, incluso por fuera de negociaciones, establece como un hito incluso en el gobierno de Samper, el reconocimiento político que se le hace. Entonces sobre esas bases culturales, sobre esa base de mesianismo, sobre esa base de unos intereses que están expresos sobre todo en la parte social y sobre la base de correlación de esas tres variables, es que se puede hacer un balance más objetivo de

qué acercamiento tenemos a la paz o de qué acercamiento tenemos a una confrontación más generalizada en Colombia.

JUAN GOSSAÍN

Muchas gracias, señor Valencia.

LUIS EDUARDO GARZÓN, PRESIDENTE DE LA CUT

No, yo después de la sintética intervención del doctor Camilo dejo para más tarde opinar.

JOSÉ MIGUEL NARVÁEZ, REPRESENTANTE DE FEDEGAN

Simplemente es una acotación de carácter académico pero que, con mucha intención constructiva, quisiera hacerle al doctor Marco Palacios cuando toca la revisión histórica de los procesos de paz. Estamos hablando en alguno de sus análisis de los incumplimientos generados tanto por parte de las FARC como del Estado, y él tocó algo muy importante en el acuerdo de 1986 cuando el gobierno, en el punto 7, firmó que, de acuerdo con lo establecido en la constitución y las leyes, otorgará a la Unión Patriótica y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar en forma idéntica a las demás agrupaciones políticas su acción, tanto proselitista como electoral. Dentro de la exposición que nos hiciera, deja verse alguna sindicación por parte del doctor Palacios hacia los agentes del Estado por este incumplimiento. Pero en aras de la academia, es importante que toquemos la contraparte. Y el único punto en donde hay una comunión entre los acuerdos del 84 y del 86 está dado en el artículo 2 del acuerdo del 84 y el artículo 4 del 86 que más o menos dice así: las FARC condenan el secuestro, la extorsión y el terrorismo como atentados que son contra la libertad y la dignidad humanas.

Entonces, independientemente de no querer hacer una simbiosis histórica, teórica, sino más bien llegando a la parte práctica, nos vamos dos años después y llegamos al artículo 4 del 86 en donde las FARC condenan no solamente el secuestro, la extorsión y el

terrorismo sino «el chantaje, boleteo, narcotráfico, atentado personal, desaparición de personas, tortura, justicia por mano propia, provenga de donde provenga, y reclutamiento de adeptos con fines militares». Al escuchar al doctor Serpa cuando habla de que es importante hacer una retrospectiva pero mirando hacia adelante, yo sí quisiera rescatar una parte de la intervención del doctor Camilo Gómez, aunque quedó muy tangencial, de la posibilidad futura de acuerdos humanitarios. Quizás hubiera sido interesante escucharle un poco más a profundidad su visión al respecto, porque es preciso que en aras de no volver a repetir los errores cometidos en el pasado, pues tengamos en cuenta los incumplimientos por parte de las FARC en este punto común a los acuerdos del 84 y del 86 para que yo pudiera entender, con todo respeto, doctor Camilo, que sería mejor negociar que no negociar.

CARLOS LOZANO, DIRECTOR DEL PERIÓDICO VOZ

Hay varios aspectos que hubiera querido tocar pero en aras de la brevedad vamos a tratar de sintetizar tres aspectos fundamentales. Lo primero que yo creo es que hay que reconocer, pese a todas las contradicciones y a las vicisitudes del proceso de paz, que en la actualidad hay un proceso de paz que está en marcha, o digamos dos procesos de paz para incluir el del ELN, que aparece ahora bastante afectado con los últimos acontecimientos. Lo que es bien distinto a lo que ocurrió en anteriores gobiernos en que realmente se privilegió lo que algunos consideran que debe hacerse todavía, que es poner el acento en lo militar para llevar a la guerrilla en condiciones de derrotada a la mesa de negociación. Yo creo que esa estrategia del Estado ha fracasado y por lo tanto lo más importante es el acento en la solución política y en el escenario de la mesa de diálogo y negociación y de los procesos de paz.

El segundo aspecto que yo quiero señalar es que hay que reconocer en definitiva el carácter político y social del conflicto. No es suficiente darles el reconocimiento político a los insurgentes, en este caso a las FARC y al ELN, sino que hay que ir más allá en el sentido de privilegiar el contenido de la negociación que es lo que

está en las agendas, tanto en la agenda común del Caguán como lo que ha planteado el ELN que va a ser la temática de la convención nacional a fin de tener instrumentos para el diálogo y la negociación con el gobierno. Esto es importante porque no es suficiente hablar de la voluntad de paz del Estado o de la voluntad de paz de los sectores que llamamos el establecimiento, sino también tiene que haber una voluntad de cambio. Quizás, el doctor Rafael Pardo alcanzó a tratar algo de eso, de la necesidad de negociar poder, no se trata tampoco de una revolución por contrato o algo por el estilo sino de generar las condiciones para que las fuerzas insurgentes puedan trabajar en un proyecto político determinado. Hay experiencias en el pasado. A veces se dice que no es bueno poner el espejo retrovisor y no mirar hacia atrás, pero la historia está llena de experiencias en el sentido del exterminio de fuerzas alternativas al tradicionalismo que quisieron actuar en la vida política y no me estoy refiriendo solamente a la Unión Patriótica. Antes de la UP hubo también otras expresiones, otras fuerzas políticas que fueron obligadas a desaparecer del escenario. El tercer aspecto lo trató Alejo Vargas. Parece que es importante señalarlo y es la necesidad de desnarcotizar el proceso. Creer que acabando con el narcotráfico se puede acabar con la guerrilla es por lo menos una ingenuidad. Me quedan otros aspectos pero se me terminó el tiempo.

MAX ALBERTO MORALES, DIRIGENTE LIBERAL DEL MAGDALENA MEDIO

Más que una pregunta es una reflexión que yo quiero hacer aquí para responderle al doctor Enrique Gómez Hurtado. Yo pienso que esas actitudes reaccionarias no son buenas. Sembrar más odios no es bueno. Creo que nosotros estamos aquí para generar puntos de coincidencia, precisamente para ponernos de acuerdo todos los colombianos y no nos sigamos matando. Respecto a lo de la zona de despeje para el ELN, yo estoy de acuerdo, como dirigente liberal del Magdalena Medio, en que nosotros, o el pueblo colombiano, le de una oportunidad al ELN.

La pregunta que me hago es qué gesto de paz han tenido las FARC con el gobierno ante toda la generosidad que ha tenido el

presidente Pastrana. Pienso que el ELN entregó 60 soldados y eso para mí es muy importante. Pienso que aquí lo que tenemos que tratar es evitar que nos sigamos matando, de evitar muertes y que el único culpable de todos estos actos que ha tenido el ELN, de terrorismo, de secuestro de aviones, de secuestros en las iglesias, ha sido el presidente Pastrana. Creo que es el único culpable porque él desde un principio los menospreció y ahí el presidente se equivocó. Yo pongo como ejemplo el proceso de paz del M-19. Cuántas muertes no nos hemos ahorrado, cuántos actos terroristas no nos hemos ahorrado si el M-19 no hubiera sido en un momento noble para llegar a un proceso de paz definitivo con un gobierno pasado. Entonces yo pienso, doctor Enrique Gómez, que aquí lo que debemos es, vuelvo y repito, llegar a generar puntos de coincidencia para que nos pongamos de acuerdo todos.

*CARLOS LLERAS DE LA FUENTE, PRESIDENTE-DIRECTOR,
EL ESPECTADOR*

El Alto Comisionado ha logrado lo que no han podido hacer los enemigos de la libertad de prensa con El Espectador en los últimos 52 años, callarlo. Gracias.

ANA TERESA BERNAL, DIRECTORA DE REDEPAZ

Quisiera que pensáramos en esta reflexión que el problema de la paz o de la guerra en nuestro país pudiéramos concebirlo como la oportunidad de cambio para todos y todas, y no como la oportunidad para la guerrilla o para el gobierno. Creo que está claro que tenemos un conflicto interno, muy complejo, con muchos actores, y por lo tanto situaciones de violencia y deterioro de la violencia, terribles. Pero si asumimos que esta crisis que tenemos la podemos convertir en una oportunidad para la reconstrucción de la nación, va a ser importante.

Me parece un poco triste ver que en ninguna de las intervenciones se hizo un reconocimiento del esfuerzo y la labor de la sociedad civil, a la que le dicen la llamada sociedad civil con cierto desprecio,

ha hecho en Colombia. Creo que escenarios tan importantes desde el mismo diálogo nacional, la Asamblea Nacional Constituyente y toda su movilización, las Semanas por la Paz, los mandatos de los niños y de los adultos por la paz, los 10 millones de votos que pidieron la solución política del conflicto armado y que le dieron un marco de legitimidad al candidato presidencial Andrés Pastrana, hoy presidente, y todas las campañas, incluso la que hicimos en diciembre en defensa del diálogo con muchos sectores de la sociedad civil, no se reconocen en este escenario. El proceso de paz, el proceso de diálogo, no es proceso si no es con la sociedad. Me parece que sería importante que vislumbráramos en el horizonte que la paz es la posibilidad de cambio para todos y todas. Además de esto, considero que el modelo de negociación en medio de la guerra cada día se agota más. Porque creo que aunque es difícilísimo hablar del cese al fuego, y de soluciones en el sentido de respeto a la población civil, se hace imperativo que haya resultados en esto para que el proceso tenga confianza, no de las partes solamente, sino de la sociedad en su conjunto. Yo creo en la paz y creo en la reconciliación como el horizonte para este país. Pero no es solamente la reconciliación con la insurgencia, no es la reconciliación solamente de la insurgencia con el Estado, es la reconciliación de todos los colombianos y colombianas.

ALEJANDRO REYES, ANALISTA POLÍTICO

Yo quisiera discrepar, muy cordialmente, pero muy radicalmente del análisis que nos presentó Alfredo Rangel sobre las diferencias de las FARC y del ELN y sobre las distintas lógicas de negociación. Yo creo que ese escenario que dibuja Alfredo Rangel sería, de ser cierto, el peor escenario posible de negociación para las FARC, puesto que el ELN se iría por la vía rápida de negociación y las FARC quedarían solas como la única guerrilla del mundo renuente a negociar; y por lo tanto sería mucho más costosa para las FARC la negociación.

Yo creo que eso sí era un peligro real para las FARC, hace unos 8 o 10 meses, o un año, y eso explica que hubiera habido confron-

taciones territoriales con muertos de lado y lado entre las FARC y el ELN en regiones como el Magdalena Medio, como Arauca, como el nororiente antioqueño y en Urabá. Resulta que hace 6 meses no aparece ninguna confrontación con muertos, entre las FARC y el ELN. Eso quiere decir que el conflicto entre las dos guerrillas, básicamente ya está resuelto. Y está resuelto porque las FARC entraron en apoyo del ELN en las regiones en donde éste estaba perdiendo territorios a manos de las autodefensas y hoy hay combates conjuntos entre las FARC y el ELN contra las autodefensas en varias regiones del país.

Por lo tanto, yo pienso que el escenario optimista de dos tipos de negociación diferentes con las dos guerrillas es un falso escenario en el cual no vamos a avanzar mucho con ninguna de las dos. Yo sí pienso que, en uno o dos años, otra vez, vamos a regresar al ciclo en el cual vamos a pensar que tenemos que negociar con una coordinadora guerrillera; no pensar en una negociación barata y rápida con una y costosa y lenta con otra. ¿Porqué? Porque en el campo de batalla, me parece a mí, las dos guerrillas han resuelto enfrentar conjuntamente tanto al ejército como a las autodefensas y, sobre todo, para las dos guerrillas el verdadero escenario de guerra que existe es el de que comenzó una intervención militar norteamericana con el Plan Colombia y, en consecuencia, lo que ellos están afrontando realmente es eso, una intervención norteamericana y no unos intentos de negociación en el Caguán y en el sur de Bolívar.

Ahora, ¿cómo se enfrenta una invasión americana?, y comienzo a pensar un poco con la lógica de las FARC. ¿Cómo podrían ellos confrontar eso? Usando el mismo expediente que se ha usado durante 35 años de guerra de guerrillas. El Estado concentra fuerzas para aislar y bloquear a la guerrilla en algún lugar, y ahora va a comenzar a suceder en el Caquetá, en el Putumayo y en Guaviare con las fumigaciones, y por lo tanto la guerrilla dispersa radicalmente la guerra hacia otras regiones mucho más estratégicas para Colombia que el Putumayo y, por lo tanto, obliga a reorientar el esfuerzo de guerra, levantar los cercos en el sur, negociar lo de la fumigación de cultivos. Y mi percepción, leyendo los signos de

cómo se mueve la geografía de la guerra, es que el verdadero escenario de confrontación va a ser el Magdalena Medio, con epicentro en Barrancabermeja. Barrancabermeja sí es la yugular económica de Colombia por la gasolina, es absolutamente estratégica a nivel nacional y por lo tanto no es el Putumayo, no es Caquetá, no es el Guaviare, no son las zonas de cultivo, no es el pretexto de que pueda aspirar a reducirse la producción de drogas con unas fumigaciones; al contrario, ese es un abono para la metástasis de los cultivos ilícitos y eso lo sabemos todos.

Entonces me parece a mí que en la verdadera confrontación van a estar unidas las dos guerrillas y el Estado, cuando se dé cuenta de esto, va a estar obligado a reconocer esa situación y negociar con un conjunto de la guerrilla una sola cosa. Finalmente, es obvio que la guerra y la negociación son las dos caras de la misma moneda y en ese sentido estoy, también, de acuerdo con Rafael Pardo en cuanto que la verdadera negociación es una negociación sobre el poder. El territorio, los recursos y la población son elementos constitutivos del poder, pero no nos debemos olvidar finalmente de eso.

ALFREDO RANGEL, ANALISTA POLÍTICO

Creo que en estos asuntos, más que pensar con los deseos, es mejor atenerse a la realidad de los hechos. Yo también esperarí que, ojalá, las dos guerrillas convergieran en algún momento en una única mesa de negociación, en un solo proceso de negociación. Me parece que eso facilitaría un acuerdo de paz global, integral. Sin embargo, sigo considerando que, a pesar de que haya habido unas acciones conjuntas recientes entre las FARC y el ELN en algunos sitios del país, como en el Magdalena Medio, para rechazar a los grupos paramilitares, me atengo a las innumerables declaraciones que han hecho dirigentes de las FARC acerca de la improbabilidad de una conjunción de esfuerzos en la negociación o en la unidad para una única negociación. Sigo creyendo que las enemistades, las animadversiones de ambos grupos imposibilitarían esa opción de una sola negociación y un solo proceso de paz. Desafortunadamen-

te los hechos siguen demostrando esa realidad y, ojalá, yo también haría votos para que se hiciera esa unidad para facilitar el proceso y hacerlo menos complejo.

LUIS FERNANDO RAMÍREZ, MINISTRO DE DEFENSA

Muy corto, simplemente para darle unos minutos de tiempo adicionales al profesor Reyes. Yo quiero preguntarle lo siguiente. En el argumento que está elaborando, de que las FARC y el ELN están trabajando coordinadamente, ¿usted lo que nos está advirtiéndolo es sobre el peligro de que la zona de distensión en el Magdalena Medio sea usada por las FARC?

ALEJANDRO REYES, ANALISTA POLÍTICO

En el departamento de Santander hay 4 frentes del ELN y hay 6 de las FARC. En el sur de Bolívar hay más fuerza de las FARC que del ELN. Eso es realmente dependiente de lo otro, o sea, del escenario grande de confrontación armada. Ahí es donde está la zona de encuentro del sur de Bolívar, en el escenario de negociación. El escenario de negociación es dependiente y subordinado al escenario grande de la confrontación armada.

En eso, me parece a mí que es mucho más importante lo que se está discutiendo sobre Plan Colombia, las posibles modificaciones que se logren introducir en Washington sobre Plan Colombia, el énfasis de cultivos o no cultivos, y el componente militar. Si la guerra tiene una tendencia a trasladarse al Magdalena Medio, tenemos que prepararnos para pensar en una zona de encuentro a diferencia de la del Caguán, una zona de encuentro que va a estar dentro del epicentro del escalamiento de la confrontación. En ese caso cambiaría muchísimo el carácter de la zona de encuentro y sería una zona de encuentro para las dos guerrillas, sería un refugio para las dos guerrillas, en medio de una confrontación escalada en el Magdalena Medio. Pienso que hay que considerar esto con mucha seriedad, porque puede ser un escenario muy probable.

ALEJANDRO SANTOS, DIRECTOR DE LA REVISTA SEMANA

En primer lugar les pido a los expositores que, por favor, se ciñan estrictamente a los 20 minutos del tiempo de sus intervenciones.

La primera sesión de esta tarde toca uno de los temas, y quizás el más controvertido en este proceso de paz, y es el tema del Plan Colombia: próximas etapas y efecto potencial sobre el proceso de paz. Esta mañana el ministro Ramírez comentaba que este año y el próximo iban a ser claves en la implementación de ese Plan Colombia. Qué más oportuno que Gonzalo de Francisco, quien está a cargo de la implementación de parte de este Plan, delegado expresamente por el presidente de la república, lo ilustre. También tenemos, en la sesión de la tarde, a dos ilustres expositores: el señor Michael Shifter, vicepresidente de políticas del Diálogo Interamericano de Washington y cuyos escritos e intervenciones en la capital norteamericana han influido bastante en las políticas que se toman hacia Colombia; y el señor Luis Eduardo Garzón, líder sindical y político que ha hecho públicas ciertas críticas frente al tema.